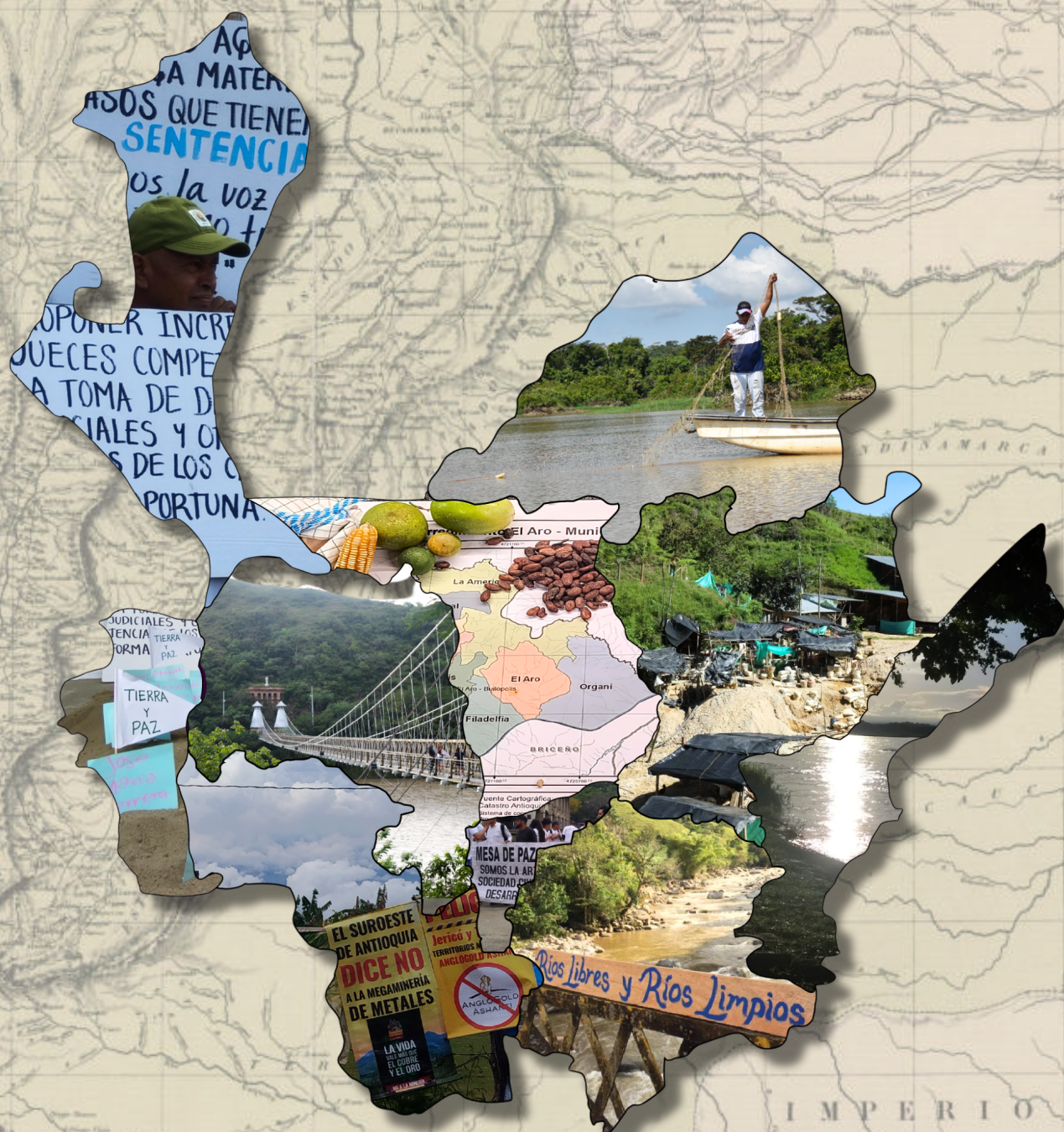


Nº 26



Septiembre de 2025

Presidente

Carlos Zapata Cardona

Junta Directiva

Marleny Cardona Acevedo

María Soledad Betancur Betancur

Diego Herrera Duque

Luz Dary Ruiz Botero

Hernando Loaiza Bastidas

Carlos Hernán Montoya Suárez

Comité Editorial

Carlos Andrés Zapata Cardona

Daniela Sánchez Romero

Pablo Daniel Barrios Giraldo

Autores - Investigadores

Angie Katherine Sánchez Triana

Carlos Andrés Zapata Cardona

Gloria Xiomara Mendoza Arroyave

Juan Esteban Ríos García

Lina María Olaya Urbina

Pablo Daniel Barrios Giraldo

Pedro Andrés Cano Betancur

Ricardo Cruz Baena

Yolima Bedoya Jaramillo

Compilación y edición

Ricardo Cruz Baena

Corrección de Estilo

Daniela Sánchez Romero

Coordinador del Observatorio

Pablo Daniel Barrios Giraldo

Diseño y diagramación

Daniela Sánchez Romero

ISSN: 2011-9623

Para esta publicación, el IPC ha recibido apoyo económico de Misereor. Los contenidos de esta publicación son responsabilidad exclusiva de los autores, en ningún caso comprometen a los financiadores.



©INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN

Calle 52 No. 49-28

Edificio La Lonja, piso 11

Medellín

Celular: +57 3007403668

ipc@ipc.org.co / www.ipc.org.co

Introducción

Para la edición N°25 del Boletín del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación – IPC se presenta una caracterización subregional de Antioquia sobre el conflicto armado, los procesos de movilización social y los tránsitos entre procesos de paz en diversos territorios del departamento.

Este ejercicio de recopilación de información y análisis posibilitó acercarse a una descripción breve sobre los contextos de conflictividad desde las subregiones de Antioquia durante los últimos años. En este texto se ve reflejado cómo el trasegar de la guerra, la expansión del capital, sus modelos de desarrollo, y las diferentes acciones de resistencia y resiliencia social han permitido que hoy el departamento se piense en nuevas maneras de construir territorio con una mirada social, cultural, política y ambiental.

En esta recopilación de fuentes humanas, bibliográficas e históricas, se presenta una radiografía de las trayectorias que ha tenido el conflicto armado en las diferentes subregiones de Antioquia, diferenciando las dinámicas de los actores armados desde la confrontación y control territorial, las problemáticas ambientales que afectan a los territorios y el impacto que tuvo la guerra en las subregiones de Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Occidente, Suroeste, Oriente, Norte, Urabá y Valle de Aburrá.

A pesar de que existe una amplia bibliografía sobre el conflicto en esta región del país, **este informe pretende realizar una descripción de las trayectorias y las características particulares de cada subregión,** sin quedarse en las generalidades con que se ha descrito el conflicto para toda Antioquia, incluso para el noroccidente del país.

Esta es una apuesta institucional por **la construcción de paz y la gestión de la democracia.** Con ella también pretendemos poner en la agenda pública la discusión sobre las distintas políticas y leyes que continúan perpetuando la guerra, sobre la transmutación de los grupos armados, la concepción del territorio y los usos del suelo que, bajo el mal llamado desarrollo, están generando impactos ambientales y ecosistémicos, que terminan agudizando las desigualdades sociales en las comunidades de Antioquia.

Así mismo, queremos dejar a los y las lectoras, la posibilidad de pensarse otras economías y otras formas de construir territorio, pues encontramos que en las nueve subregiones existen grandes proyectos económicos como la extracción de minerales, la construcción de centrales hidroeléctricas o de puertos, y las economías criminales, de las cuales se benefician intereses del capital.

Esta apuesta por recopilar y reconstruir los contextos subregionales también es un reconocimiento a los procesos sociales y organizativos, las juntas de acción comunal, los movimientos campesinos, juveniles, indígenas y afrodescendientes que, durante años, han hecho frente a la violencia a partir de la palabra, el combite, el arte, la movilización pacífica y el diálogo como única arma para hacer contraposición al diferente.

Tabla de contenido

Subregión del Bajo Cauca	4
<i>Caracterización Territorial</i>	4
<i>Movilización social y violencia armada: expresiones de la conflictividad en la subregión</i>	6
Panorama actual de la movilización social	7
<i>Dinámicas del conflicto en la subregión: actores y temporalidades</i>	8
Las guerrillas y su presencia en el Bajo Cauca	8
<i>Paramilitarismo y recrudecimiento de la guerra</i>	9
<i>Desmovilización y proceso de paz: rearme, reincidentes y disidencias</i>	11
Subregión del Magdalena Medio antioqueño	13
<i>Caracterización territorial</i>	13
La subregión como piloto de búsqueda de la verdad	16
<i>Actores armados y dinámicas del conflicto en la subregión</i>	16
Trayectorias y temporalidades de la violencia	16
El bloque de poder contrainsurgente	18
<i>Desmovilización, reconfiguración, reacomodo</i>	21
Subregión del Nordeste	25
<i>Caracterización Territorial</i>	25
<i>Dinámicas del conflicto en la subregión: actores y temporalidades</i>	27
Las guerrillas: instrumentalización del malestar laboral	27
La intensificación de la violencia paramilitar	29
<i>La guerra reciclada que vive el Nordeste</i>	31
Subregión del Norte	33
<i>Caracterización Territorial</i>	33
<i>Movilización ciudadana: breve caracterización</i>	35
<i>Dinámicas del conflicto en la subregión: actores y temporalidades</i>	36
Llegada de las guerrillas y disputas con las huestes paramilitares	36
<i>Grupos postdemovilización, disidencias y crimen organizado: panorama actual de la violencia en el Norte antioqueño</i>	40
Subregión del Occidente	42
<i>Caracterización Territorial</i>	42
<i>Participación y movilización ciudadana</i>	44
<i>Actores armados y dinámicas del conflicto en la subregión</i>	46
Llegada de las guerrillas y disputas con las huestes paramilitares	46
Subregión del Oriente	50
<i>Caracterización Territorial</i>	50
<i>Caracterización de la movilización social: preludio de la disputa armada</i>	52
<i>Dinámicas del conflicto en la subregión: actores y temporalidades</i>	54
Agitación social e ingreso de las guerrillas	54

La expansión y consolidación paramilitar	56
<i>Ejecuciones extrajudiciales: crímenes de la fuerza pública en un contexto de guerra</i>	57
<i>Viejas disputas, nuevos órdenes</i>	58
<i>Un segundo momento de movilización social</i>	59
Subregión del Suroeste	61
<i>Caracterización territorial</i>	61
<i>Dinámicas del conflicto en la subregión: actores y temporalidades</i>	63
Movilización social: intensa agitación sociopolítica y represión armada	63
Auge y declive de las guerrillas y consolidación del aparato contrainsurgente	65
<i>Escenario postdemovilización y postacuerdo</i>	67
<i>Panorama actual de la movilización y las conflictividades sociales</i>	69
Subregión de Urabá	71
<i>Caracterización Territorial</i>	71
<i>Ciudadanías y acción política: la persistencia de la resistencia en medio de un orden violento</i>	73
<i>Actores armados y dinámicas del conflicto en la subregión</i>	74
La ruta de la violencia sociopolítica: el anhelo insurreccional de las guerrillas	74
El paramilitarismo y la lógica de la acumulación por desposesión	76
La desmovilización paramilitar: la reingeniería criminal de manos de las AGC	77
<i>La consolidación de la transformación territorial del Urabá antioqueño</i>	79
Subregión del Valle de Aburrá	81
<i>Caracterización Territorial</i>	81
<i>Movilización ciudadana: entre la resistencia y la resiliencia</i>	83
<i>Actores armados y dinámicas del conflicto en la subregión</i>	84
Los albores de la violencia en Valle de Aburrá	84
Antecedentes: Las bandas juveniles y/o galladas	85
Las milicias populares insurgentes	85
Los carteles de la droga y las oficinas de cobro	87
El paramilitarismo y la guerra contrainsurgente	88
<i>Mesa de diálogo con el Gobierno nacional: la esperanza de la Paz Total</i>	89
<i>Las víctimas del Valle de Aburrá: principales hitos de hechos victimizantes</i>	91

Subregión del Bajo Cauca

Caracterización Territorial

El Bajo Cauca es una subregión ubicada al norte de la cordillera Central, limita por el norte con el departamento de Córdoba, con el Parque Nacional Natural Paramillo y La Mojana; por el oriente con el Sur de Bolívar y los municipios ubicados sobre la serranía de San Lucas; por el sur limita con el Nordeste antioqueño (Anorí, Amalfi, Segovia); y al occidente limita con el Norte antioqueño (Yarumal, Ituango, Valdivia, Angostura y Campamento).

Ocupa un área de 8485 kilómetros cuadrados que constituye el 13.5 % del departamento, que la convierte a su vez en la tercera subregión más grande de Antioquia después de Urabá y el Norte. **Administrativamente se divide en seis municipios: Tarazá, Cáceres, Caucaasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí.** De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE (2018), el Bajo Cauca cuenta con una población estimada para 2024 de 268 000 habitantes aproximadamente. De ellos, el 63 % reside en áreas urbanas; mientras que el 37 % viven en la ruralidad dispersa. Por lo menos el 2 % se reconoce como indígena (con predominio del pueblo Zenú, aunque también habitan Emberá Chamí y Emberá Katío) mientras que el 7 % de la población se autorreconoce como negro, mulato, afro, raizal o palenquero, siendo la tercera subregión de Antioquia con más presencia de este grupo étnico (ver mapa 1).

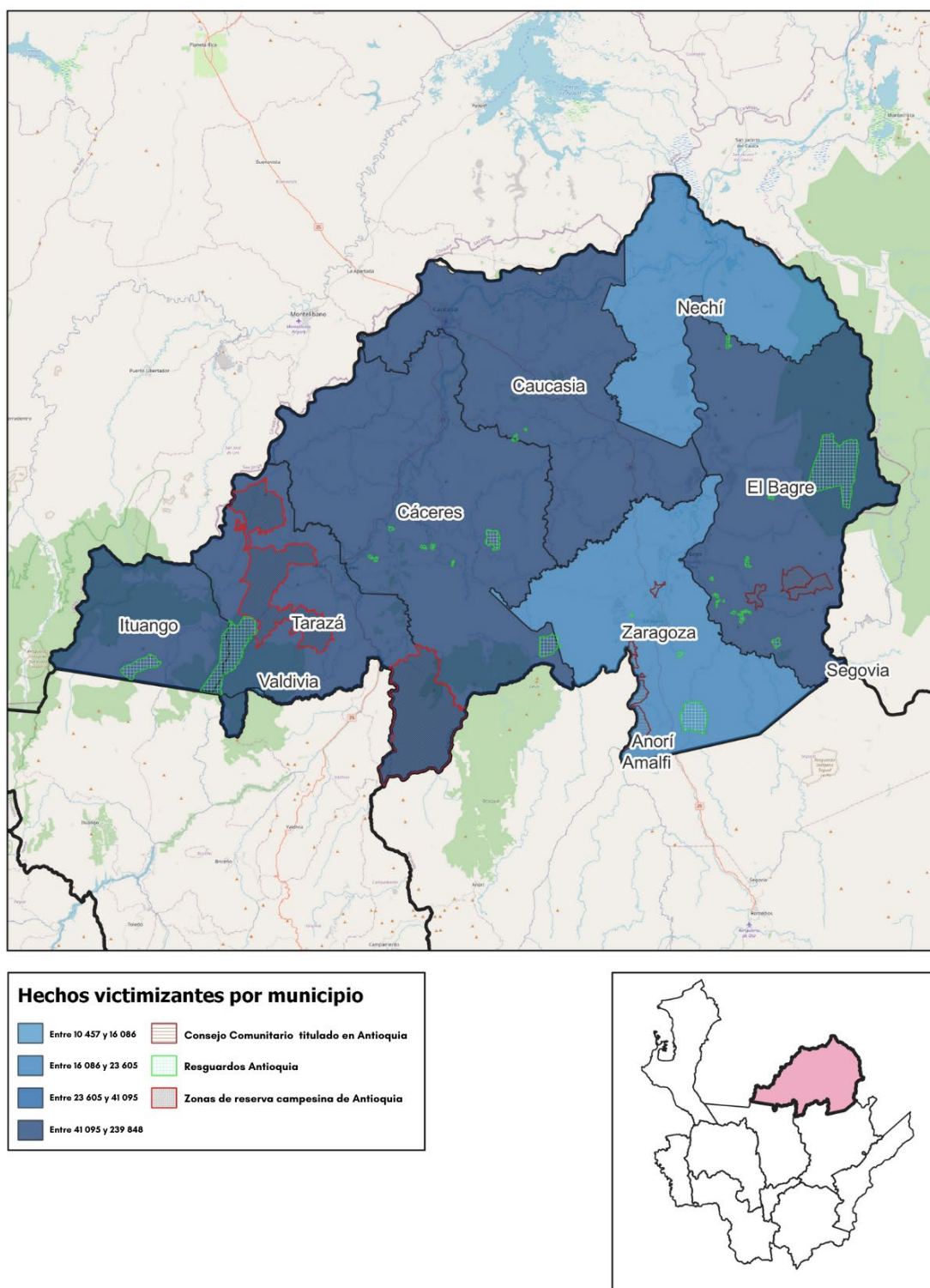
En materia socioeconómica, **cerca del 95 % del territorio está dedicado a la ganadería extensiva y a la minería aurífera.** El Bajo Cauca es el principal productor de oro del departamento¹, mientras que la actividad pecuaria, impulsada por la cría de bovinos, representa un total del 10 % del total del departamento².

Con respecto a la producción agrícola de la subregión, la UPME (2024), teniendo como referencia la información reportada por el Sistema para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA), en 2022, señala que el arroz, la yuca, el plátano y el ñame fueron los alimentos con mayor producción del Bajo Cauca, en donde el arroz representó un 46,2 % del total del departamento, el ñame un 32,12 %, el maíz un 9,87 % y el plátano un 4,04 % (UPME, 2024, p. 116).

¹ Para 2023, la producción nacional de oro fue de 61 032 000 gr, de los cuales, Antioquia aportó 42 086 000 gr (cerca del 68 %). De ellos, unos 18 200 837 gr (un 43,24 % aproximadamente) se extrajeron de los municipios del Bajo Cauca antioqueño, siendo Caucaasia (11 261 768 gr) y El Bagre (5 113 380 gr) los mayores productores. La cifra supera los 15 300 432 gr extraídos de la segunda subregión con vocación minera: el Nordeste antioqueño (Sistema de Información Minero Colombiano -SIMCO).

² El documento *Diagnóstico Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva del Bajo Cauca Antioqueño*, elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME (2024), la actividad pecuaria en el Bajo Cauca está principalmente impulsada por la cría de bovinos, que se aproxima a 316.365 animales, el cual es el mayor respecto de las demás especies, representa el 10 % del total de bovinos del departamento; los municipios con mayor número de bovinos son Caucaasia y Cáceres que aportan 36,3 % y 23,5 %, respectivamente, a la subregión, y 3,6 % y 2,4 %, respectivamente, al departamento.

Mapa 1



Fuente: elaboración propia.

El Bajo Cauca es lo que podría denominarse una **economía de enclave**; es decir, en el territorio predomina con fuerza un sector productivo de naturaleza extractiva (como la minería de oro), controlado a su vez por empresas particulares (o actores ilegales), que no logra integrar la subregión a los circuitos económicos regionales y nacionales. Esto, en lugar de generar beneficios tiene “una alta responsabilidad en la precarización, desempleo y pobreza de la población, arrojada en

su mayoría a una economía de subsistencia” (Zapata, Mendoza & Barrios, 2023, p.7). Tal vez por ello, entre otras razones, la subregión cuenta con los peores indicadores de pobreza y calidad de vida de toda Antioquia³.

Además, El Bajo Cauca hace parte del llamado **enclave productivo Valdivia-Tarazá-Cáceres**, uno de los 15 sitios del país donde la hoja de coca se consolidó como economía ilícita gracias a su permanencia en el tiempo (UNODC, 2023). Según el monitoreo de territorios afectados con presencia de coca realizado por UNODC, **de las 18 000 ha de cultivos ilícitos detectados en Antioquia en 2022, unas 8056 ha estaban sembradas en Caucasia (3.14 ha), Cáceres (2116 ha), El Bagre (1040 ha), Nechí (380 ha), Tarazá (3780 ha) y Zaragoza (749 ha).**

Desde su configuración como subregión, el Bajo Cauca ha sido escenario de alta conflictividad armada, política y social. La **concentración de la tierra** por parte de hacendados ganaderos y empresas mineras⁴, sumado a la poca o nula capacidad del Estado colombiano para gestionar y resolver las múltiples demandas ciudadanas por mejoramientos en la calidad de vida, derivó en un complejo ambiente de agitación política y social que se agravó por cuenta de la instrumentalización de las luchas populares que hicieron las guerrillas y la emergencia de grupos contrainsurgentes que arremetieron contra toda expresión organizativa.

Movilización social y violencia armada: expresiones de la conflictividad en la subregión

Entre 1960 y 1990 se registraron en todo el Bajo Cauca unas **53 acciones colectivas** entre marchas, mítines y paros, (García, 1993a; citada por: IPC, 2021), lo que da cuenta de la capacidad organizativa y de movilización de la subregión.

En 1974 se registró el primer paro cívico en la región. Tuvo lugar el 26 de noviembre en Caucasia. Fue promovido por pequeños comerciantes, ganaderos, transportadores y las JAC del municipio, quienes se articularon para demandar ante la Gobernación de Antioquia intervenciones en el río Cauca que previnieran las constantes inundaciones y mejoramiento en el servicio de electrificación (García, 1993a). En 1979 se registró el segundo paro cívico en el Bajo Cauca antioqueño, esta vez en Zaragoza. Sus habitantes se lanzaron a las calles para demandar ante las autoridades departamentales redes de acueducto, alcantarillado y electrificación. En julio de 1982, los habitantes de Caucasia protagonizaron otro paro cívico, esta vez de 48 horas; reiteraron sus demandas de mejoramiento en la prestación de servicios públicos y acometer obras que impidieran las inundaciones (García, 1993a; citada por: IPC, 2021, p.109).

³ La medida de pobreza multidimensional en el Bajo Cauca tiene porcentajes mayores al 50 % en todos sus municipios, a excepción de Caucasia cuyo rango está entre el 30,1 % y el 40 % (DANE, 2018). Por su parte, el Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) la ubica como la última subregión en calidad de vida para sus habitantes, con un indicador de 26.1 (CTPA *et al*).

⁴ Según el Instituto Popular de Capacitación IPC (2021), de las 848 000 ha que posee el Bajo Cauca, unas 368 000 ha están destinadas para minería, unas 441 000 ha para pastos para ganadería y unas 5000 ha están dedicadas a cultivos de hoja de coca. Tal concentración de tierra se ha convertido en fuente de conflictos entre pescadores, mineros, ganaderos y campesinos.

Pero fue el **paro cívico que tuvo lugar en El Bagre, el 27 de febrero de 1985**, el que marcó un punto de inflexión en la movilización ciudadana del Bajo Cauca. La acción colectiva aglutinó unas 6000 personas provenientes de todos los rincones de este y otros municipios de la subregión, quienes se concentraron en la cabecera de El Bagre⁵.

Los manifestantes bloquearon las vías de acceso al municipio y marcharon hacia la sede de la empresa Mineros S.A. Para frenar el avance de la movilización, la Policía Nacional terminó enfrentada violentamente con los marchantes, dejando un saldo trágico de tres personas muertas, otras 20 más heridas, el hundimiento de un planchón y la quema de una avioneta (ambas de propiedad de la empresa Mineros S.A.), así como el saqueo del comercio del pueblo. Las versiones entregadas en su momento por las autoridades civiles y de Policía responsabilizaron de los hechos violentos a personas infiltradas de las guerrillas del ELN y las Farc-EP, insurgencias que, mediante comunicados emitidos en las fechas previas al paro, manifestaron su apoyo a la movilización (García, 1993a, citada por: IPC, 2021, p. 110).

Para honrar la memoria de los fallecidos, los coordinadores del paro cívico decidieron crear el **Movimiento 27 de febrero**, donde confluyeron liderazgos campesinos, indígenas, afros, las juntas de acción comunal (JAC), así como integrantes de partidos políticos de izquierda, como la Unión Patriótica (UP). **Este espacio de articulación se convirtió en referente de la movilización social y protagonista de primer orden en la vida política en los municipios del Bajo Cauca.** Pero la intensificación de las luchas populares coincidió con la arremetida armada por parte de las guerrillas de las Farc-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se tradujo, por un lado, en una férrea militarización del territorio que impactó negativamente en las comunidades campesinas, afros e indígenas y, de otro, en el inicio de una serie de ataques armados contra los liderazgos sociales perpetrados por los nacientes grupos paramilitares.

Panorama actual de la movilización social

El fortalecimiento de las estructuras paramilitares y, por consiguiente, el recrudecimiento de la confrontación armada que se registró en los primeros años del siglo XXI silenció las expresiones organizativas en el Bajo Cauca. Estas se reactivaron justamente después de la desmovilización del Bloque Mineros y el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio de las AUC. Si en las últimas décadas del siglo XX, las demandas colectivas apuntaban a mejoramientos en la calidad de vida, **para el siglo XXI el centro de la agenda reivindicativa lo constituye el problema de los cultivos ilícitos, la persecución a la minería ancestral y artesanal, la reparación a las víctimas y la correcta implementación de los Acuerdos de paz de 2016.**

Así, la agenda de los cocaleros, de mineros tradicionales, ancestrales e informales; de campesinos sin tierra y sumidos en el más absoluto abandono, y de las víctimas del conflicto armado, terminó impulsando la creación de nuevas organizaciones sociales en todos los

⁵ Los manifestantes planteaban una serie de exigencias que incluían la construcción de un hospital, la construcción de acueducto para las cabeceras municipales de Zaragoza y el recién fundado municipio de El Bagre, escuelas y centros de salud para las zonas rurales, pavimentación de la vía Medellín-Zaragoza-El Bagre, canalización de los ríos Tigüí y Nechí y asistencia técnica, así como acceso a créditos a bajos intereses para comunidades campesinas (IPC, 2021).

municipios del Bajo Cauca antioqueño, **el surgimiento de nuevos liderazgos así como la reactivación de espacios comunitarios que permanecieron silenciados durante los años de ocupación paramilitar**. El interés común que fungió como articulador de las nuevas expresiones colectivas fue la defensa del territorio: el derecho de comunidades campesinas y étnicas de permanecer allí, desarrollando formas de vida acordes con su visión particular de entender, habitar y transformar el territorio (IPC, 2021, p. 126).

Pero, como sucedió 60 años atrás, **las diferentes expresiones asociativas del Bajo Cauca y sus agendas continúan enfrentándose a intereses de actores privados, ilegales y estatales**, quienes poseen visiones diametralmente opuestas sobre el territorio, donde parece no tener cabida los anhelos de las comunidades por un territorio en paz, con justicia social y amigable con el medio ambiente. Estas organizaciones sociales continúan desarrollando su labor en medio de un fuego cruzado proveniente de todos los actores armados en disputa. **Según Indepaz, entre 2016 y 2024 fueron asesinados 62 líderes campesinos, comunitarios, indígenas, sindicalistas y activistas LGBTQ+ en este territorio**⁶.

Dinámicas del conflicto en la subregión: actores y temporalidades

Las guerrillas y su presencia en el Bajo Cauca

A mediados de la década del 60 comenzó a advertirse la presencia de tropas guerrilleras en el Bajo Cauca, particularmente del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el ELN. Estos últimos incursionaron desde el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio para luego asentarse en el Nordeste antioqueño y desde allí se desplegaron a municipios como Zaragoza, Cáceres, Tarazá y a localidades del Sur de Bolívar (IPC, 2021). Por su parte, el EPL venía en proceso de expansión y fortalecimiento desde el sur cordobés, donde tenían sus campamentos y una importante base de apoyo popular (en el Alto Sinú) y desde allí irrumpieron en Dabeiba, Ituango, Tarazá y Caucasia⁷.

Las Farc-EP, por su parte, fortalecieron su presencia en la subregión durante la primera mitad de los años 80. Luego de su VII Conferencia, celebrada en los Llanos del Yari en 1982, las Farc-EP iniciaron un proceso de desdoblamiento consistente en partir un frente en dos para crecer en número. Así, del desdoblamiento del Frente 4 nacieron los Frentes 36 y 37, cuya injerencia se circunscribió a los municipios de Zaragoza, Cáceres, Tarazá y la cuenca de los ríos Cauca y Porce, para el primero; mientras que el segundo operó en El Bagre y toda la zona de influencia de la serranía de San Lucas.

Tras el fracaso del proceso de paz con las guerrillas que lideró el presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), tanto las Farc-EP como el ELN intensificaron sus acciones armadas en el territorio. La ofensiva militar tuvo como hecho particular la articulación de fuerzas insurgentes en la denominada “Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar”⁸. Esto les permitió ejecutar acciones con

⁶ <https://indepaz.org.co/visor-de-asesinato-a-personas-lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-en-colombia/>

⁷ El EPL tuvo presencia importante en la subregión hasta 1991, cuando se produjo su desmovilización como resultado del proceso de paz firmado en el gobierno del presidente César Gaviria (1990-1994).

⁸ Tras el fallido proceso de paz que tuvo lugar durante el gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), el 27 de febrero de 1987, luego de la realización de la 1ª Conferencia Bolivariana, se creó la denominada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que articuló fuerzas insurgentes de las Farc-EP, el EPL, el M-19, el ELN, El Partido Revolucionario de

mayor capacidad de daño. Ejemplo de ello lo constituyen los ataques al centro poblado del corregimiento Puerto Valdivia, de Valdivia, en 1987; y el ataque armado a la estación de Policía de la cabecera municipal de Tarazá, el 10 de noviembre de 1990.

Para contener la arremetida insurgente, el Ejército militarizó los cascos urbanos de Cáceres, Cauca y Tarazá, imponiendo férreos controles a la población que terminaron profundizando el malestar de los habitantes con las entidades estatales. A esto se suma la arremetida violenta contra líderes sociales, campesinos, indígenas y sindicalistas de la subregión por parte de los nacientes grupos paramilitares. En su informe, el IPC (2021) consignó cómo **entre 1985 y 1995 fueron asesinados en el Bajo Cauca antioqueño 33 dirigentes comunitarios, integrantes de partidos políticos alternativos como la Unión Patriótica (UP), y miembros de juntas de acción comunal**, de los cuales “unos 15 fueron atribuidos a ‘grupos armados ilegales no identificados’; mientras otros dos se le atribuyeron al grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) y uno más a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM)” (IPC, 2021, p. 118).

La década de los 90 comenzó con la desmovilización del EPL y la reconfiguración de los principales actores del conflicto armado en el Bajo Cauca. Por un lado, luego de celebrar su VIII Conferencia, las Farc-EP dieron paso a una reestructuración militar que los llevó a crear los bloques, una instancia de coordinación militar y logística que agrupaba varios frentes a fin de tener mayor alcance y control territorial. Así, los Frentes 36 y 37 fueron incorporados al Bloque Noroccidental que tuvo como área de operaciones los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó⁹.

En respuesta, el 1 de junio de 1992, el Ejército Nacional activó el Batallón de Infantería Aerotransportado No 31, Rifles, con sede en Cáceres, que comenzó a ser parte de la Décima Primera Brigada del Ejército, y se convirtió en la punta de lanza de las fuerzas militares en su lucha frontal con las guerrillas en el Bajo Cauca y sur de Córdoba (Cruz B. 2016, p. 26). Aunque las primeras expresiones del paramilitarismo en la subregión datan de 1984¹⁰, fue también por estos años que experimentaron la transformación que les permitió dejar de ser grupos de “limpieza social” que ejecutaba acciones sicariales en veredas y cascos urbanos, para convertirse en ejércitos irregulares bien dotados militarmente y con la firme intención de disputarle, a sangre y fuego, el territorio a las guerrillas.

Paramilitarismo y recrudecimiento de la guerra

Las huestes paramilitares experimentaron un proceso de transformación y expansión en el Bajo Cauca después de la llegada de dos personajes fundamentales en su historia de conflicto armado: Ramiro

los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame. Un par de años después, el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) firmó acuerdos de paz con el M-19, el PRT y el Quintín Lame, mientras que el expresidente César Gaviria (1990-1994) hizo lo propio con el EPL, por lo que la coordinadora sólo quedó integrada por las Farc-EP, el ELN y reductos disidentes del EPL. Este espacio de articulación entre guerrillas operó hasta 1994.

⁹ También hicieron parte del Bloque Noroccidental los Frentes: 5, 9, 18, 34, 35, 47, 48. La creación de estos bloques obedeció al cambio de estrategia militar adoptado en la VIII Conferencia de las Farc-EP (La Uribe, Meta, 1993), donde pasaron de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, lo que implicaba movilizar una tropa considerable de combatientes para asediar y enfrentar al Ejército. (IPC, 2021, p. 166).

¹⁰ Se trató de un grupo de por lo menos 40 hombres armados con escopetas, revólveres y pistolas que operó en Cauca y que fue liderado por Alfonso Fuentes Baranoa, alias “4-1” (Cruz B., 2016, p. 34).

Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”; y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”. El primero, amigo cercano de Henry Pérez y colaborador de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) arribó en 1994. Llegó procedente de Cali, donde se refugió hasta la muerte de Pablo Escobar¹¹. Su intención era reorganizar el grupo de autodefensas que lideró en su momento Alfonso Fuentes Baranoa, alias “4-1”. “Para ello, convoca a ganaderos, terratenientes y mineros de la región para pedirles apoyo en su causa contrainsurgente. De esta reunión nació el nombre con el que se conoció la estructura paramilitar: el Bloque Mineros” (Cruz B, 2016, p. 33).

“Cuco Vanoy” instaló su centro de operaciones en la hacienda Ranchería, ubicada en la vereda Pecoralia del corregimiento La Caucana de Tarazá. Desde allí, coordinó la **ofensiva paramilitar tendiente a disputarle el control territorial a las Farc-EP**, que incluyó incursiones armadas a municipios como San José de Uré, Montelíbano (Córdoba); Tarazá, Cauca, Valdivia, Ituango, Briceño y Campamento; la comisión de masacres¹², campañas de “limpieza social”, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas¹³.

El correlato de esta campaña de terror fue la realización de obras y actividades de beneficio en toda la zona de influencia del Bloque Mineros, particularmente en Tarazá, por parte de “Cuco Vanoy”.

En La Caucana impulsó diversos proyectos productivos; en el corregimiento El Guaimaro construyó una clínica; otra más en el casco urbano. Contribuyó con los hogares de la tercera edad, con parques infantiles y hasta regaló computadores para colegios de las zonas rurales. Todo ello gracias a las cuantiosas rentas derivadas del negocio del narcotráfico, de las cuales, el Bloque Mineros dominó cada uno de los encadenamientos productivos de esta actividad ilegal (siembra, cosecha, producción de pasta y procesamiento de clorhidrato de cocaína). Así, Vanoy Murillo se erigió en despiadado jefe paramilitar, que ordenaba asesinatos, desplazamientos y desapariciones forzadas y, a su vez, en un hombre preocupado por su comunidad, asumiendo para ello funciones propias del poder político (Cruz B., 2006, p. 35).

Al momento de su desmovilización, el 20 de enero de 2006, el Bloque Mineros contaba con 2790 combatientes, había logrado replegar a las Farc-EP hacia el Nudo de Paramillo y ejercía presencia permanente en los municipios de Valdivia, Ituango, Briceño, Peque, Toledo, Anorí, Yarumal, Campamento, Gómez Plata, Tarazá y Cauca. En este último compartió territorio con la otra estructura paramilitar que sembró terror en el Bajo Cauca: el Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar (BCB). Su máximo comandante, Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, llegó al corregimiento Piamonte, de Cáceres, promediando los años 90.

¹¹ Luego que el extinto capo Pablo Escobar le declarara la guerra a Henry Pérez, fundador de las Autodefensas de Puerto Boyacá, colaboradores de esta estructura paramilitar como Ramiro Vanoy buscaron refugio en ciudades como Cali, donde fueron protegidos por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, líderes del Cartel de Cali.

¹² Al Bloque Mineros se le atribuye la comisión de dos de las peores masacres perpetradas en suelo antioqueño: La Granja (11 de junio de 1996) y El Aro (22 al 31 de octubre de 1997), ambos corregimientos de Ituango. Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en 2006 al Estado colombiano.

¹³ Según la Fiscalía de Justicia Transicional (antes Justicia y Paz), unas 7136 personas se acreditaron como víctimas de este bloque paramilitar; de ellas, por lo menos unas 1200 fueron familiares o allegados de personas desaparecidas forzosamente. El propio “Cuco Vanoy” reconoció en estrados que por lo menos unas 800 víctimas de esta práctica atroz fueron arrojadas al río Cauca (VerdadAbierta, 22 de agosto de 2013).

Venía proveniente de Putumayo, donde alternó actividades económicas legales con el tráfico de drogas.

En su momento posó de ganadero e inversionista gracias a la compra de cabezas de ganado y varias propiedades en Cáceres y Cauca. Pero a finales de 1996, mientras se desplazaba por zona rural del corregimiento Piamonte (Cáceres), sufrió un atentado por parte de la guerrilla del ELN, lo que lo llevó a conformar un grupo de seguridad privada. Este grupo sería la **génesis del Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio**, aunque inicialmente se conoció como “Caparrapos”¹⁴ por cuanto la mayoría de sus integrantes eran oriundos de Caparrapí, Cundinamarca.

Para evitar confrontaciones con el Bloque Mineros, en 1997, Vicente Castaño, alias “El Profe”, celebró una reunión en Cauca donde le asignó a Jiménez y su gente el control de la margen izquierda del río Cauca, lo que incluye Cáceres, parte de Cauca y Zaragoza, mientras que a Cuco Vanoy le delegó el dominio en la margen oriental, lo que incluye Tarazá, Puerto Valdivia y Valdivia. El Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio logró mantener un férreo dominio en las localidades de Cáceres, Cauca, Zaragoza, Segovia, Remedios y Sur de Bolívar, bastiones históricos del ELN. Su desmovilización se produjo el 12 de diciembre de 2005, en zona rural del corregimiento Santa Cecilia de Remedios, Antioquia. Ese día, unos 1922 combatientes hicieron entrega de sus armas.

Desmovilización y proceso de paz: rearme, reincidentes y disidencias

Los jefes paramilitares (tanto “Cuco Vanoy” como “Macaco”) **convirtieron el Bajo Cauca en el mayor centro cocalero de Antioquia. Cada uno regulaba, en sus áreas de influencia, desde la siembra de hoja de coca, pasando por la producción de pasta base y su transformación en clorhidrato de cocaína, hasta su almacenamiento y posterior exportación.** La desmovilización de ambos no significó el desmonte de tan lucrativo negocio, situación que rápidamente fue aprovechada por nuevas estructuras armadas integradas por antiguos “paras” desmovilizados, otros que nunca se acogieron al proceso de paz y nuevos reclutas.

Entre 2007 y 2009, tanto la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) como la Defensoría del Pueblo alertaron sobre la presencia de grupos armados en Cáceres, Cauca y Tarazá que respondían ahora a denominaciones como “Paisas”, “Águilas Negras”, “Urabeños”, “Rastrojos”, entre otros. Las disputas entre grupos, las vendettas al interior de estos, las muertes en combate y las capturas por parte de la fuerza pública fueron reacomodando las piezas de este nuevo juego de poder que, para 2011, sólo registraba dos competidores: los “Urabeños”, ahora autodenominados “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)” y “Rastrojos”.

La violencia que protagonizaron estos nuevos grupos, que **disparó los homicidios, las desapariciones forzadas y los éxodos forzados entre 2008 y 2010, se redujo ostensiblemente**

¹⁴ Particularmente sobresalen los hermanos Vinicio, Armando y Erbert Virgues Mahecha, Héctor Edilson Duque, alias “Monoteto” o “28”.

entre 2011 y 2017¹⁵. Lo anterior, según informes de organizaciones no gubernamentales y de prensa de la época, obedeció al pacto celebrado entre las AGC y los “Rastrojos”, donde los segundos se retiraban del Bajo Cauca, permitiéndole a los primeros conectar la subregión con las rutas de exportación de alcaloides en la Costa Norte (VerdadAbierta, 21 de noviembre de 2012; Defensoría del Pueblo, 2018).

Pero la salida de las Farc-EP del territorio, producto de la firma del Acuerdo de Paz (noviembre de 2016), complejizó nuevamente el escenario de conflictividad armada en el territorio. Primero, una disidencia de las AGC¹⁶ denominada “Bloque Virgilio Peralta”, llamado por la fuerza pública como “Caparros”, comenzó a incursionar en áreas de influencia de las extintas Farc-EP. El ELN hizo lo mismo: avanzó a los territorios otrora dominados por los “farianos”. Ambas fuerzas irregulares confrontaron a los “gaitanistas”, estructura que también procuró imponerse como único actor criminal hegemónico en todo Bajo Cauca y Sur de Córdoba.

Aunque su presencia es marginal en el territorio, **la disidencia del Frente 36 de las Farc-EP** también atiza el fuego de una violencia que tiene como trasfondo el control de lucrativas rentas derivadas del narcotráfico y la minería de oro. **El botín en disputa ha atraído incluso representantes de los carteles mexicanos** quienes, en asocio con narcos locales, han procurado controlar toda la cadena productiva de la coca, desde la siembra hasta su procesamiento y exportación (Defensoría del Pueblo, 2018).

Lo anterior ha disparado nuevamente todos los indicadores de inseguridad en la subregión. El registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), muestra que **entre 2017 y 2023 se cometieron en los seis municipios del Bajo Cauca un total de 24 masacres, que dejaron 87 víctimas mortales. Entre enero de 2017 y julio de 2020 se perpetraron 1057 homicidios, mientras que la Unidad para las Víctimas (UARIV) señaló que, en este mismo periodo, unas 55 000 personas debieron abandonar a la fuerza la subregión, la cifra más alta en toda su historia.** El reclutamiento forzado, la desaparición forzada y la extorsión, delitos sobre los cuales pesa un alto subregistro, también cuentan con elevados niveles de denuncias, lo que permite dimensionar el impacto de esta nueva oleada de violencia en las comunidades.

¹⁵ Aunque el enfrentamiento entre estructuras postdesmovilización se redujo notoriamente, estas enfocaron su accionar militar contra el ELN, con quienes sostuvieron combates en Cáceres y Zaragoza.

¹⁶ Luego del pacto celebrado con los “Rastrojos”, y para cimentar su control social y territorial en la subregión, los “Gaitanistas” decidieron crear el Bloque Pacificadores del Bajo Cauca y Sur de Córdoba, conformado por los frentes “Virgilio Peralta Arenas”, con injerencia en Piamonte (Cáceres); “José Felipe Reyes”, con sede en La Caucana y Guaimaro (Tarazá); “Julio César Vargas”, al que le correspondió el área de Barro Blanco y El 12 (Tarazá); “Francisco Morelos Peñate”, que dominó El Bagre; y “Rubén Darío Ávila”, para todo el Sur de Córdoba (VerdadAbierta, 14 de enero de 2019).

Subregión del Magdalena Medio antioqueño

Caracterización territorial

La subregión del Magdalena Medio antioqueño se encuentra ubicada en el extremo oriente del departamento, en el valle que forman las cordilleras Central y Oriental en la cuenca media del río Magdalena. Limita con los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá, y con las subregiones de Oriente y Nordeste de Antioquia. **Administrativamente está conformado por los municipios de Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Maceo, Caracolí y Yondó.** Cuenta con una extensión de 4777 kilómetros cuadrados, lo que constituye el 7,6 % del área total departamental y está conformada por seis municipios que a su vez se subdividen en dos zonas geográficas: ribereña y Nus.

El Magdalena Medio es la subregión con menor población de Antioquia: según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE (2018), allí habitan unas 109 404 personas, de las cuales, alrededor de 55 700 corresponden a hombres y 53 304 a mujeres. Esto representa solo el 1,8 % del total de habitantes del departamento.

Por lo menos el 57 % de la población habita en las cabeceras municipales y el 43 % restante en zonas rurales, aunque en municipios como Puerto Triunfo y Maceo esta tendencia se revierte, pues allí, el mayor porcentaje de habitantes se encuentra en la ruralidad dispersa (69,2 % y 58 %, respectivamente) (Comfenalco Antioquia & Antioquia Cómo Vamos, 2023; Consejo Territorial de Planeación de Antioquia -CTPA; Universidad de Antioquia, Gobernación de Antioquia; S.F).

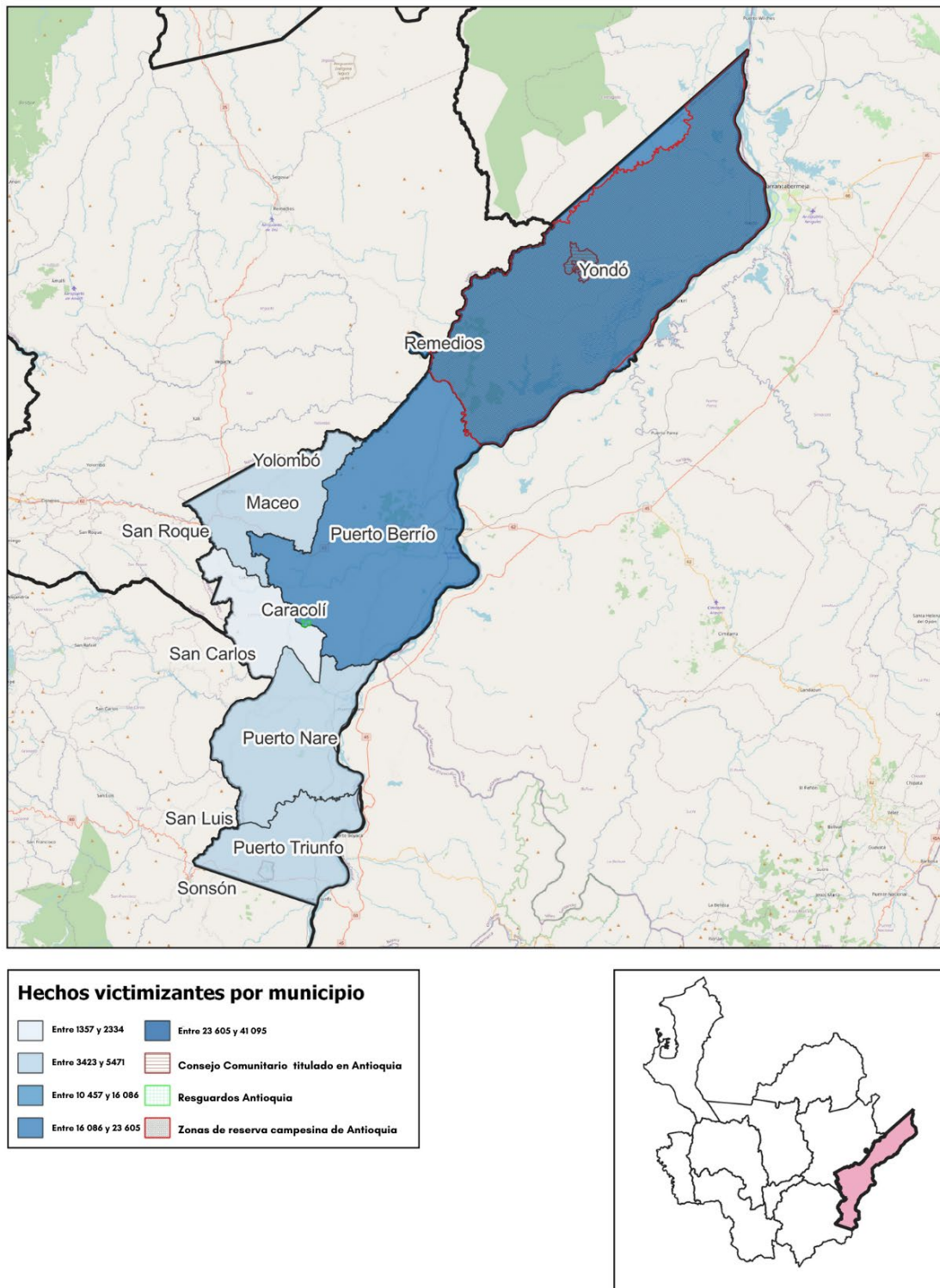
De los 56 resguardos presentes en Antioquia, el Magdalena Medio cuenta con uno, perteneciente al pueblo Emberá Chamí y ubicado en el municipio de Puerto Berrío. Por su parte, solo el 2 % de la población se autorreconoce como negro, mulato, afro, raizal o palenquero.

Para 2020, el Magdalena Medio registró un índice de 21,5 en Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), siendo la séptima subregión de Antioquia en este ítem; también se ubicó como la sexta en pobreza multidimensional tras registrar en el mismo año un porcentaje de 20,1 %, mientras que el Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) la sitúa en quinto lugar con un puntaje de 32,56¹⁷ (CTPA *et al*).

La subregión aporta cerca del 1,6 % del PIB del departamento, siendo sus principales actividades económicas la explotación de minas y canteras, las industrias manufactureras, la ganadería, la producción pecuaria, pesca, minería, actividades de servicios para las empresas y el comercio. Además, cabe destacar que en los municipios de Yondó y Puerto Nare tiene lugar la explotación de petróleo y gas natural (Comfenalco Antioquia & Antioquia Cómo Vamos, 2023).

¹⁷ Según este índice, las subregiones con mejor calidad de vida son: Valle de Aburrá (45.8); Oriente (42.1); Suroeste (37,1) y Norte (35,3) (CTPA *et al*).

Mapa 2



Fuente: elaboración propia.

Esta subregión antioqueña hace parte a su vez de una macro región conocida como Magdalena Medio, integrada por 44 municipios de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca y Santander¹⁸. Además de su importancia geoestratégica por encontrarse situada en el centro del país,

¹⁸ Esta es la delimitación que realizó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) para esta zona geográfica del país. Esta incluye 13 municipios más de los que cubre actualmente el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena

la macro región es poseedora de una riqueza hídrica, medioambiental, en recursos naturales, así como en diversidad cultural que la hacen única en el país. En palabras de Medina Gallego:

En el conjunto del territorio se desarrollan labores agrícolas y ganaderas, con marcados procesos de agroindustrialización en torno a la producción de palma de aceite; así como actividades minero-extractivas con la explotación de carbón, calizas, cuarzo, mármol, oro y petróleo (2011, p. 76).

En el Magdalena Medio antioqueño se encuentran los **corredores biogeográficos** de los ríos Porce, Nus y Magdalena; además, allí se encuentra el Distrito de Manejo Integral del Cañón del río Alicante, un sistema de humedales ubicado entre Puerto Berrío y Yondó, así como la reserva forestal del río Magdalena. La subregión es hábitat de exuberantes especies de aves y mamíferos. De hecho, es en esta zona del país donde se encuentran poco más de 100 hipopótamos que llegaron a la región en la década del 80 por el extinto capo Pablo Escobar y que hoy constituyen el principal problema medioambiental de la subregión y del país.

Sin embargo, este no es el único problema que afronta el Magdalena Medio en materia ambiental. **Las actividades mineras, ganaderas, así como la industria petrolera, han incidido en la degradación de las aguas y el aporte de sedimentos a las cuencas de las fuentes hídricas**, situación que aumentó exponencialmente los riesgos de inundaciones para los municipios de la zona Ribereña. Los procesos de deforestación para ganadería, agricultura y agroindustria también se han convertido en una amenaza para la riqueza forestal de la subregión. Estas tres actividades económicas han generado una de las principales problemáticas de la subregión: la alta concentración de tierras.

Pese a sus riquezas, la subregión cuenta con una deficiente infraestructura social en escuelas, acueductos, alcantarillados, puestos de salud y vías secundarias y terciarias. La dispersión geográfica, sumado a la baja población, quizás explique el **débil tejido comunitario**, reflejado en la poca presencia de organizaciones de la sociedad civil en todo el territorio (Proantioquia *et al*, 2019). Asimismo, el Magdalena Medio antioqueño presenta un complejo panorama en materia de derechos humanos por cuenta de la presencia de grupos armados reorganizados después de procesos de negociación política, quienes han desplegado formas de control territorial que han puesto en riesgo la vida e integridad de los pobladores de la subregión.

Medio. Por su parte, la Vicepresidencia de la República, en informe titulado Panorama Actual del Magdalena Medio (2005), señala que esta región está compuesta por 63 municipios de ocho departamentos. Para efectos del presente informe, se acogerá la circunscripción hecha por la CEV, según la cual, el Magdalena Medio está integrado por los municipios de: Yondó, Puerto Nare, Puerto Berrío y Puerto Triunfo (Antioquia); Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Arenal, Barranco de Loba, San Martín de Loba, El Peñón, Hatillo de Loba, Montecristo, Morales, Norosí, Regidor, Río Viejo y Tiquisio (Bolívar); Puerto Boyacá (Boyacá); La Dorada (Caldas); Aguachica, Gamarra, González, La Gloria, Río de Oro, San Alberto, San Martín y Tamalameque (Cesar); Puerto Salgar (Cundinamarca); Barrancabermeja, Betulia, El Carmen de Chucurí, Puerto Wilches, Bajo Río Negro, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Bajo Simacota, Puerto Parra, Cimitarra, Landázuri, El Peñón, Santa Helena del Opón y Bolívar (Santander).

La subregión como piloto de búsqueda de la verdad

El Magdalena Medio antioqueño también se convirtió en una de las regiones donde la justicia transicional está enfocando sus esfuerzos de búsqueda de la verdad. **A través de los Auto SAR-AI-023 de 15 de octubre de 2020 y SAR-AI-060 de 27 de octubre de 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares para los cementerios La Dolorosa y Estación Las Virginias, ambos de Puerto Berrío.** Lo anterior en solicitud elevada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) a esta corporación, **frente a la posibilidad de que allí se encuentren inhumadas personas dadas por desaparecidas, que fueron arrojadas al río Magdalena** y cuyos restos, por acción del afluente, terminaron en las localidades ribereñas de la subregión. La medida fue prorrogada en octubre de 2021.

Las cuatro fases de intervención de la UBPD en el cementerio La Dolorosa, de Puerto Berrío, en desarrollo de las medidas cautelares de la JEP, han permitido la intervención de 126 sitios de interés forense y la recuperación de 116 cuerpos. Aún quedan 237 puntos (208 bóvedas, 24 osarios individuales y 5 comunes) por verificar. Adicionalmente, por información de adoptantes y organizaciones de Puerto Berrío, la UBPD identificó en el cementerio otras 26 bóvedas y 15 osarios individuales que podrían contener cuerpos en condición de no identificados, que provienen de ríos y que habrían muerto en forma violenta (JEP, 28 de octubre de 2021).

Actores armados y dinámicas del conflicto en la subregión

Trayectorias y temporalidades de la violencia

Por cuenta de los procesos de poblamiento y colonización que ha experimentado a lo largo su historia, el Magdalena Medio (incluido el lado antioqueño) ha sido escenario histórico de fuertes conflictividades sociales y políticas y uno de los meridianos de la violencia del país. Alonso (1997), basándose en una caracterización hecha por Murillo Posada (1991), describe que desde los tiempos de la conquista y colonización española, ferozmente resistida por los pueblos indígenas Yarigüies, Carares y Opones; de las luchas de negros cimarrones que fundaron palenques en la parte norte de la región, pasando por llegada masiva de campesinos al territorio atraídos por la construcción del ferrocarril a finales del siglo XIX, hasta el asentamiento generalizado de excombatientes liberales que lucharon en la Guerra de los Mil Días, el Magdalena Medio ha desarrollado dinámicas propias de los territorios de frontera, donde son característicos la resistencia, la confrontación y la configuración de sociedades de supervivencia.

Fue en esta región donde, en las primeras cuatro décadas del siglo XX, **estallaron con fuerza los conflictos obrero-patronales**, y el de los terratenientes con los campesinos sin tierra:

Las movilizaciones sociales ocurridas en el Magdalena Medio en la primera mitad del siglo XX estuvieron signadas por el auge del movimiento sindical de los distintos sectores de trabajadores asentados en la región y por la irrupción de organizaciones campesinas que

presionaban por su derecho a la tierra (Murillo, 1991, p. 71-78; citada por: Alonso, 1997, p. 89).

En dicha efervescencia social terminaron consolidándose durante la segunda mitad del siglo XX el **sindicato de trabajadores de la empresa petrolera (USO) como actor relevante en la región y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)**, que encontró tierra fértil para sus luchas reivindicatorias en el Magdalena Medio. Se trató del periodo donde comenzó a advertirse la presencia de las guerrillas, particularmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Farc-EP.

Según Medina Gallego (2011), la llegada de las Farc-EP, en la década del 60, fue posible gracias a la confluencia de una serie de sucesos entre los que destacan:

1. El surgimiento de guerrillas liberales que combatieron durante la violencia bipartidista y que, luego de ser amnistiadas durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinillas (1953-1957), se asentaron en la región.
2. El trabajo político que adelantó el Partido Comunista durante la segunda mitad del siglo XX con los sindicatos de la industria petrolera y la población campesina en general.
3. La decisión de esta guerrilla de convertirse en una fuerza irregular capaz de confrontar al Estado colombiano, lo que supuso su despliegue hacia zonas geoestratégicas, como el Magdalena Medio.

La primera estructura de esta insurgencia presente en el territorio fue el Frente 4, que nació en el sur del Magdalena Medio, justo en los límites de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. El municipio de Puerto Boyacá fue su centro de operaciones iniciales. **El trabajo político realizado por el Partido Comunista durante los años 50** y la histórica presencia de guerrilleros indultados de diferentes guerras, le permitieron a las Farc-EP contar con algún grado de apoyo durante esos primeros años. Tras la realización de su VII Conferencia (1982), donde deciden abandonar la guerra de guerrillas y pasar a la guerra de movimientos, el Frente 4 se partió en los frentes 11, 12, 20, 23, 24, 22 y 9.

Estos frentes entran a operar en Santander, principalmente en Barrancabermeja, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí y Cimitarra; el Frente 24 va a tener su área de operaciones en el Sur de Bolívar, Santa Rosa del Sur y San Pablo; y el Frente 11 en Cundinamarca y Boyacá. (...) aún para la década de los ochenta, el Frente 4, que es el origen de todas las estructuras farianas en la región, es el más grande en su cobertura territorial junto con el Frente 11 (Medina Gallego, 2011, p. 96).

El secuestro, la extorsión y el abigeato fueron las principales acciones desarrolladas por las Farc-EP durante esos años. Por su parte, en la década de los 70 surge la guerrilla del ELN en el extremo norte del Magdalena Medio, en el municipio de San Vicente de Chucurí. Sus antecedentes son las guerrillas liberales al mando de Rafael Rangel durante los años 50.

Su mito fundacional es el asalto a la población de Simacota en 1965 (...) a finales de la década de los setenta, el ELN se encontrara en la crisis más importante de su historia debido a la

acción del Ejército en la “Operación Anorí” en 1973, y sus constantes divergencias internas. La crisis sufrida por el ELN en la década de los setenta sólo será superada hasta mediados de los ochenta; sin embargo, este interregno sirve a la organización para madurar militarmente y llegar con mayor profundidad a sindicatos y organizaciones estudiantiles. En la década de los ochenta consolida su presencia en zonas estratégicas del Magdalena Medio y Oriente antioqueño, incrementando de esta forma su poder económico por medio de la extorsión (Medina Gallego, 2011, p. 94).

En su caracterización sobre la subregión, Alonso señala que a inicios de la década del 80 la conflictividad social y armada alcanzó su máximo punto de tensión por cuenta de la **marcada exclusión económica, social y política de amplios sectores de la población, la presencia eminentemente represiva del Estado y los intereses en juego de los actores involucrados**: hacendados ganaderos que defendían el acaparamiento de tierras para su actividad; los campesinos colonos que luchaban por la permanencia en el territorio; las nacientes industrias agroindustriales y sus conflictos con los jornaleros agrícolas; las guerrillas que buscaban asentarse y fortalecerse en todo el Magdalena Medio, los narcotraficantes, quienes instalaron cultivos, laboratorios para el procesamiento de alcaloides, bases de operaciones y sitios de refugio; y los primeros cuerpos de autodefensa armada, que terminaron siendo la punta de lanza de los grupos paramilitares en todo el país (1997, p. 90).

En esta década, la guerrilla de las Farc-EP experimenta un cambio en su trabajo con las masas, gracias al surgimiento del partido político Unión Patriótica (UP). Aprovechando la tregua firmada en el marco del proceso de paz adelantado por el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), integrantes farianos salieron de su clandestinidad para dedicarse a labores proselitistas. Finalmente, el éxito en las urnas de la Unión Patriótica (UP) y otras fuerzas de izquierda en la subregión fue recibida con recelo por las élites políticas y económicas subregionales.

Lo anterior suscitó un acuerdo tácito de voluntades para eliminar los movimientos políticos de izquierda democrática de la subregión. Para ello, se conjugaron acciones políticas, económicas y de violencia armada que terminaron convirtiendo a todo el Magdalena Medio (especialmente el lado antioqueño) en el epicentro de la lucha contrainsurgente de Colombia.

El bloque de poder contrainsurgente

Franco (2009) acuñó el concepto de *poder contrainsurgente* para describir

La articulación del bloque en el poder (o unidad política entre clases dominantes y un aparato estatal característicamente centralista) y coaliciones políticamente dominantes, con sectores subalternos e imperativos en torno al sofocamiento de todas las formas de oposición –armada y civil- que afecten la dominación y las condiciones de dominación, y de cualquier reclamación que afecte actual o potencialmente la tasa de ganancia.

En este sentido, fue precisamente **la articulación de bloques de poder (tanto legal como ilegal) y el desarrollo de un conjunto de tácticas consensuadas** lo que permitió la consolidación de la

estrategia paramilitar en el Magdalena Medio antioqueño. Si bien se tienen registros desde la década del 60 de grupos de civiles armados organizados en “juntas de autodefensas” o “defensas civiles”¹⁹, el modelo desarrollado en esta macro región a principios de los años 80 constituyó el piloto del paramilitarismo que luego se extendió por todo el país. En ello fueron fundamentales dos grupos familiares tradicionales de la región: los Pérez (Gonzalo y su hijo Henry) y los Isaza.

Finalizando los años 70, los Pérez, cansados del cobro de vacunas y las extorsiones cometidas por el Frente 11 de las Farc-EP, convocaron a un grupo de hacendados y ganaderos asentados en Puerto Boyacá para **crear un grupo de autodefensas que pudiera repeler y expulsar a la guerrilla del territorio**. Ramón, el patriarca del clan familiar Isaza, hizo lo propio del lado antioqueño: junto a un grupo de ganaderos de los corregimientos Las Mercedes y Doradal, del municipio de Puerto Triunfo, se armaron de revólveres y escopetas para combatir a los insurgentes que incursionaban en la subregión, **conformando una banda que se conoció como los “Escopeteros”**.

En sus inicios, ambos grupos actuaron en sus respectivos feudos, dedicándose a ejecutar campañas de limpieza social y a cometer asesinatos contra aquellas personas consideradas auxiliares de la guerrilla. Pero, tras el secuestro de Gonzalo de Jesús Pérez, en 1983, por parte de las Farc-EP, su hijo, Henry, le pidió ayuda a Ramón para realizar un operativo conjunto de rescate. Finalmente, Gonzalo muere en cautiverio, pero quedó la unión de estructuras, que pasarían a llamarse Autodefensas del Magdalena Medio de Puerto Boyacá.

A diferencia de anteriores experiencias de civiles armados, estas Autodefensas implementaron un conjunto de estrategias (políticas, sociales, económicas) para reforzar la **lucha armada contra la guerrilla**. Una de ellas consistió en la conformación de una expresión político electoral denominada Movimiento de Restauración Nacional (MORENA), cuyo fin era **recoger el caudal electoral arrebatado mediante el uso de la violencia a la izquierda democrática, concentrando para ello toda las fuerzas clientelistas de la subregión**; de otro lado, se creó la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM), entidad que se encargó de canalizar los aportes hechos por ganaderos, hacendados y particulares para el grupo creado por los Pérez.

Además, las Autodefensas de Henry Pérez recibieron dotación, entrenamiento, equipamientos y tejieron una estrecha relación de cooperación con altos mandos militares, vinculados principalmente con el Batallón de Infantería N° 3, conocido como “Batallón Bárbula”, creado en 1983 junto con la Brigada 14 del Ejército, destacada en el municipio de Puerto Berrío²⁰.

¹⁹ Esto se debió en buena medida a la iniciativa del presidente Guillermo León Valencia (1962-1967), quien en 1965 profirió el Decreto 3398 del 24 de diciembre, a través del cual “se organiza la defensa nacional” y se adoptan, entre otras medidas, el amparo, la provisión y la venta de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares a organizaciones civiles siempre y cuando sea para la defensa nacional.

²⁰ Recordado es el caso del teniente Luis Antonio Meneses, adscrito a esta guarnición militar. Al respecto, Ronderos (2014) señaló: “El entonces teniente del Batallón Bárbula, Luis Antonio Meneses, estando aún activo en el servicio, se unió a Pérez en su lucha. En una confesión que hizo años después ante la Policía, Meneses aseguró que su comandante del Batallón fue quien lo vinculó con las Autodefensas y que esa era una ‘política del gobierno para la lucha antsubversiva’ (...) fue nombrado como segundo al mando de la organización, adoptó el alias de ‘Ariel Otero’ y al poco tiempo de estar en las Autodefensas, cuando su papel ya se hizo muy notorio, salió del servicio militar activo” (p. 34-35).

La máquina de guerra paramilitar **enfiló su violencia contra simpatizantes e integrantes de los partidos políticos de izquierda** con el fin de frenar su ascenso. Asimismo, desplegó acciones de control territorial y social que derivaron en abusos contra el campesinado y el éxodo forzado de cientos de familias de la subregión.

Durante la década de los ochenta, la región del Magdalena Medio vivió una temprana militarización de los conflictos agrarios: las Farc-EP incentivaron en la zona norte la invasión de tierras buscando legitimidad; mientras que en la zona sur, el paramilitarismo expulsó campesinos que habían colaborado con las guerrillas. De igual forma, durante esta década la región antioqueña del Magdalena Medio sirvió como escenario para que los narcotraficantes del Cartel de Medellín cultivaran hoja de coca en el Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño y además promocionaran la criminalidad organizada al emplear sicarios y pandillas para liquidar a los adversarios políticos o a quienes veían como amenaza (Medina Gallego, 2011, p. 99).

En efecto, en su lucha contra la guerrilla por el control de territorios claves para el narcotráfico, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, le propuso una alianza a Henry Pérez, que terminó por fortalecer militar y económicamente a las Autodefensas del Magdalena Medio de Puerto Boyacá.

Con esa nueva fusión, el narcotraficante y el grupo de autodefensa decidieron financiar las llamadas escuelas de formación para la lucha armada y el sicariato; es decir, campos de entrenamiento sobre el uso de armas, estrategia y táctica militar. Los profesores eran mercenarios israelíes y británicos que enseñaron en las escuelas llamadas Cero Uno, El Cincuenta, El Tecal, Galaxias y Cero Ochenta y Uno, desde donde se formaron ‘escuadrones de la muerte’ como Los Masetos (Muerte a Secuestradores), Los Tiznados y Los Grillos, y se entrenaron a paramilitares como Alonso de Jesús Baquero, alias “Negro Vladimir”, autor material de las masacres de La Rochela, Santander, en 1989; y Segovia, Antioquia, en 1988 (VerdadAbierta, 24 de septiembre de 2010).

La alianza entre los narcotraficantes del Cartel de Medellín y los “paras” del Magdalena Medio se truncó violentamente a inicios de la década de los 90. El 20 de julio de 1991, sicarios al servicio de Pablo Escobar asesinaron a Henry Pérez en la localidad de Puerto Boyacá, lo que obligó al repliegue de los principales mandos de las Autodefensas, entre ellos Ramón Isaza. Pero, tras la muerte de Escobar, Isaza y sus hijos asumen la reestructuración del bloque paramilitar en el Magdalena Medio antioqueño, que pasó a llamarse **Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM)**.

Isaza instaló su base de operaciones en el corregimiento El Prodigio, municipio de San Luis, y desde allí inició el proceso de expansión que lo llevó a copar vastas zonas rurales de Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Puerto Nare (Magdalena Medio antioqueño), San Luis, San Francisco, Cocorná (Oriente antioqueño); Norcasia, Samaná, Pensilvania (departamento de Caldas), Yacopí, Caparrapí y Anapoima (Cundinamarca)²¹.

²¹ Las ACMM contaron en su momento con cinco frentes denominados: Omar Isaza; Jhon Isaza; José Luis Zuluaga; Héroes del Prodigio y Celestino Mantilla (VerdadAbierta, 24 de septiembre de 2010).

En su intención de arrebatarle territorios a las Farc-EP, las **ACMM desplegaron una campaña de terror consistente en la comisión de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y la expulsión forzada de comunidades campesinas enteras**²². Entre los hechos atroces cometidos por esta estructura, la que mayor resonancia tuvo fue la retención y posterior desaparición de 17 campesinos, entre ellos tres niños, de la vereda La Esperanza, municipio de El Carmen de Viboral, entre junio y diciembre de 1996. El personero de este municipio, Helí Gómez Osorio, quien denunció con vehemencia estos hechos, también fue asesinado por los hombres de Isaza.

Las acciones militares de las ACMM obligaron el repliegue de las **huestes farianas presentes en el Magdalena Medio antioqueño hacia el Nordeste, Bajo Cauca y Oriente antioqueños**. Por su parte, tras recomponerse de la dura derrota militar propinada por el Ejército, en 1973, y afianzarse en el Oriente antioqueño, el ELN emprendió un proceso de expansión durante la primera mitad de la década del 90 que lo llevó a municipios de esta subregión como Puerto Nare, Maceo y Caracolí. Se trató de uno de los momentos de mayor crecimiento de esta guerrilla, llegando a concentrar un número importante de combatientes en todo el Magdalena Medio para finales de los años 90. La destrucción de infraestructura petrolera y energética, los ataques a la fuerza pública, los secuestros y extorsiones a ganaderos hicieron parte de sus repertorios de violencia (Vicepresidencia de la República, 2001).

Al final, el avance del ELN fue repelido por las ACMM, que obligaron a las tropas elenas a replegarse hacia la serranía de Abibe. Así, para los primeros años del siglo XXI, Ramón Isaza y sus hombres terminaron erigidos como fuerza irregular hegemónica en el territorio, lo que les permitió desplegar formas de control social, económico y territorial favorable a los intereses de sectores ligados con la agroindustria de la palma, la concentración y el despojo de tierras y la actividad ganadera, entre otros.

Desmovilización, reconfiguración, reacomodo

Tras la desmovilización de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), ocurrida el 7 de febrero de 2006, en el corregimiento Las Mercedes, del municipio de Puerto Triunfo, sobrevino un periodo de reacomodo criminal en toda la subregión, caracterizado por la emergencia de estructuras criminales integradas por “paras” desmovilizados, otros más que nunca entregaron sus armas y narcos que buscaban mantener su injerencia en la subregión.

En este proceso de rearme y reacomodo criminal fueron claves los personajes de Ovidio, conocido como “Roque”; Oliverio, alias “Terror”; y Mario, alias “Moncho”, todos ellos hijos de Ramón Isaza. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH; 2019) señaló que la incertidumbre jurídica y la insatisfacción con el programa de reintegración terminaron por impulsar a un puñado de integrantes de las ACMM a rearmarse y unirse a aquellos que no lo hicieron.

²² Entre 1994 y 1999 el Cinep registró 17 hechos de violencia perpetrados por los paramilitares de Isaza, la mayoría homicidios y desapariciones de 69 personas en los municipios de Puerto Nare, El Carmen de Viboral, San Francisco, Sonsón y La Dorada (Cinep, 2004, p. 270; Base de datos del CNMH-DAV), sin contar la masacre de Samaná que dejó cuatro víctimas. Por su parte la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, registró 24 hechos de violencia efectuados por paramilitares al mando de Ramón Isaza durante este mismo periodo, que dejaron un saldo de 42 víctimas de homicidio y desaparición forzada, en su mayoría (Base de datos CNMH-DAV) (Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH; 2019, p. 105).

La principal figura del rearme en esta parte del Magdalena Medio fue Ovidio Isaza, alias “Roque”, quien presentó una trayectoria similar a la de Terror o Gurre ya que, a pesar de ser uno de los pocos que estaban de acuerdo con la desmovilización, después de salir en libertad no continuó con sus procesos judiciales. Años después, las autoridades lo sindicaron de conformar un grupo armado ilegal en la zona de operaciones de las ACMM con centro en los municipios de Puerto Nare, Puerto Triunfo y Sonsón (Antioquia). Desde allí se había convertido en “el capo del Magdalena Medio” (El Tiempo, 2012, 24 de marzo). Según estos indicios, Roque se mantuvo en armas entre 2006 y 2012 (CNMH, 2019, p. 649).

Esta estructura criminal liderada por los herederos de Ramón Isaza y que comenzó a conocerse en la subregión como “Clan Isaza”, se concentró en actividades de narcotráfico tales como la prestación de “servicios de seguridad” a narcos y el montaje de infraestructura necesaria para el procesamiento de alcaloides, situación que redundó en el aumento de cultivos ilícitos en pueblos como Norcasia y Samaná (Caldas); Argelia, Sonsón, San Francisco, San Carlos y San Luis (Antioquia) (CNMH, 2019).

A diferencia de lo ocurrido en el siglo XX, alias “Roque” y su grupo se mostraron abiertos a transar con antiguos enemigos como las Farc-EP, especialmente para temas de narcotráfico. Para evitar una confrontación armada, también estableció acuerdos con los “Urabeños”, después conocidos Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes experimentaban un proceso de expansión desde el Bajo Cauca que los llevó al Nordeste y de allí a localidades del Magdalena Medio como Puerto Berrío y Puerto Nare.

Alias “Roque” fue capturado en septiembre de 2012 en Las Mercedes, corregimiento del municipio de Puerto Triunfo. Los dos años posteriores a su captura, las autoridades de Policía le propinaron duros golpes a su estructura criminal. Sin embargo, esto no significó el fin del denominado Clan Isaza: “En 2015, según información de la Fiscalía, el Clan Isaza se encontraba en los municipios de Puerto Nare, Puerto Triunfo y San Luis, en Antioquia” (Fundación Ideas para la Paz -FIP, 2017, p. 92).

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc-EP y el Estado colombiano, representado en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018), **la dinámica de fragmentación, reacomodo y surgimiento de nuevas expresiones armadas en el Magdalena Medio antioqueño adquirió otras dimensiones.** De un lado, el Frente Edgar Amilkar Grimaldo Barón, del ELN, avanzó rápidamente hacia los territorios controlados por las Farc-EP, principalmente en el municipio de Yondó y en los límites con el Nordeste antioqueño. Allí desplegaron estrategias de control territorial y social que les ha permitido fortalecerse militarmente.

Asimismo, antiguos exguerrilleros que no se sumaron al proceso de paz han terminado engrosando las filas de las organizaciones delictivas presentes en la subregión. El ejemplo más claro de lo anterior lo constituye Carlos Alberto Herrera Arcila, conocido como “Camilo”, reclutado a temprana edad por el Frente 9 de las Farc-EP pero que no se acogió al proceso de paz y terminó liderando la reestructuración y expansión del Clan Isaza tras la captura de “Roque”.

Este grupo pasó a conocerse como Clan Oriente, el cual, bajo el mando de Camilo, ejerció el control del microtráfico en Puerto Berrío, Puerto Triunfo y municipios del Oriente antioqueño como Sonsón y Argelia; además, lanzó una agresiva campaña de extorsiones contra el comercio de la subregión a su vez que afianzó sus actividades de narcotráfico, principalmente la seguridad privada a narcotraficantes que poseen cultivos y el montaje de laboratorios para el procesamiento de alcaloides en áreas rurales del Magdalena Medio y Oriente antioqueños.

No es el único actor criminal en la subregión. El Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos (CASCDH) de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia, identificó actividades de “Los Chatas”, grupo armado organizado con presencia histórica en el norte del Valle de Aburrá y en la localidad de Puerto Berrío (Antioquia Cómo Vamos, 2024). Por su parte, la Defensoría del Pueblo (2019) advirtió sobre la inusitada presencia de grupos armados organizados y la posibilidad latente de confrontación²³ entre estos en las localidades de Puerto Berrío, Puerto Nare, Maceo y Caracolí:

La presencia de grupos armados organizados, surgidos de la reagrupación de desmovilizados del paramilitarismo, específicamente de las AUC y grupos de disidencia conformados por exguerrilleros que no se acogieron al proceso de paz, quienes en sus diversas modalidades de operar y alianzas estratégicas establecidas para expandir los negocios ilegales como el expendio de droga, se van relacionado con el sicariato, los robos, los cobros ilegales como las vacunas, el gota a gota, y así someten a la población y controlan el territorio (2019, p. 11)

Esta agencia del Ministerio Público identificó cuatro organizaciones criminales presentes en el municipio de Puerto Berrío: las AGC, llamadas por las autoridades de Policía Clan del Golfo; los Caparrapos, Nuevo Renacer y los Locales.

Los dos primeros son organizaciones armadas con estructuras de mando, que vienen realizando actividades delictivas desde el Nordeste antioqueño, Bajo Cauca y Sur de Córdoba (...) los dos últimos, Nuevo Renacer y los Locales, se caracterizan porque en su mayoría son personas nacidas y conocidas de Puerto Berrío, no dependen de una organización grande, son autónomos (2019, p. 12).

En su intención de controlar toda la cadena del microtráfico, cada organización criminal ha desarrollado **férreas estrategias para someter, controlar o instrumentalizar grupos delincuenciales presentes en estas localidades**, integrados en su mayoría por jóvenes, situación que ha tenido como correlato el incremento de los asesinatos selectivos, las confrontaciones armadas con interposición de población civil y el desplazamiento forzado. A ello se suma un largo repertorio de violencias dirigidas contra los liderazgos sociales, campesinos y comunitarios, cuyo fin es intimidarlos, silenciarlos, expulsarlos de la subregión y en casos extremos, eliminarlos²⁴.

²³ Según el visor de masacres en Colombia del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), entre 2016 y 2023 tuvieron lugar dos masacres en la subregión, ambas en Puerto Berrío. La primera de ellas tuvo lugar el 17 de enero de 2017 y en ella perdieron la vida tres personas; la segunda tuvo lugar el 20 de noviembre de 2023, cuando cuatro personas fueron asesinadas en la vía que del municipio conduce a Medellín.

²⁴ “Tal fue el asesinato de Édison Alberto Molina, reconocido periodista y líder social, quien en el 2013 había recibido amenazas por denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría Provincial de Puerto

Dicha dinámica podría explicar el hecho de que el Magdalena Medio tuvo la segunda tasa de homicidios más alta del departamento entre 2022 y 2023 (78,6 y 69,8 respectivamente), superada solo por el Nordeste antioqueño (Antioquia Cómo Vamos, 2024).

En materia de conflictividad armada, esta subregión presenta un delicado panorama en la actualidad por cuenta de varios factores, entre los que se destacan:

1. **El fortalecimiento de las AGC, llamadas por las autoridades de Policía como Clan del Golfo**²⁵. Tras la captura de alias “Camilo” y alias “Chatarra”, máximos responsables del Clan de Oriente, esta estructura terminó vinculándose a las fuerzas gaitanistas, lo que le permitió consolidar su accionar en Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó.
2. **El avance del ELN**. Tras la firma del acuerdo de paz entre las Farc-EP y el Estado colombiano, en 2016, las tropas elenas han avanzado con firmeza hacia los territorios otrora controlados por las Farc-EP, particularmente en Yondó y Puerto Nare. Lo anterior presupone confrontaciones con las AGC por el control de un corredor geoestratégico, que permite conectar una franja importante que va desde la serranía de Abibe, pasando por la serranía de San Lucas hasta llegar al centro del país.
3. **El ingreso a suelo antioqueño del grupo disidente de las Farc-EP conocido como Estado Mayor Central (EMC)**. Actualmente se registra presencia de esta organización armada en 19 municipios del departamento, todos ellos de las subregiones de Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio. El EMC ha tejido alianzas con el ELN para combatir a los “Caparrapos” y las “AGC” en Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, con el riesgo de que la confrontación se extienda al Magdalena Medio antioqueño.
4. **El asesinato de Oliverio Isaza, alias “Terror”**²⁶. Aunque siempre se mostró como una figura pública influyente comprometido con su proceso de desmovilización, autoridades judiciales lograron confirmar que “Terror” terminó siendo uno de los principales cabecillas de las AGC presentes en el Oriente y Magdalena Medio antioqueños. Su muerte podría repercutir en una escalada de la violencia en esta subregión por parte de este grupo armado organizado.

Berrío” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 6). Asimismo, el visor de asesinatos a personas líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), muestra que el 24 de noviembre de 2016 fue asesinado el líder social Henry Saavedra, a manos de integrantes de bandas delincuenciales en hechos relacionados con el control del microtráfico.

²⁵ Las “AGC”, nombradas por las autoridades de Policía como “Clan del Golfo”, tiene presencia en seis de los 125 municipios del departamento, siendo la fuerza irregular con mayor presencia en Antioquia (Antioquia Cómo Vamos, 2024).

²⁶ Oliverio Isaza, conocido como “Terror”, fue abatido por efectivos de la Policía Nacional el pasado 22 de febrero de 2025, en desarrollo de operativos contra las AGC en el Oriente de Antioquia (Infobae; 22 de febrero de 2025).

Subregión del Nordeste

Caracterización Territorial

El Nordeste antioqueño se encuentra ubicado sobre la margen oriental de la cordillera Central y al suroeste de la serranía de San Lucas, alrededor de las cuencas de los ríos Porce, Nus, Nechí y Alicante. Limita con el departamento de Bolívar y con las subregiones de Bajo Cauca, Oriente, Magdalena Medio y Norte. **Está conformada por los municipios de Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó**, que a su vez se dividen en cuatro zonas geográficas: Minera, Meseta, Nus y Río Porce.

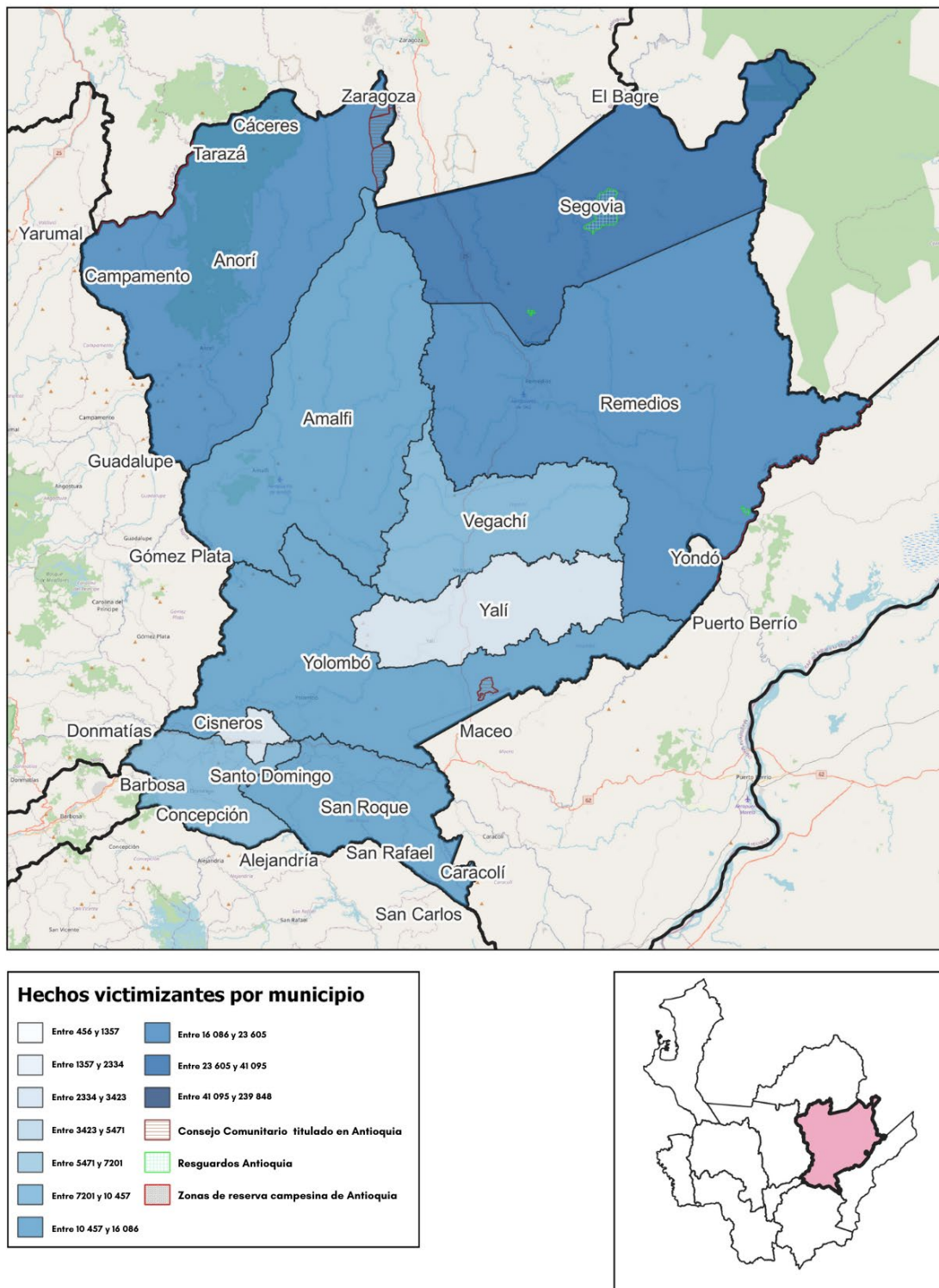
Cuenta con una extensión de 8554 kilómetros cuadrados, lo que representa el 13 % del territorio antioqueño; allí habitan, según el DANE (2018), unos 208 590 habitantes. De ellos, 55 % viven en áreas urbanas y 45 % en áreas rurales. De los 56 resguardos indígenas presentes en Antioquia, tres se encuentran en el Nordeste: Tagual-La Po y La Chinita, en Segovia; y Korodó-Ité, en Remedios, todos ellos del pueblo Emberá Chamí. Por su parte, el 3 % de la población de la subregión se autorreconoce como negro, mulato, afro, raizal o palanquero y tienen presencia además cuatro consejos comunitarios: Bocas de Caná, El Aguacate y Porce Medio, en jurisdicción de los municipios de Anorí y Zaragoza; y Asocone, en Yolombó.

El Nordeste es el segundo productor de oro y plata de Antioquia, después del Bajo Cauca²⁷. Según el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), de los 42 086 000 gramos de oro producidos en este departamento en 2023 (lo que representa el 68 % de la producción nacional), unos 15 030 432 fueron aportados por esta subregión (el 36,35 %). Segovia (4 943 316 gr); Vegachí (4 343 805 gr); y Remedios (3 233 988 gr) aparecen como los municipios donde más se extrajo el metal precioso. En el corto plazo, **se avizora un aumento en la producción de oro en localidades como San Roque, donde se está llevando a cabo el proyecto Gramalote, por parte de la compañía Anglo Gold Ashanti.**

La subregión también cuenta con una importante actividad agropecuaria, fundamentalmente en la producción de panela, donde sobresalen municipios como Amalfi, Cisneros, San Roque, Yalí y Yolombó. Además, la cuenca del río Porce es una de las zonas con **mayor potencial hidroeléctrico** del departamento. En esta subregión se encuentran las centrales hidroeléctricas de Guadalupe I, II, III y IV, y Porce II y III. Actualmente se estudia la ampliación de este último proyecto en su fase IV.

²⁷ Tanto el Bajo Cauca como el Nordeste cuentan con una tradición minera de siglos. Los primeros poblados fundados por los españoles en suelo antioqueño se encuentran justamente en estas subregiones: Zaragoza y Remedios. Allí abrieron frentes de trabajo para extraer oro. En el siglo XIX llegaron empresas extranjeras, particularmente inglesas (Frontino Gold) y norteamericanas (Pato Consolidated) a explotar yacimientos de oro en la cuenca del río Nechí, en Zaragoza, Remedios y Segovia. En estos últimos, la compañía Frontino Gold Mines obtuvo, en 1852, títulos de explotación a perpetuidad por parte del presidente José Hilario López (1849-1853). Los ingleses desarrollaron técnicas de explotación a gran escala, novedosas para la época, que convirtieron los depósitos de oro de veta presentes en estos municipios en los más productivos del país. Desde entonces, la vida económica, social y política de Remedios y Segovia gira en torno a la empresa que controla los títulos mineros: en su momento Frontino Gold Mines, luego Zandor Capital, y ahora es Aris Mining Co. (antes Gran Colombia Gold).

Mapa 3



Fuente: elaboración propia.

Aun así, el Nordeste presentó para 2019 un índice de 41,86 de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que la ubicó como la tercera subregión con las más altas NBI de Antioquia, detrás de Urabá (49,42) y Bajo Cauca (44,86). El Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) la ubica como la séptima subregión con mejor calidad de vida con un puntaje de 32,3, muy distante del 45,8 que registró el Valle de Aburrá (la mejor en calidad de vida del departamento). Sin embargo, la medición

de pobreza multidimensional señaló que para 2020, el Nordeste registró un 17,9 %, la tercera más baja de Antioquia, por detrás de Valle de Aburrá y Oriente (Consejo Territorial de Planeación de Antioquia -CTPA; Universidad de Antioquia; Gobernación de Antioquia, *S.F*).

Dinámicas del conflicto en la subregión: actores y temporalidades

Las guerrillas: instrumentalización del malestar laboral

En la geografía de la guerra, el Nordeste antioqueño fungió inicialmente como zona de tránsito. En la década de los 70, por ejemplo, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), avanzaron hasta la serranía de San Lucas, donde conectaron el Magdalena Medio y el sur de Bolívar con el Bajo Cauca. Pero una vez allí, se instalaron en los municipios mineros de la subregión como Amalfi, Anorí, Remedios y Segovia. Por aquellos años predominaba un caldeado ambiente político y social en la subregión, particularmente en estas dos últimas localidades, por cuenta de las protestas de los trabajadores de la entonces Frontino Gold Mines²⁸, agremiados a su vez en uno de los sindicatos más fuertes del país.

La explotación industrial del oro por parte de la compañía extranjera Frontino Gold Mines (FGM) produjo unas dinámicas sociales y políticas particulares: hizo posible la conformación de una organización de los trabajadores a partir del conflicto obrero-patronal con la FGM por estabilidad laboral y mejores condiciones salariales, y llevó consigo la conformación temprana de un sindicato que se constituyó legalmente desde 1935. Fue así como alrededor de las reivindicaciones obreras y los reclamos de los mineros informales al monopolio de la FMG, las poblaciones de Remedios y Segovia desarrollaron una historia de movilización y protesta social entre 1919-1963 (Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH; 2010, p. 127).

Tanto el sindicato, como otras expresiones asociativas surgidas durante la década del 70 en el Nordeste, tuvieron gran influencia de movimientos de izquierda como el Partido Comunista (PC) y el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), que lograron aglutinar una importante base de apoyo popular. En este contexto, los “elenos” fortalecieron su aparato militar, entre otros, gracias a las exacciones cobradas a la Frontino Gold Mines; también adelantaron un intenso trabajo político que los llevó a involucrarse en las luchas sociales que tenían lugar en la subregión aunque estas, en ocasiones, distaran de los intereses insurgentes (CNMH, 2010).

Por su parte, el Frente 4 de las Farc-EP comenzó a incursionar en el Nordeste antioqueño durante los años 80 por cuenta de la presión de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), que los obligó a replegarse. Esto, sumado a un proceso acelerado de crecimiento, condujo a su desdoblamiento, del cual surgieron cinco frentes más, “lo que le permitió su desplazamiento hacia Puerto Berrío y, de allí hacia el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño” (CNMH, 2010, p. 155).

²⁸ En las primeras décadas del siglo XX, los ingleses vendieron sus títulos a la compañía norteamericana Mining Corporation, dándole vida a la Frontino Gold Mines. Los norteamericanos transformaron los modos de gerenciar de los ingleses, así como las relaciones con los trabajadores, lo que generó un intenso malestar laboral durante décadas (Cruz, *S.F*).

La década de los 80 es particularmente convulsa para el Nordeste antioqueño. Por un lado, las negociaciones de paz instauradas por el presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) llevaron a las guerrillas, en especial a las Farc-EP, a salir de su clandestinidad para desarrollar actividades proselitistas en público, en especial en Segovia y Remedios. Lo anterior, además de la creación de la Unión Patriótica (UP)²⁹, que recogió las bases populares construidas una década atrás por el PC y el MOIR, fue recibido con recelo por parte de las élites políticas, quienes vieron amenazados sus intereses; mientras que las fuerzas militares vieron así materializada la amenaza comunista.

Fue en este escenario que **grupos embrionarios del paramilitarismo, con la anuencia y colaboración de miembros de la fuerza pública, lanzaron su arremetida contra los liderazgos sociales y las expresiones políticas alternativas** que comenzaban a figurar como opciones reales de poder político en la subregión.

Entre el 4 y el 12 de agosto de 1983, miembros del Batallón Bomboná del Ejército Nacional que se hicieron pasar por paramilitares, ingresaron a las veredas Cañaveral y Altos de Manila, de Remedios, y con lista en mano, retuvieron a un grupo de personas acusándolos de ser guerrilleros y los mataron. Se desconoce el número de víctimas, pues algunos cuerpos fueron arrojados a los ríos Manila, Tamar y Mulatos, y otros fueron mutilados. Solo pudieron ser identificados 17 hombres y tres mujeres, cuatro eran menores de edad. Entre los muertos estaban varios miembros del Partido Comunista (PC) y del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) (Rutas del Conflicto, 8 de marzo de 2023).

Las amenazas y atentados contra miembros de la izquierda en el Nordeste arreciaron después de los comicios de 1986, donde la UP obtuvo la mayoría de escaños para los concejos de Segovia y Remedios. En 1988, cuando se instauró en Colombia la elección popular de alcaldes y gobernadores, la UP conquistó las alcaldías de Apartadó, Mutatá, Yondó, Remedios y Segovia y ello terminó por recrudecer la violencia en la subregión.

El 16 de mayo de 1988, integrantes del denominado grupo “Muerte a Revolucionarios del Nordeste” (MRN) asesinaron en Medellín al primer alcalde electo popularmente de Remedios: Elkin de Jesús Martínez, del partido Unión Patriótica (UP). Con esto, el grupo paramilitar materializaba las amenazas que meses atrás había proferido mediante panfletos en toda la subregión. El 11 de noviembre de ese mismo año, un grupo indeterminado de paramilitares al mando de Alonso de Jesús Baquero, alias “Vladimir”, incursionaron desde el corregimiento La Cruzada, de Remedios, hasta el casco urbano de Segovia, donde asesinaron a 46 personas y dejaron otras 60 más heridas.

En respuesta a la masacre, las guerrillas decidieron crear milicias urbanas. El ELN, con una estructura independiente, creó las milicias 11 de Noviembre y Andrés Posada, y las Farc-EP hicieron lo propio con las milicias adscritas a los Frentes 4 y 37. En su proceso de conformación, la cooptación de jóvenes sin mayor formación política derivó en la degradación

²⁹ Insurgencias como el ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL) también participaron de proyectos políticos surgidos al calor del proceso de paz. Para los primeros, A Luchar se convirtió en su plataforma política, mientras que para los segundos lo constituyó el Frente Popular. Tanto A Luchar, como Frente Popular y la UP celebraron alianzas que les permitió conquistar escaños en concejos, asambleas y alcaldías en todo el país.

de las milicias, no sólo por las arbitrariedades en las acciones de regulación social, sino por los excesos de la depredación económica (...) lo que se tradujo en un escalamiento de la violencia urbana (CNMH, 2010, p. 181).

La década de los 90 se caracterizó por la ofensiva militar lanzada por los Frentes Bernardo López Arroyave, María Cano, Héroes de Anorí y Compañía Cimarrón, del ELN, en áreas rurales de Segovia y Remedios, y de todo el Nordeste en general. Los enfrentamientos con las fuerzas militares, los grupos paramilitares e incluso con fuerzas “farianas” en disputas por control territorial, incrementaron la vulneración de derechos humanos entre la población, a tal punto que, en 1996, la Gobernación de Antioquia decidió declarar al Nordeste antioqueño como “zona especial de manejo de orden público”. El decenio terminó con una de las tragedias más impactantes que ha tenido lugar en la subregión: en la madrugada del 18 de octubre de 1998, guerrilleros del ELN dinamitaron un tramo del oleoducto Cusiana-Coveñas a la altura del corregimiento Machuca (Fraguas) de Segovia, haciendo que el petróleo se derramara sobre el río Pocuné; luego, los subversivos dinamitaron un puente sobre el río, lo que hizo que la aguas ardieran y quemaran completamente un caserío ubicado a sus orillas, dejando un saldo trágico de 84 personas muertas, la mitad de ellas menores de edad.

La intensificación de la violencia paramilitar

Si bien al final de la década de los 80 y principios de los 90 se advertía el accionar de grupos paramilitares (como Muerte a Revolucionarios del Nordeste - MRN), es a partir de 1996 que estos grupos experimentan una profunda transformación.

Ello fue posible gracias a la confluencia de varias situaciones:

1. **La creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).** Tras la desaparición de Fidel Castaño, sus hermanos Carlos y Vicente³⁰, con la colaboración del exmilitar Carlos Mauricio García, conocido con el alias de “Doble Cero”, deciden crear esta estructura que ya no solo contaba con un ala militar; además, incluyó el trabajo político y de obtención de finanzas con el fin de expandirse por todo el territorio nacional.
2. **La quema de la hacienda Guacharacas.** El 27 de febrero de 1997, un comando de guerrilleros del Frente Bernardo López Arroyave del ELN ingresó a la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez³¹ ubicada en el corregimiento Providencia de San Roque, y luego de robar 600 reses e intimidar a los presentes, quemaron la vivienda.
3. **La conformación de la Cooperativa Rural de Vigilancia y Seguridad Privada El Cóndor.** Se trató de una de las primeras cooperativas de seguridad (Convivir) creadas en Antioquia bajo el amparo del Decreto Ley 356 del 11 de febrero de 1994 y su representante legal fue

³⁰ Los Castaño Gil son oriundos de Amalfi. De hecho, el padre de los hermanos Castaño Gil fue asesinado en el casco urbano de Segovia, en 1977, por milicianos de las Farc-EP.

³¹ Para el momento del incidente, Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia (1995-1997).

Luis Alberto Villegas³². Tuvo sede en San Roque y operó, además, en Cisneros, Yolombó, Maceo, Caracol y el corregimiento San José del Nus.

Como lo documentó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (2020), fueron estos antecedentes los que precedieron la instalación de un campamento paramilitar en el corregimiento Cristales, de San Roque, que contó con el apoyo financiero de prestantes hacendados y ganaderos de la región³³. Desde la Cooperativa El Cóndor se coordinó toda la logística para este grupo³⁴, que se conoció luego como Bloque Metro y que estuvo bajo el mando de “Doble Cero”. Este se expandió por todo el Nordeste y parte del Oriente antioqueño con el fin de diezmar al Frente Bernardo López Arroyave, del ELN; y a los Frentes 4 y 37 de las Farc-EP.

Entre 1998 y 2001, el Bloque Metro cometió tres masacres en Yolombó que dejaron en total un saldo trágico de 40 personas asesinadas; en 2003 incursionó en el municipio de Maceo donde asesinaron a ocho personas.

Las estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República señalan que para 1998, año en que comenzó la ofensiva ordenada por “Doble Cero”, el Nordeste de Antioquia alcanzó una tasa de 109 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, la tercera más alta del departamento para aquel entonces. En 2001 esta región llegó al récord de 193 homicidios por cada 100 mil habitantes. Durante esos años fueron cinco los municipios que lideraron la lista negra de muertes violentas: Remedios, Segovia, Yalí, Santo Domingo y Yolombó (VerdadAbierta, 15 de abril de 2013).

La campaña de terror que adelantó esta estructura paramilitar, consistente en asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, despojos de predios, entre otros, le permitió posicionarse como actor criminal hegemónico en áreas rurales del Nordeste (como Yolombó, Yalí, Vegachí, Cisneros, San Roque) y en las cabeceras municipales de Remedios y Segovia.

Pero entre 2002 y 2004, justo en momentos en que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006/2006-2010) inició formalmente las negociaciones de paz con el Estado Mayor Central de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estalló la guerra entre los bloques Metro y Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La disputa, que inició en Medellín³⁵, rápidamente se extendió por todo el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño hasta llegar al Nordeste,

³² Luis Alberto Villegas fue asesinado mientras se dirigía al corregimiento San José del Nus, el 5 de diciembre de 2004.

³³ Entre los nombres salpicados por paramilitares desmovilizados en los tribunales de Justicia y Paz figura el de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y los hermanos Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao.

³⁴ Investigaciones judiciales y reportes periodísticos señalan que Luis Alberto Villegas administraba esta Convivir desde un negocio ubicado en Medellín llamado Lácteos El Paisa; desde allí conseguía armas, material de intendencia, uniformes y pertrechos para los integrantes del Bloque Metro (VerdadAbierta, 22 de septiembre de 2011).

³⁵ Al respecto, la Sala de Justicia y Paz consignó en sentencia de 2020 que dentro de las razones que generaron el conflicto entre “Doble Cero”, comandante del Bloque Metro; y Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, máximo cabecilla del Bloque Cacique Nutibara, figuraban las intenciones de uno y otro de controlar totalmente Medellín, incluido el sometimiento de todas las estructuras delincuenciales de esta ciudad; así como los métodos de financiación de los bloques paramilitares. Mientras para el Metro, su principal fuente de recursos era el robo de gasolina; para el Cacique Nutibara lo constituía el narcotráfico, aspecto al que se oponía “Doble Cero” (Sala de Justicia y Paz, 2020, p. 163).

principalmente a Amalfi, Segovia, Santo Domingo, Yalí y San Roque, en donde el Bloque Metro libró sus últimas batallas antes de ser exterminado³⁶. Tras perder la guerra, los bloques Héroes de Granada, Central Bolívar y Cacique Nutibara de las AUC se repartieron los territorios dominados por los hombres de “Doble Cero”.

El 12 de diciembre de 2005, unos 1900 combatientes al mando de Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, se desmovilizaron en el corregimiento Santa Cecilia de Remedios, bajo el nombre Frente Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar (BCB).

La guerra reciclada que vive el Nordeste

El Nordeste no ha sido ajeno a los conflictos armados protagonizados por grupos herederos del paramilitarismo en otras subregiones de Antioquia. De hecho, la subregión fue escenario de una cruenta confrontación entre estructuras postdesmovilización que disparó dramáticamente las cifras de homicidios, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas entre 2009 y 2012, particularmente en los municipios de Segovia y Remedios.

Sus protagonistas fueron el grupo conocido en sus inicios como “Rastrojos” y luego “Héroes del Nordeste”; y las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, llamadas por las autoridades de Policía Clan del Golfo. Luego de derrotar a sus enemigos, las AGC se erigieron como actores criminales hegemónicos en los centros urbanos de Segovia y Remedios. Por su parte, el férreo control militar y territorial ejercido en áreas rurales de la subregión por parte de los Frentes Darío Ramírez Castro y José Antonio Galán, del ELN; y 4 y 37 de las Farc-EP, contuvo a los planes de expansión de los “gaitanistas”.

Pero el escenario cambió luego de la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc-EP y el Estado colombiano, representado en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018). La salida de las tropas “farianas” de sus bastiones en el Nordeste condujo a un acelerado proceso de fortalecimiento y expansión por parte de los demás actores armados presentes en la subregión.

Por un lado, el ELN ha buscado ampliar su radio de influencia en los municipios mineros de la subregión, en el Cañón del Mata y la zona de influencia del río Nechí; mientras que las AGC han consolidado su poder armado en los cascos urbanos de Segovia, Remedios y sus corregimientos La Cruzada y Santa Isabel; y ya cuentan con presencia importante en Vegachí y Yalí. Desde allí también han incursionado en zonas rurales de Yolombó. Organizaciones de la sociedad civil también han denunciado la presencia de una estructura proveniente del Bajo Cauca conocida como “Caparros”³⁷.

³⁶ Según relataron paramilitares desmovilizados en tribunales de Justicia y Paz, para finales de 2003 se libraron los combates más feroces en zona rural del municipio de Santo Domingo que terminaron perfilando la derrota del Bloque Metro. Carlos Mauricio García, alias “Doble Cero”, fue asesinado en mayo de 2004 en la ciudad de Santa Marta (VerdadAbierta, 17 de abril de 2012).

³⁷ En informe elaborado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), fechado en julio de 2023, se advirtió la presencia de los “Caparros” en Segovia.

Aunque el centro de la conflictividad lo constituye ahora el control social y político del territorio y las rentas que se extraen de allí, en este caso, la millonaria extorsión a la minería informal e ilegal, los liderazgos y la movilización social continúan siendo hostigados.

El proceso expansivo de los grupos armados ilegales ha tenido claros impactos sobre la población civil, en la medida en que se ha exacerbado las intimidaciones, los señalamientos y la estigmatización, particularmente contra quienes ejercen roles de liderazgo y defensa de derechos humanos en las comunidades (...) a través de la intimidación y el ejercicio de la violencia, los grupos armados ilegales pretenden preservar el poder político y económico instalado durante la guerra, que impide la denuncia y la desobediencia de la población civil, ante la posibilidad del desplazamiento forzado o la muerte, como medidas de retaliación y aleccionamiento. Toda expresión contraria a sus intereses es concebida como disidencia y en tal sentido, sancionada, ejerciendo funciones represivas a través de la violencia indiscriminada (Defensoría del Pueblo, 2018, p. 3).

Subregión del Norte

Caracterización Territorial

Sobre las estribaciones de la cordillera Central se extiende una de las subregiones más grandes del departamento: el Norte antioqueño. En total son 7390 kilómetros cuadrados de extensión territorial, lo que representa el 11,8 % del área total de Antioquia. **Está conformada por 17 municipios: Belmira, Donmatías, Entreríos, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, San José de la Montaña, Angosturas, Briceño, Campamento, Valdivia, Yarumal, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Carolina del Principe, Gómez Plata y Guadalupe;** que a su vez se subdividen en cuatro zonas geográficas: la Meseta de Osos, Río Porce, Río Cauca y Vertiente Chorros Blancos. En ellos se concentra el 4 % de la población antioqueña y su densidad poblacional (personas por kilómetro cuadrado) es en promedio de 46,16 para toda la subregión³⁸, muy superior al promedio departamental que se ubica en 37,22 personas por kilómetro cuadrado (Comfenalco, 2017, p. 5).

Según el Censo Nacional de Población y Viviendas del DANE (2018), la población estimada para el 2024 en el Norte antioqueño es de 254 501 habitantes; de ellos, el 51 % son hombres y el 49 % mujeres. Cerca de 123 454 personas viven en las cabeceras municipales mientras que unos 124 882 habitantes viven en la ruralidad y caseríos rurales dispersos. De esta población solo el 3 % se autorreconocen como negros, mulatos, afrocolombianos, raizales y palenqueros. De los 56 resguardos indígenas presentes en todo Antioquia, la subregión solo alberga uno: Jaidukamá, ubicado en el paraje San Román, zona rural del municipio de Ituango, donde habitan 354 indígenas pertenecientes al pueblo Emberá Katio (Consejo Territorial de Planeación de Antioquia -CTPA-, Universidad de Antioquia & Gobernación de Antioquia, *S.F.*).

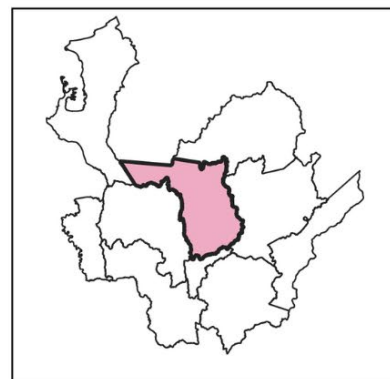
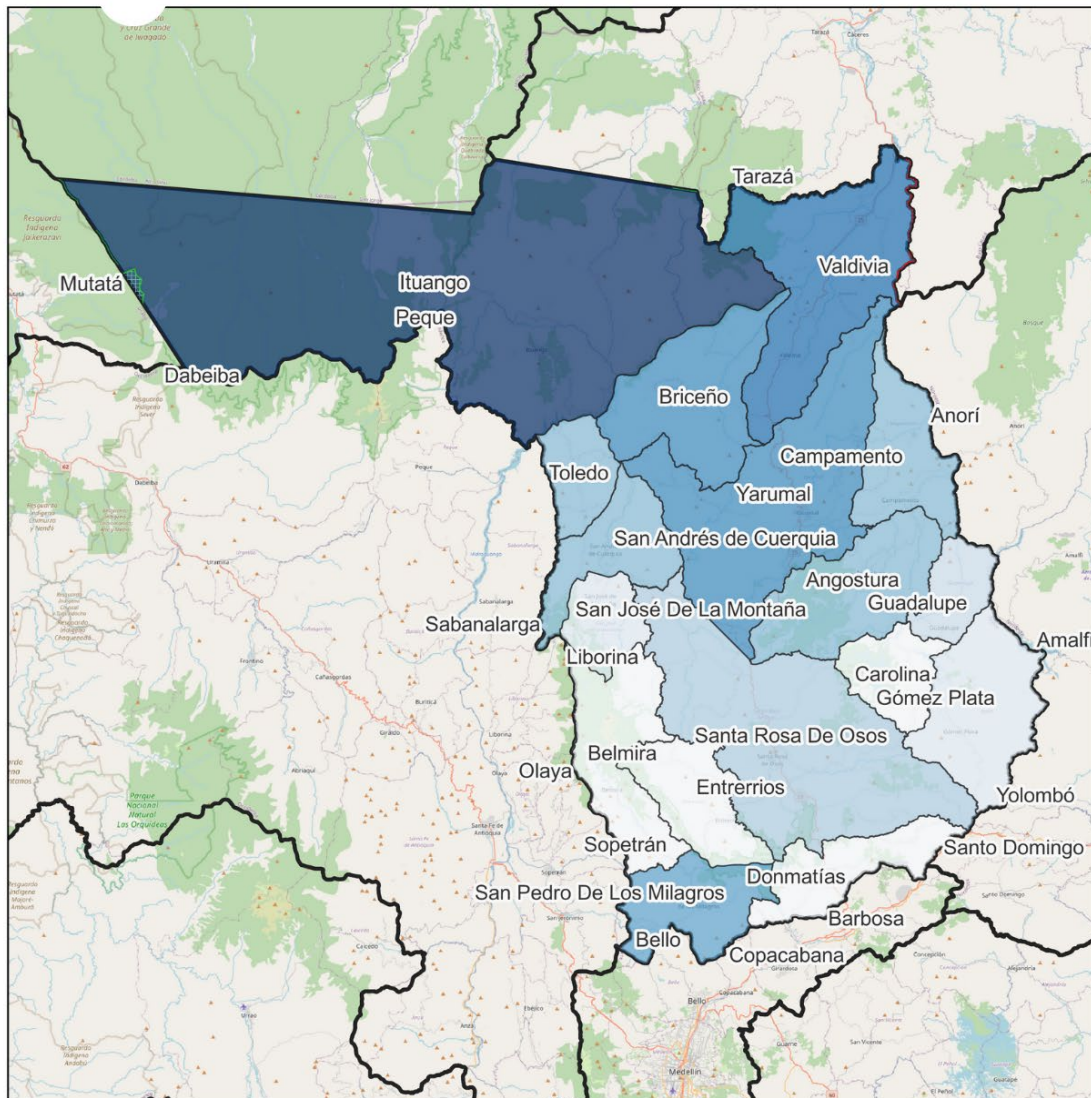
El Norte antioqueño posee una ubicación geográfica estratégica al compartir límites con el departamento de Córdoba (al norte) y con las subregiones antioqueñas de Bajo Cauca (al norte); Nordeste (al oriente); Urabá y Occidente (al occidente); y Valle de Aburrá (al sur). **Parte importante de su territorio se interna en el Parque Nacional Natural Paramillo³⁹,** que a su vez alberga al Nudo de Paramillo, accidente geográfico que nace justo allí donde la cordillera Occidental se interna en los límites de los departamentos de Córdoba y Antioquia, bifurcándose en forma de estrella para dar origen a las serranías de Ayapel, San Jerónimo y Abibe.

La subregión cuenta con una gran riqueza hídrica. Allí convergen las cuencas de los ríos Cauca, Nechí, Grande y Guadalupe, los cuales reciben aguas de otros ríos y quebradas tributarias. Por cuenta de lo anterior, el Norte antioqueño se ha convertido en el nuevo epicentro para la generación de energía hidroeléctrica del país, debido a **la construcción de los embalses Quebradona, Troneras, Miraflores, Riogrande, Porce II y Porce III, además del megaproyecto Hidroituango.**

³⁸ La mayor densidad poblacional de la subregión se encuentra en el municipio de Donmatías con 121,5 personas por kilómetro cuadrado; mientras que Ituango posee la menor densidad con 8,84 personas por kilómetro cuadrado (Comfenalco, 2017, p. 5).

³⁹ En 1977, el Ministerio de Agricultura expidió la Resolución 163 mediante la cual aprobó el Acuerdo 024 del 2 de mayo del mismo año, emitido por el desaparecido Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) que, previo concepto favorable de la Academia Colombiana de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, pidió reservar un área de 460 000 hectáreas ubicadas en jurisdicción de los municipios antioqueños de Peque, Dabeiba e Ituango y en los cordobeses de Montelíbano y Tierralta, para crear el Parque Nacional Natural Paramillo (Cruz B., 2019).

Mapa 4



Fuente: elaboración propia.

El Norte antioqueño aporta cerca del 4.56 % del PIB del departamento. Su economía se sustenta principalmente en el sector agropecuario (por lo menos en un 27 %), destacándose como la mayor productora de lácteos del departamento. Le siguen en orden de importancia el comercio (con una

participación del 15 %) y la minería, principalmente de talco⁴⁰. Su riqueza natural también se ha convertido en un motor económico gracias al turismo de aventura y ecológico que se puede practicar allí.

A juzgar por los datos de la Gobernación de Antioquia sobre pobreza multidimensional en el departamento, el Norte antioqueño presenta una calidad de vida media, al ubicarse en quinto lugar con un índice del 20.3 %⁴¹. Por su parte, el Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) ubica a esta subregión en el cuarto puesto, con un puntaje de 35.3, por detrás del Valle de Aburrá (con el mejor IMCV, con un puntaje de 45.8); Oriente (42.1) y Suroeste (37.1) (CTPA *et al*).

Con todo y ello, destacan como las mayores problemáticas territoriales la concentración de tierras y la deforestación de bosques para ganadería, agricultura, extracción de leña, entre otros fines, así como el tráfico de especies nativas. A esto se suma la alta presencia de cultivos ilícitos. Según el monitoreo de territorios con presencia de coca, realizado de la Oficina en Colombia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), **en 2022 el Norte antioqueño concentró el 39 % de hectáreas de hoja de coca sembradas en Antioquia**, consolidándose como uno de los centros productores de hoja de coca del país⁴².

Movilización ciudadana: breve caracterización

Históricamente, la ciudadanía en el Norte de Antioquia se ha organizado en torno a dos ejes: **la defensa y promoción de los derechos humanos; y la defensa del territorio frente al desarrollo de proyectos y megaproyectos minero energéticos**. A finales de la década de los 80, y ante el recrudecimiento de la confrontación armada en la subregión, campesinos de municipios como Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Briceño, comenzaron a reunirse de manera informal con el propósito de articular voluntades y capacidades que les permitiera hacerle frente a la débil presencia estatal, las duras condiciones de vida por cuenta de una frágil economía campesina y la violencia armada en el territorio.

De iniciativas de este orden surgieron, a principios de los años 90, organizaciones como la Asociación de Campesinos de Ituango (ASCIT) y la Asociación de Campesinos del Norte de Antioquia (ASCNA), las cuales se han convertido en actores relevantes en la subregión. Ambas desarrollan un fuerte trabajo de restablecimiento de derechos de las comunidades campesinas y han ejercido una importante labor de denuncia pública que ha permitido visibilizar los atropellos cometidos por todos los actores involucrados en el conflicto armado, incluido el Ejército Nacional.

⁴⁰ La producción de talco se ha concentrado históricamente en Yarumal, pero recientemente se extendió a la localidad de Campamento. Allí se encontraba la única mina de asbesto de Colombia, la cual operó hasta el 1 de enero de 2021, fecha en la que comenzó a regir la prohibición de explotar este mineral que ordenó la Ley 1968 de 2019, lo que obligó a su reconversión hacia el talco y el silicato de manganeso.

⁴¹ Según esta medición, las subregiones con mayores niveles de pobreza multidimensional son Bajo Cauca (28.5 %); Urabá (26,6 %); Occidente (24,7 %); y Suroeste (22,3 %) (CTPA *et al*).

⁴² De acuerdo con UNODC, Antioquia registró para 2022 un total de 16 167 ha; de ellas, unas 6414 ha se ubicaron en cuatro municipios del norte de Antioquia. Según este informe, esta subregión hace parte del enclave productivo Valdivia-Tarazá-Cáceres, uno de los 15 sitios del país donde la hoja de coca se consolidó como economía ilícita gracias a su permanencia en el tiempo (10 años o más).

A lo largo de los años 90 surgieron expresiones asociativas en municipios como Valdivia, Yarumal y Campamento, en las que confluían campesinos, lecheros, pescadores, defensores del territorio, coccaleros, mineros y barequeros, que derivaban su sustento de las orillas del cañón del río Cauca. Muchas de ellas se desarticulaban o simplemente desaparecieron en los años en que arreció la avanzada paramilitar. Con todo y ello, el inicio de **la construcción del megaproyecto Hidroituango** convocó nuevamente a amplios sectores de la ciudadanía a la movilización.

En ello fue fundamental el papel de **Ríos Vivos, movimiento conformado por quince organizaciones de base que a su vez acogen a pescadores, barequeros, arrieros, agricultores, cocineras, amas de casa, comerciantes, entre sectores de la ruralidad de los municipios impactados por la megaobra⁴³** que, además, comparten la condición de ser víctimas del conflicto armado. Por ello, muchas de ellas asumieron el nombre de Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM).

A través de un repertorio de acciones políticas, Ríos Vivos puso sobre la agenda pública de discusión subregional el tema de la política pública energética nacional, en tanto el desarrollo de proyectos energéticos están obligando al éxodo forzado de miles de personas a lo largo del país. **En el Norte de Antioquia, la discusión se articuló además a la defensa del territorio como espacio de vital cuidado**, ajeno a las iniciativas extractivas; y a la permanencia de las comunidades campesinas allí y que estas puedan desarrollar modos de vida acordes a sus intereses y visiones en condiciones dignas y en paz.

Las iniciativas ciudadanas en el Norte antioqueño no han sido ajenas a los señalamientos, persecución y estigmatización proferidos tanto por sectores oficiales como de la fuerza pública. De otro lado, los liderazgos comunitarios, campesinos, sociales y los defensores de derechos humanos continúan siendo víctimas de los reacomodos y reconfiguraciones violentas experimentadas durante la última década por los actores armados ilegales en sus lógicas de control territorial y social. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), entre 2016 y 2023 fueron asesinados 32 líderes sociales en siete municipios de la subregión: Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Valdivia, Yarumal, Campamento y Santa Rosa de Osos.

Dinámicas del conflicto en la subregión: actores y temporalidades

Llegada de las guerrillas y disputas con las huestes paramilitares

Por su ubicación geográfica, estratégica para los intereses de la guerra, el Norte de Antioquia ha sido retaguardia, corredor y tierra en disputa por parte de actores armados que han protagonizado el longevo conflicto armado interno, político y social colombiano. Desde el Ejército Popular de Liberación (EPL); pasando por las Farc-EP, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); hasta el Clan del Golfo (autodenominados “Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC”) y las disidencias “farianas” han librado una guerra sin cuartel para controlar el territorio e imponer su dominación política y armada.

⁴³ De los 12 municipios impactados directamente por el megaproyecto, seis se encuentran en el Norte antioqueño: Ituango, Briceño, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Valdivia.

El primer actor armado que sacó provecho de las ventajas estratégicas del territorio fue el EPL, que a finales de la década del 60 se instaló con fuerza en el Alto Sinú y Alto San Jorge, en Córdoba. Desde allí se desplegó hacia los municipios de Carepa, Chigorodó (Urabá antioqueño), Ituango, Valdivia (Norte antioqueño), Cáceres y Tarazá (Bajo Cauca), convirtiendo esta vasta zona de confluencia del Nudo de Paramillo en su fortín y retaguardia. Allí libró feroces combates con el Ejército y con las denominadas “Juntas de Autodefensa”, también conocidas como “Defensa Civil”⁴⁴, iniciativa ciudadana que operó como mecanismo de cooperación con el Ejército que, según las autoridades militares de la época, constituían un instrumento poderoso para la defensa de la Nación contra ataques terroristas⁴⁵.

Durante la década del 80 comenzaron a incursionar las Farc-EP. Para esos años, el Norte antioqueño operó como una suerte de retaguardia para el Frente 5 de esta guerrilla, que para aquel entonces sostenía una dura confrontación con el EPL y las autodefensas de Fidel Castaño en el Urabá antioqueño. Pero rápidamente consolidaron su presencia en el norte de Antioquia gracias a la creación de los frentes 18, 34 y 36. Una década después, las Farc-EP ejercían control territorial sobre poblaciones al costado norte del Río Cauca, como Toledo, Sabanalarga, Ituango y Briceño. Secuestros extorsivos, boleteo y abigeato contra hacendados y comerciantes fueron los principales hechos victimizantes cometidos por esta guerrilla en estos municipios.

Por su parte, la presencia del ELN también se registró por primera vez a principios de la década del 90. Los “elenos” consolidaron sus frentes en municipios como Zaragoza, El Bagre, Tarazá y Puerto Valdivia, desde donde se movilizaban a municipios del norte como Valdivia, Ituango y Yarumal.

Fue en este municipio donde germinó la semilla contrainsurgente que se extendería desde allí hasta el Sur de Córdoba. En 1993, por ejemplo, comenzó a operar un grupo de seguridad privada promovido por hacendados y ganaderos del territorio y que contó con la anuencia de la fuerza pública. **Se conoció públicamente como “Los Doce Apóstoles” pero realmente su nombre fue el de Autodefensas del Norte Lechero** (Peña Montoya, 12 de agosto de 2021).

Entre 1993 y 1995, este grupo ejecutó una tenebrosa campaña de “limpieza social” que cobró la vida de decenas de jóvenes y mujeres en particular en Yarumal y Valdivia. También arremetió violentamente contra liderazgos sociales y políticos vinculados con procesos de izquierda, frecuentemente tachados como auxiliadores del ELN. Aunque la Fiscalía General de la Nación realizó operativos para dismantelar esta estructura, la mayoría de estos crímenes, así como la identidad de sus financiadores o promotores⁴⁶ permanecen en la impunidad.

⁴⁴ En 1965, el entonces presidente Guillermo León Valencia profirió el Decreto 3398 del 24 de diciembre de ese año, mediante el cual “se organiza la defensa nacional” y se adoptan, entre otras medidas, el amparo, la provisión y la venta de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares a organizaciones civiles siempre y cuando sea para la defensa nacional. El decreto fue convertido en legislación permanente al ser incluido en el artículo 33 de la Ley 48 de 1968, el cual estuvo vigente hasta 1989.

⁴⁵ Una de las acciones más recordadas por la Defensa Civil en el Norte antioqueño se registró en el corregimiento Santa Rita de Ituango, cuando numerosos ciudadanos se unieron a la fuerza pública para repeler el ataque armado de guerrilleros del EPL contra la estación de Policía de esta localidad, el 13 de enero de 1972.

⁴⁶ En la creación de este grupo fue involucrado Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006/2006-2010). La Fiscalía lo acusó de concierto para delinquir agravado (por la conformación del grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles”) y de homicidio agravado, pero el Juzgado Primero Especializado de Antioquia lo absolvió en decisión fechada en noviembre de 2024.

Otro grupo que operó en Yarumal fue el conocido como “Los Costeños”, hombres enviados desde Córdoba por Salvatore Mancuso para mantener el control territorial en el Norte de Antioquia mediante labores de contrainsurgencia.

Los Costeños se quedaron hasta finales del 96, cuando apareció una persona fundamental para entender la relación de la estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia con Santiago Uribe Vélez y con el grupo de autodefensas del bloque Lechero. Esa persona se llama Rodrigo Pérez Alzate, quien adoptó el nombre de guerra de “Julián Bolívar”. Este jefe paramilitar llegó a Yarumal a finales del 96 y coincidió con el proyecto del gobierno de promover las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), que tuvieron como mayor impulsor en Antioquia a Álvaro Uribe Vélez. En Yarumal se fundó la Convivir Defensores de Yarumal, Angostura, Valdivia y Campamento, donde el revisor fiscal fue Rodrigo Pérez Alzate (Peña Montoya, 12 de agosto de 2021).

A la par, “Julián Bolívar” reclutó antiguos integrantes de “Los Costeños” y de las Autodefensas del Norte Lechero (Doce Apóstoles) para conformar una estructura armada conocido como “Grupo de Pérez”, que logró infundir terror en la población mediante asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y campañas de “limpieza social”. Sus miembros terminaron engrosando las filas del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se fortaleció con la llegada, desde el Magdalena Medio, de Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”, en 1994. Luego de instalar su centro de operaciones en el corregimiento La Caucana, de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, inició un proceso de expansión que lo llevó a confrontarse con estructuras de las Farc-EP en Valdivia, Ituango, Toledo, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, entre otros.

El Bloque Mineros desplegó crueles repertorios de violencia contra la población civil: desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, violencia sexual, entre otros, dejaron un número importante de víctimas. **Su accionar contrainsurgente también cobró la vida de militantes de movimientos políticos como la UP, A Luchar o el Movimiento 27 de febrero.**

Pero sin duda la expresión más degradada de esta guerra fue la comisión de una serie de masacres⁴⁷ en caseríos y poblaciones del norte de Antioquia donde la guerrilla tenía influencia, con el objetivo de vaciar el territorio y dejar a los insurgentes sin apoyo civil. Así justificó alias “Cuco Vanoy” en los tribunales de Justicia y Paz⁴⁸ las masacres de los corregimientos de La Granja⁴⁹ y El Aro⁵⁰, ambos de Ituango, hechos por los cuales fue condenado el Estado colombiano por parte de la Corte

⁴⁷ Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 1996 y 2009 se cometieron 14 masacres y 1029 personas fueron desaparecidas en los 12 municipios que circundan el cañón del río Cauca, de manera que, entre 1958 y 2018 la misma entidad logró documentar en los municipios de la zona de influencia de Hidroituango, 110 masacres y 2435 personas desaparecidas.

⁴⁸ Ley 975 de 2005, marco jurídico con el que se juzgó a los paramilitares desmovilizados.

⁴⁹ El 11 de junio de 1996, paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), al mando de Salvatore Mancuso, incursionaron en el corregimiento La Granja, de Ituango. Allí masacraron cinco personas, torturaron a una decena más y obligaron al éxodo forzado de por lo menos 700 labriegos.

⁵⁰ Entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, 150 combatientes del Bloque Mineros, comandados por Isaías Montes, alias “Yunior”, recorrieron el centro poblado y las veredas del corregimiento El Aro, de Ituango. En su travesía, asesinaron a 12 personas y torturaron a una decena más, quemaron más de 40 casas, hurtaron 1200 reses de ganado y secuestraron y desaparecieron a los labriegos que ayudaron a llevarlas. El hecho motivó el desplazamiento forzado de más de 1200 personas.

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El exjefe paramilitar también reconoció responsabilidad en otras masacres perpetradas por este bloque, como la de Juntas, en el municipio de Valdivia (primero de abril de 1996), donde fueron asesinadas siete personas y desaparecieron dos más; y la de Chorrillos, que tuvo lugar el 5 de mayo de 2002 en la vereda Santa Ana del municipio de Briceño, donde fueron retenidas seis personas y posteriormente fueron asesinadas cuatro de ellas y desaparecidas las otras dos.

La desmovilización del Bloque Mineros, el 20 de enero de 2006, reconfiguró el escenario de violencia en la subregión. Las Farc-EP fortalecieron su presencia y accionar en el Nudo de Paramillo, desde donde lograron constituir un importante corredor que les permitió conectar Ituango, en el Norte, hasta Anorí, en el Nordeste del departamento. Allí impusieron fuertes restricciones a la movilidad de los pobladores, tributos forzados, administraron justicia y regularon la economía de la hoja de coca.

Para frenar el avance del Ejército, las Farc-EP recurrieron a la siembra indiscriminada de minas antipersona y adelantaron una sostenida campaña de hostigamiento contra militares y policías apostados en los cascos urbanos de municipios como Ituango, Toledo, Briceño y Campamento. Los insurgentes robustecieron su red miliciana en los cascos urbanos de estos municipios, lo que se tradujo en un ambiente generalizado de zozobra y terror entre sus habitantes. La quema de buses y el ataque de la infraestructura energética hicieron parte de los repertorios de violencia desplegados en este periodo.

Por su parte, la dinámica que tuvo lugar luego de la desmovilización de los diferentes bloques de las AUC, donde se registró el surgimiento de grupos armados liderados por antiguos paramilitares desmovilizados y otros que no hicieron parte de este proceso, en particular en el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño, y el sur de Córdoba, impactó con fuerza en el Norte de Antioquia. Tras una serie de vendettas, capturas por parte de la fuerza pública, muertes y reacomodos, fueron las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, nombradas por el Gobierno Nacional como Clan del Golfo, quienes alcanzaron la hegemonía criminal en estas subregiones y desde allí, iniciaron su proceso de expansión hacia el Norte antioqueño con el objetivo de disputar el corredor de movilidad controlado por las Farc-EP.

Aunque para 2013, la tensión en la subregión era máxima por cuenta del avance de las AGC en territorio “fariano”, esta logró desactivarse rápido gracias a acuerdos suscritos entre la comandancia del Bloque Iván Ríos (al que pertenecieron los Frentes 18 y 36) y los máximos responsables de los “gaitanistas” en esta zona.

Los jefes del Bloque Iván Ríos determinaron que los acuerdos a los que se lleguen con “los bandidos” se deben respetar e imponer su cumplimiento. También se establecieron normas en su relación con ellos: “no comprometernos con nada que no podamos cumplir, no permitir su presencia en áreas de control nuestro, comprometerlos a que nos suministren información [...] suministrarnos material de guerra, abrimos paso en las zonas que tenemos por recuperar, pagar el impuesto por las propiedades, parar la compra de tierras en áreas de nuestro manejo” (VerdadAbierta, 17 de febrero de 2017).

Los acuerdos permitieron una coexistencia relativamente pacífica entre ambas estructuras, al delimitarse territorios y actividades. Así, por ejemplo, **mientras los “gaitanistas” se establecieron en los cascos urbanos municipales y controlaron el mercado al menudeo de sustancias psicoactivas y la extorsión a comerciantes, los guerrilleros se establecieron en zonas rurales y allí regularon todo el mercado de la hoja de coca.** Esta tensa calma se rompió luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano, representado por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018), y las Farc-EP, que suscitó una reconfiguración de la violencia en todo el Norte antioqueño.

Grupos postdemovilización, disidencias y crimen organizado: panorama actual de la violencia en el Norte antioqueño

La concentración de los guerrilleros de los Frentes 18 y 36 de las Farc-EP en las zonas que el Gobierno nacional dispuso para su dejación de armas, conocidas inicialmente como Zonas Veredales Transitorias de Normalización - ZVTN (hoy llamadas Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación - ETCR), generó un “vacío de poder” en municipios como Ituango, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia y Valdivia.

La dominación política, la hegemonía criminal y el control territorial que durante poco más de dos décadas mantuvieron las Farc-EP allí, no fueron suplidas por el Estado colombiano. Ni las agencias gubernamentales ni la fuerza pública llegaron a copar los espacios dejados por la insurgencia, pero quienes sí aprovecharon la situación fueron el ELN y las AGC (o Clan del Golfo).

Tras el retiro de las Farc-EP, como grupo armado ilegal en Valdivia y su concentración en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (actuales Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación - ETCR), el ELN continuó regulando el ordenamiento social y ejerciendo el control territorial en la zona norte del corregimiento Raudal y en las veredas ubicadas en el margen oriental del río Cauca y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), controlan el corregimiento Puerto Valdivia y las veredas del corregimiento Raudal ubicadas en el margen occidental. El interés de estos grupos armados ilegales se concentró en primera medida en robustecerse, fortaleciendo la presencia militar e incrementando el control social como estrategias de consolidación en sus zonas de control territorial histórico (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 4).

Donde más se ha sentido esta nueva realidad del conflicto armado ha sido en Ituango. Tras la salida del Frente 18 de esta localidad, las AGC iniciaron un proceso de expansión desde el Bajo Cauca antioqueño que las llevó a copar zonas rurales de los corregimientos Santa Lucía y La Granja.

Esta expansión ha avanzado hasta conformar un corredor que los comunica casi por completo desde el municipio de Tarazá, en la subregión del Bajo Cauca, hasta Peque en el Occidente de Antioquia, afectando la seguridad para los pobladores de los cañones de San Juanillo, San Jorge y Río Sucio - San Pablo; y las veredas Buena Vista, Cortaderal, Chontaduro, El Cedral, El Guadual, El Naranjo, El Olivar, El Singo, El Tinto, Guacharaquero, La Canturrona, La Cristalina, La Flecha, La Florida, La Honda, La Hundida, La Esmeralda, La Linda, La Paloma,

Las Cuatro, Palmitas, Palo Blanco, Peña (Pená), San Agustín de Leones, Santa Ana y Santa Rita, así como para quienes habitan en el casco urbano de Ituango (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 11).

El panorama se complejiza aún más debido al accionar de una estructura disidente de las AGC denominada “Bloque Virgilio Peralta”, también conocida como “Caparrapos” o “Caparros”, quienes en su intención de confrontar a los “gaitanistas” han incursionado en zonas rurales de Ituango. En este municipio también se registra la presencia de una disidencia “fariana” llamada Frente 36, cuya intención es reconstruir el corredor de movilidad que alguna vez tuvieron (entre Ituango y Anorí) y que ahora es controlado por las AGC. Todos estos grupos han sostenido fuertes combates con el Ejército en zonas rurales de Ituango, Briceño y Toledo.

El casco urbano de Ituango también experimenta una dinámica compleja, aunque diferente, en tanto el incremento de **la violencia obedece a factores ligados al microtráfico** y donde sus mayores responsables serían grupos de crimen organizado provenientes del Valle de Aburrá, como “Los Pachelly” (Defensoría del Pueblo, 2020).

Este escenario ha incrementado las violaciones de derechos humanos en la subregión. Homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, amenazas, hurtos, combates con interposición de población civil, reclutamiento forzado de menores de edad han sido algunos de los hechos documentados por entidades como la Defensoría del Pueblo desde 2019 a la fecha.

Subregión del Occidente

Caracterización Territorial

La subregión del Occidente antioqueño está ubicada entre las cordilleras Central y Occidental y es la principal ruta de conexión entre el Valle de Aburrá, Urabá y Mar Caribe. Limita al norte con el Urabá antioqueño y el Nudo de Paramillo; por el sur con la subregión del Suroeste y por el oriente con el Valle de Aburrá. Posee una extensión de 7921 kilómetros cuadrados, lo que constituye el 11.6 % del territorio del departamento y **está conformado por 19 municipios: Abriaquí, Armenia, Anzá, Buriticá, Caicedo, Cañasgordas, Dabeiba, Ebéjico, Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Sopetrán y Uramita.**

El río Cauca es el eje estructurante de la subregión. Cuenta con una importante riqueza en biodiversidad al encontrarse allí el páramo de Frontino y los Parques Nacionales Naturales de Las Orquídeas y Paramillo. Además, en esta subregión se encuentran dos de las localidades más antiguas del departamento, poseedoras además de bellos centros históricos municipales: Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo (Consejo Territorial de Planeación de Antioquia; Universidad de Antioquia; Gobernación de Antioquia, *S.F.*).

De acuerdo con el DANE (2018), la población estimada para 2024 en la subregión es de 224.343 habitantes, de los cuales un 46 % son mujeres y un 47 % son hombres. Alrededor de 131 583 personas viven en áreas rurales, mientras que otros 80 863 habitan en zonas urbanas. El 15 % de la población se autorreconoce como negro, mulato, afro, raizal o palenquero; por su parte, de los 56 resguardos indígenas presentes en Antioquia, 12 se encuentran en Occidente, siendo la segunda subregión del departamento con mayor número de población indígena Emberá (Eyábida y Katío); según estimaciones de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), pueden llegar a ser por lo menos 6750 nativos de ambos pueblos.

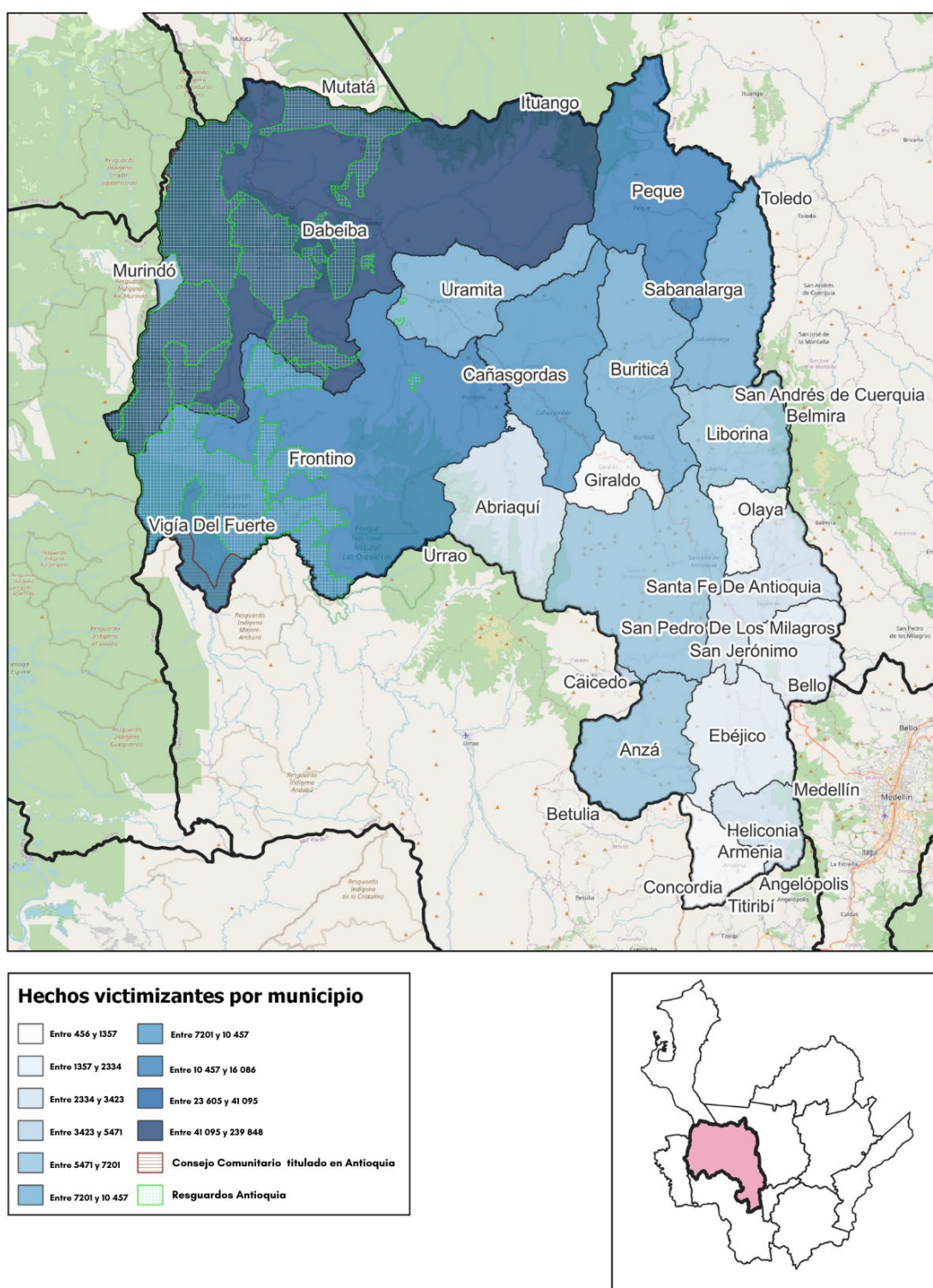
La subregión es la cuarta del departamento con los indicadores más altos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)⁵¹, después de Urabá (49.42), Bajo Cauca (44.86) y Nordeste (41.36); también se ubica como la tercera de Antioquia con más pobreza multidimensional⁵² (24.7 %) y la séptima en el Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV)⁵³.

⁵¹ El índice para el Occidente antioqueño es de 34,28 (CTPA *et al.*).

⁵² La primera subregión de Antioquia con mayores índices de pobreza multidimensional es Bajo Cauca (28,5 %), seguida de Urabá (26,6 %) (CTPA *et al.*).

⁵³ La subregión con la mejor calidad de vida es Valle de Aburrá (45,8), seguida de Oriente (42,1), Suroeste (37,1), Norte (35,3), Magdalena Medio (32,56) y Occidente (32,4) (CTPA *et al.*).

Mapa 5



Fuente: elaboración propia.

En materia económica, parte del Occidente posee una fuerte vocación agrícola reflejada en la producción de alimentos como café, maracuyá, caña panelera, plátano y cebolla. En 2023, la subregión produjo unas 107 454,11 toneladas de los productos agrícolas ya mencionados. La puesta en funcionamiento del Túnel Fernando Gómez Martínez, que amplió la conectividad del centro del país con el puerto de Urabá, no solo le ha dado un fuerte impulso al turismo, particularmente en el

denominado anillo turístico de Occidente (San Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia) sino que convirtió a los municipios del Occidente cercano en los receptores de procesos de expansión urbana del Valle de Aburrá. Paralelo al río Cauca, se desarrolla el proyecto Vía Marginal del Cauca que lo convertiría en el eje de comunicación entre el Occidente y el Caribe colombiano (Instituto de Estudios Regionales -INER, 2007).

Además, cinco municipios del Occidente integran el denominado **Distrito Minero de Frontino**: Abriaquí, Anzá, Buriticá, Dabeiba y Frontino, donde se explotan minerales como el yeso, el manganeso, concentrado de cobre, oro, platino y plata, con volúmenes de producción superiores a los cinco millones de toneladas por año. Actualmente sobresale la extracción de oro en Buriticá, donde se encuentra una de las minas de oro de alto tenor⁵⁴ más grandes del mundo y que es operada por la Zijin Continental Gold. Según el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), esta mina pasó de producir 108 309 gramos de oro en 2019 a 7 145 025 gramos de oro en 2022, cifra que supera la producción de municipios con fuerte tradición minera como Segovia (4.9 millones de gramos de oro); Remedios (3.2 millones) o El Bagre (5.1 millones).

Paradójicamente, **la producción aurífera se ha convertido en fuente de conflictos sociales en Buriticá que están impactando a toda la subregión.** Por un lado, aparece la tensa relación entre la Zijin Continental Gold y cientos de mineros artesanales y ancestrales a los que la multinacional les prohíbe trabajar en sus socavones; de otro está la presencia de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC), llamadas por las autoridades de Policía como Clan del Golfo, que buscan controlar una millonaria renta producto de la extorsión a los grandes, medianos y pequeños mineros. Ambas situaciones mantienen a la fuerza pública en vilo permanente y la población en general en estado de zozobra.

Participación y movilización ciudadana

En comparación con otras subregiones del departamento, el Occidente antioqueño presenta grandes debilidades institucionales, así como menor presencia de organizaciones de la sociedad civil que realicen actividades de acompañamiento y capacitación a las comunidades (Giraldo Buitrago, 2002). En esta subregión, por ejemplo, no se tiene identificado organización que trabaje reivindicaciones de la comunidad LGTBIQ+ u organizaciones con énfasis feminista, lo que ejemplifica dicha debilidad. La dispersión geográfica, las dificultades en la comunicación que experimentaron sus habitantes durante todo el siglo XX, sumado a la intensidad con la que se vivió el conflicto armado ayudan a explicar, en parte, esta situación.

Con todo y ello, se puede afirmar que las instancias que aglutinaron en un primer momento **las voluntades y las capacidades de agencia de las comunidades campesinas fueron las juntas de**

⁵⁴ ¿Qué es minería de alto tenor? En minería, este término hace referencia a la cantidad del metal precioso contenido por tonelada de roca extraída. En minería subterránea, como la que tiene lugar en Buriticá, esta medida se expresa en gramos por tonelada (gr/t). Se considera que la mina que se explota actualmente en este municipio del Occidente antioqueño tiene un tenor de 8 gr/t; es decir, bastante rentable para los estándares de la minería en el mundo (Open IA. 2025).

acción comunal (JAC)⁵⁵. Consideradas como instancias locales de poder político, la importancia de estos espacios radica en que la acción colectiva que tiene lugar allí:

Refuerza los lazos de pertenencia de pobladores y pobladoras con el territorio, sustrato fundamental para el surgimiento de una “comunidad políticamente imaginada”, capaz de delimitar los contornos para la reproducción de las prácticas socioculturales, definir los usos particulares, así como la defensa del espacio geográfico, además de construir poder simbólico y material (Instituto Popular de Capacitación -IPC; 2021, p. 105).

Fue a través del movimiento comunal que los colonos llegados al territorio lograron gestionar sus primeros puestos de salud, escuelas, vías de penetración, entre otros. Además, se convirtieron en escenarios de representación en tanto **los integrantes de la JAC interlocutaban con autoridades municipales y departamentales en representación de sus comunidades**. De acuerdo con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en Antioquia existen unas 6090 JAC, su gran mayoría concentradas en el Valle de Aburrá, mientras que se tiene registro de estas organizaciones en por lo menos las cabeceras municipales de los 19 municipios que integran la subregión.

Con el fin de fortalecer la capacidad de agencia de los líderes comunitarios, campesinos y sociales y mejorar las competencias administrativas de los funcionarios, en 2003 se puso en marcha la **Escuela de Gobierno del Occidente Antioqueño**, bajo el marco del Sistema Nacional de Capacitación Municipal. La iniciativa, liderada por la Escuela de Gobierno de Antioquia, propendió además por convertirse en un escenario de articulación macro regional, para la cual se creó un sistema subregional de planeación que permitió la coordinación y articulación de políticas y proyectos en los municipios; y se formularon y se pusieron en marcha los Planes Congruentes de Paz en todos los municipios del Occidente antioqueño, orientados a fortalecer la gobernabilidad y propiciar escenarios de diálogo y reconciliación en todo el territorio, fuertemente afectado por el conflicto armado.

Cabe destacar la lucha librada por los pueblos indígenas en defensa del territorio. **Los pueblos indígenas Emberá Eyábida, conocidos también como Katíos, con fuerte presencia en la subregión, han liderado a lo largo de la historia acciones colectivas tendientes al reconocimiento de la titularidad de los territorios ocupados colectivamente**, que tuvo lugar durante todo el siglo XX; y también realizaron acciones para oponerse a la realización de proyectos mineros en sus territorios y la defensa de sus resguardos como escenarios de paz, donde no se permite la presencia de ningún actor armado, sea legal o ilegal.

Muchas de estas luchas, así como las magras conquistas logradas, han tenido un alto costo en vidas humanas. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, se tiene registro de por lo menos 8000 indígenas víctimas de todos los actores del conflicto armado en la subregión. **Actualmente tiene**

⁵⁵ Las Juntas de Acción Comunal fueron creadas mediante la Ley 19 de 1958, durante el primer gobierno del Frente Nacional, del dirigente liberal Alberto Lleras Camargo. Dicho articulado, titulado “Sobre la Reforma Administrativa del Estado”, impulsó la acción comunal como una iniciativa que estimulara el desarrollo en las regiones más azotadas por la violencia política de las décadas 40 y 50 del siglo XX, gracias a la organización de las comunidades en un ente de carácter civil, pero que pudiera gestionar proyectos educativos, agrícolas, culturales y de ampliación de infraestructura civil (Monroy, 2019, p. 5; citado por: Instituto Popular de Capacitación -IPC; 2021, p. 105)

lugar un proceso de reparación colectiva con enfoque étnico en el Occidente: se trata del proceso de reparación del resguardo Choromandó, en Dabeiba.

Hoy día, gracias a los procesos de negociación política con diferentes agrupaciones armadas con presencia en la subregión (AUC; Farc-EP), existe un inusitado interés en las comunidades urbanas y rurales del Occidente antioqueño, particularmente entre los más jóvenes, por los procesos de memoria histórica y construcción de paz. Sobresalen el Colectivo de Memoria de la No Violencia, de Caicedo; los Nea Comprometidos, de Dabeiba; las Voces Femeninas por la Paz, que tienen presencia en Sopetrán, Cañasgordas y Dabeiba; el Colectivo Raíces Resilientes, de Frontino, entre otros.

Si bien, históricamente, la incipiente acción colectiva en el Occidente antioqueño ha girado en torno a los ejes de defensa del territorio, mejoramiento de la calidad de vida y defensa y promoción de los derechos humanos; la realidades socioeconómicas de la subregión han puesto nuevas agendas reivindicatorias como lo son: los conflictos socioambientales generados por las actividades extractivas, las violencias basadas en género y la reducción de las brechas de género y la continuidad de la violencia contra los liderazgos sociales.

Actores armados y dinámicas del conflicto en la subregión

Llegada de las guerrillas y disputas con las huestes paramilitares

En las lógicas territoriales que se ha desenvuelto el conflicto armado en Colombia, el Occidente de Antioquia ha representado un **objetivo de alto valor por su ubicación estratégica**. La fácil conexión con el Urabá antioqueño que permite la salida al mar; con el departamento del Chocó, a través del Suroeste antioqueño; y con el Valle de Aburrá, llevaron a todos los grupos armados al margen de la ley a desplegar formas de control social y militar del territorio con miras a imponerse hegemónicamente.

En un primer momento lo hicieron las guerrillas. Entre las década del 60 y 80 del siglo XX coexistieron allí las fuerzas insurgentes del Ejército Popular de Liberación (EPL), que veía al Occidente antioqueño como zona de retaguardia en su intención de controlar Urabá; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya intención era establecer un corredor entre el Chocó y el Suroeste antioqueño a través del Parque Nacional Natural Las Orquídeas; y las Farc-EP, cuyos planes de expansión pasaban por controlar el Occidente, pues ello les garantizaba acceder al Urabá y al Sur de Córdoba por el Nudo del Paramillo, y al Chocó cruzando el valle del río Murri.

Durante este periodo, considerado el de menor intensidad del conflicto armado en Occidente, las acciones de las guerrillas se concentraron en “ataques a cuarteles de policía y patrullas del Ejército, ataques a la infraestructura pública y privada, robo de cosechas y ganado, extorsiones y acompañamiento a movilizaciones sociales y toma de tierras, estas últimas especialmente en el inicio del periodo” (INER, 2007, p. 80).

El inicio de la década del 90 marcó un punto de inflexión en la conflictividad armada en la subregión. Por un lado, las guerrillas, particularmente las Farc-EP, incrementaron su accionar bélico, siendo recurrentes las tomas a poblaciones, los ataques a las infraestructuras públicas y privadas, los retenes ilegales y el bloqueo de vías, y el secuestro y asesinato de civiles. “Con la desmovilización del EPL, los territorios ocupados por esta agrupación fueron copados por hombres de las Farc-EP principalmente. Ante la mayor presencia de la fuerza pública se presentó la intensificación de los combates con la guerrilla y se vivió un escenario regional de mayor confrontación” (INER, 2007, p. 80).

A lo anterior se suma la intensificación de acciones por parte de grupos armados de “seguridad privada” en municipios como Dabeiba, Frontino, Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, Armenia, Heliconia y Anzá. En estos fueron recurrentes, durante la primera mitad de la década, los asesinatos selectivos, la persecución, hostigamiento y muerte de líderes sociales y políticos alternativos, las desapariciones forzadas y las masacres.

En este contexto de confrontación entre fuerzas guerrilleras y estatales, y de penetración por parte de las autodefensas y los grupos paramilitares a la subregión, el estudio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia — IEP— registra un total de 120 acciones de guerra que incluyen 58 eventos contra la vida y la libertad de las personas (7 masacres y 51 asesinatos selectivos), 40 enfrentamientos entre actores armados, 9 ataques a la infraestructura pública y privada, y 6 tomas guerrilleras. Además de secuestros, retenciones ilegales y amenazas a la población civil (INER, 2007, p. 80).

La creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y después de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), terminó agudizando la disputa por el control territorial en el Occidente antioqueño. Los paramilitares, convertidos ahora en ejército irregular con dotación y entrenamiento militar, buscaron cortar los corredores de movilidad de las guerrillas. Para ello, desplegaron una campaña de terror consistente en masacres, el asesinato de civiles a partir de “listas negras”, desapariciones forzadas, retenes ilegales, desplazamientos forzados. Quienes más sintieron el impacto de las acciones de los paramilitares fueron los liderazgos comunitarios, sociales y campesinos, y políticos de movimientos alternativos. Durante este periodo, el débil tejido social que se constituyó en Occidente desde su colonización se resquebrajó notoriamente.

Para finales de la década del 90, la subregión era todo un teatro de guerra. Por una parte, las Farc-EP hacían presencia con sus frentes 5, 18, 34, 57 y 58, que a su vez conformaban el Bloque José María Córdova (luego Iván Ríos); una disidencia del EPL llamada Frente Pedro León Arboleda también tenía presencia importante; los paramilitares a su vez confrontaban a las guerrillas con el Frente Dabeiba del Bloque Élder Cárdenas; mientras que el Ejército aumentó su presencia en el territorio a través de las Brigadas 4, 9 y 17. Fue sin duda el periodo más álgido del conflicto.

Justo entre los años 2001 y 2005 se da un aumento de las acciones lideradas por el Ejército contra las Farc-EP. Dabeiba fue el municipio donde se registró el mayor número de combates entre fuerza pública e insurgentes, seguido de Caicedo, Frontino, Abriaquí, Cañasgordas, Uramita y Peque. En estas localidades, la fuerza pública puso en marcha las operaciones Monasterio, Aniquilador y

Jeremías, posterior al secuestro y asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri.

Por su parte, la arremetida paramilitar logró arrebatarle territorios a las Farc-EP, lo que le permitió imponer su dominación en los cascos urbanos de municipios como Dabeiba, Frontino, Cañasgordas así como aumentar su injerencia en toda la subregión. La desmovilización de las estructuras que conformaron las AUC terminó generando nuevas dinámicas entre los actores armados ilegales que a su vez reconfiguró el mapa de la conflictividad en la subregión.

Por un lado, desde su nacimiento en Urabá, en 2008, el grupo armado postdesmovilización autodenominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, llamado por las autoridades de Policía ‘Clan del Golfo’, ha mantenido un proceso sostenido de expansión que le permitió posicionarse como actor criminal hegemónico en los municipios del occidente lejano. Allí controla el mercado a menudeo de narcóticos, impone tributos extorsivos al comercio y desarrolla actividades de minería ilegal, bien sea mediante la explotación ilegal de socavones⁵⁶ o bien mediante la extorsión a pequeños y medianos mineros.

Dentro de la dinámica del narcotráfico, el Occidente constituye **un territorio valioso por cuanto es zona de tránsito, bien para la salida al Mar Caribe a través del golfo de Urabá**, o bien para la salida al océano Pacífico por el departamento del Chocó. Quizás ello explique los acuerdos sostenidos en su momento por las AGC y las Farc-EP que redujeron las confrontaciones entre ambas estructuras, aspecto que se vio reflejado en la sensible disminución de los hechos victimizantes entre 2009 y 2016. Estos consistían en una delimitación de territorios y actividades: mientras la guerrilla controlaba las zonas montañosas, la ruralidad dispersa y los cultivos de hoja de coca allí presentes; los “gaitanistas” limitaban su control a las zonas urbanas y a las rutas de tránsito de cocaína hacia sus sitios de exportación (ya sea el golfo de Urabá o el Chocó) (VerdadAbierta, 17 de febrero de 2015).

Pero la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc-EP y el Estado colombiano representado por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018) reconfiguró nuevamente el escenario del conflicto armado en el Occidente antioqueño. La salida de las tropas “farianas” de sus territorios fue visto por el ELN como una oportunidad de oro para poner en marcha un plan expansivo que les permita conectar el extremo oriental del país (el Catatumbo) con el Pacífico colombiano, pasando por el Occidente y Bajo Cauca antioqueños así como por el Sur de Bolívar.

Precisamente, en 2019, la Defensoría del Pueblo advirtió lo siguiente:

El Frente de Guerra Oriental del ELN procedió a hacer la ocupación de la zona periférica de la cabecera municipal de Dabeiba, los territorios de los pueblos ancestrales de comunidades indígenas ubicados cerca al Cañón de la Llorona y las comunidades campesinas de los

⁵⁶ Este fenómeno se registra ante todo en Buriticá. En este municipio, la multinacional china Zijin Continental Gold posee un título minero para explotar un área de 1893 hectáreas que comprometen a las localidades de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Cañasgordas y Giraldo, lo que la convierte en la mina de socavón más grande de Colombia. Partes del título de la empresa han sido invadidas en reiteradas ocasiones por miembros de las AGC, quienes luego llevan personal y maquinaria para extraer oro con el que el grupo armado ilegal mantiene sus finanzas. (Paisminero.com, 11 de marzo de 2024).

corregimientos de Cruces, San José de Urama y Camparrusia, copando los territorios dejados por los Frentes 5 y 34 de las Farc-EP (..) en razón a lo anterior el ELN avanza desde el occidente por la carretera Quibdó- Medellín y la región de Medio Atrato, en el límite con las subregiones del Suroeste y Occidente de Antioquia hacia los municipios de Urrao, Frontino, Dabeiba y Peque. (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 6).

Dicho proceso expansivo choca a su vez con los planes de las AGC, quienes también han avanzado a los territorios dominados por las Farc-EP con el fin de controlar toda la cadena productiva del narcotráfico: desde el cultivo y la elaboración de pasta base, su transformación en clorhidrato de cocaína, hasta su almacenamiento, distribución local y exportación. En ese orden de ideas, los “gaitanistas” han impuesto férreos controles en áreas rurales de Peque, Dabeiba, Frontino y Uramita. Como dato curioso, ambas estructuras armadas han recurrido a excombatientes “farianos” que desertaron del proceso de paz quienes, gracias a su experticia militar y amplio conocimiento del territorio, se han convertido en mercenarios que trabajan para el mejor postor⁵⁷.

A este complejo panorama se suma la presencia de una disidencia de las Farc-EP llamada Frente 36 que a su vez, habría establecido acuerdos de no agresión y cooperación con el ELN. Aunque su radio de acción es el municipio de Ituango (Norte antioqueño), estos han incursionado en Peque con la intención de frenar el avance de las AGC desde el occidente hasta el norte del departamento.

El panorama actual del Occidente antioqueño en materia de conflictividad armada se caracteriza por una presencia aún marginal del ELN en áreas rurales de la subregión que limitan con el departamento del Chocó, una fuerte presencia en los cascos urbanos de las AGC y una lucha frontal de la fuerza pública contra esta estructura en áreas rurales. Aunque en el centro de la disputa se encuentra el control social, económico y militar del territorio, los liderazgos sociales, comunitarios y campesinos (así como los firmantes de paz) continúan estando en medio del fuego cruzado de todos los actores.

De acuerdo con la documentación hecha por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde 2016 a la fecha han sido asesinados 10 líderes sociales en el Occidente antioqueño⁵⁸. Asimismo, la misma ONG señala que desde la firma del Acuerdo de Paz a la fecha han sido asesinados siete firmantes de paz en todo el Occidente antioqueño: tres en Dabeiba, tres en Peque y uno en Cañasgordas. Desde 2016 a la fecha se han cometido dos masacres en la subregión que han dejado seis víctimas mortales (ambas en Santa Fe de Antioquia).

⁵⁷ En su Alerta Temprana 009-19, la Defensoría del Pueblo señala que el ingreso del ELN fue posible gracias a la colaboración de exguerrilleros de las Farc-EP: “Es importante señalar que el ingreso del ELN a este territorio fue posibilitado por un grupo de excombatientes del Frente 5 de las Farc-EP, que fueron expulsados del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación-ETCR- ubicado en Llano Grande Chimiadó en el municipio de Dabeiba (...) en el mes de marzo de 2018 los excombatientes en mención se vinculan al ELN, asumiendo cargos de mando dentro de la estructura armada, aprovechando su experticia militar en la zona” (p. 6). Por su parte, sobre las AGC, la Defensoría consignó: “Se propicia el reposicionamiento de las AGC en los corregimientos de Cruces, San José de Urama y Camparrusia en el municipio de Dabeiba, en esta ocasión replicando la estrategia utilizada por el ELN: la vinculación de excombatientes de las Farc-EP para aprovechar su experticia militar en la zona, logrando obtener ventajas estratégicas para el control de un territorio que en otrora fuera uno de los más importantes bastiones de la exguerrilla de las Farc-EP” (p. 12).

⁵⁸ Dabeiba aparece como el más afectado con cinco homicidios; le sigue Santa Fe de Antioquia con dos; y Peque, Frontino y Liborina con uno cada uno.

Subregión del Oriente

Caracterización Territorial

El Oriente antioqueño cuenta con una ubicación geográfica estratégica. Localizado en medio de los ríos Cauca y Magdalena, limítrofe con el Valle de Aburrá, esta subregión es de vital importancia para el departamento por sus recursos naturales, su industria y sus proyectos de infraestructura. Allí convergen seis embalses y cinco grandes centrales hidroeléctricas⁵⁹, el aeropuerto internacional José María Córdova y la autopista Medellín-Bogotá, el corredor vial más significativo para el país.

La subregión está compuesta **por 23 municipios: Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Granada, Guatapé, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente y Sonsón.**; que a su vez se subdividen en cuatro zonas geográficas que contienen, cada una de ellas, un valor cultural, social y económico en sí misma.

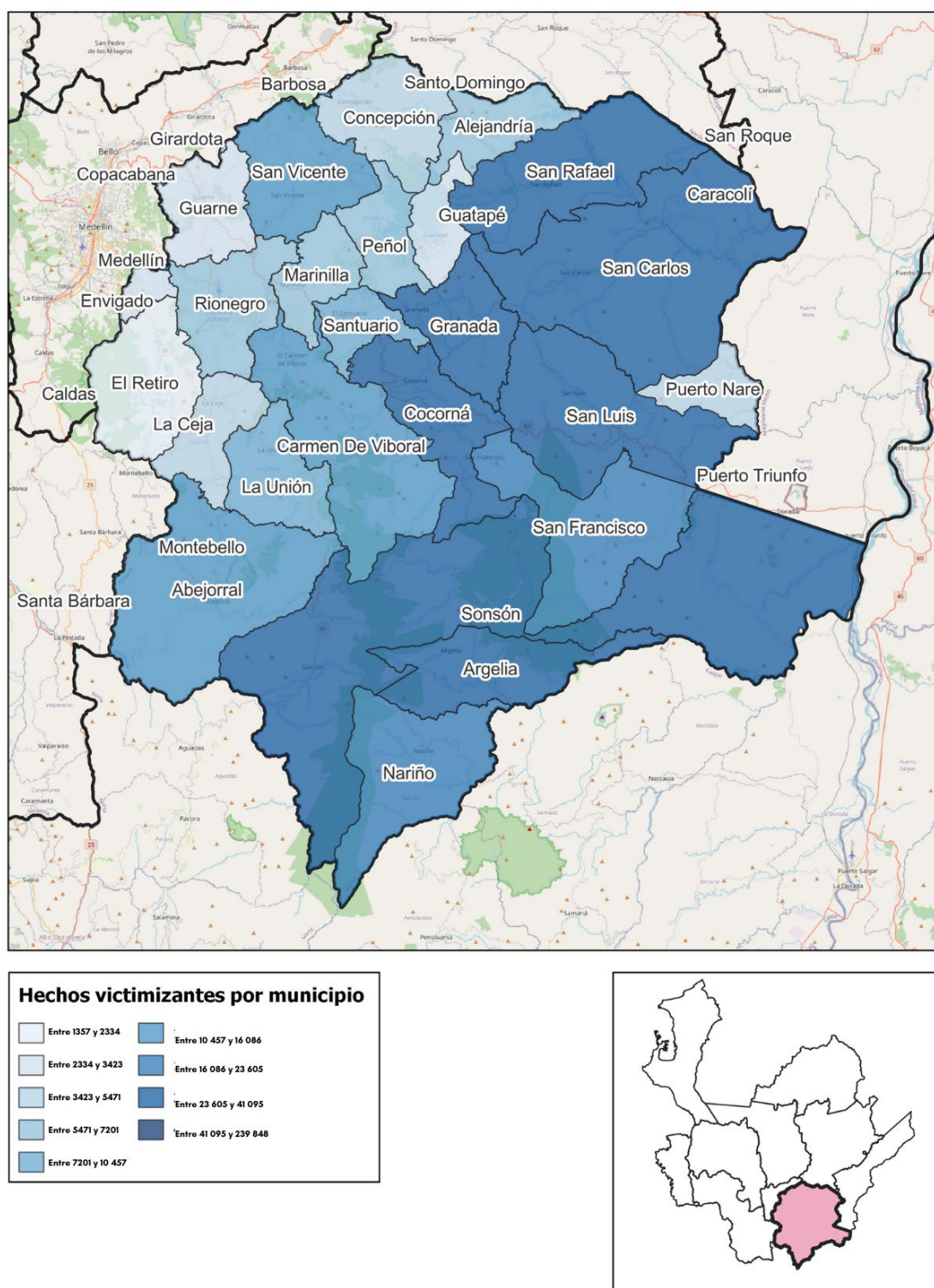
1. **Embalses:** es el centro de producción hidroeléctrica del departamento y abastece la tercera parte de la energía hidroeléctrica que se produce en Colombia.
2. **Altiplano:** en los últimos 10 años, y gracias a su cercanía al Valle de Aburrá, se ha transformado en un importante complejo industrial y de recreo, producto de la relocalización de industrias procedentes de Medellín, dinámica que también ha jalonado un fuerte proceso de urbanización.
3. **Páramo:** conocida también como el oriente lejano, es una zona rica en recursos alimenticios, ecológicos e hidroenergéticos, además de constituir un importante corredor de movilidad gracias a que conecta el río Magdalena con el Cauca Medio.
4. **Bosques:** es una zona rica en recursos naturales y si bien la extracción de madera es una fuente importante de recursos, sus dinámicas sociales y económicas están ligadas a lo que ocurra en la autopista Medellín – Bogotá.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE (2018), el Oriente antioqueño cuenta con una población estimada en 2024 de 768 509 habitantes de los cuales, aproximadamente el 44 % son hombres y el 55% corresponde a mujeres. El 59 % de su población vive en zonas urbanas mientras que el 41 % restante habita en zonas rurales.

En materia económica, el Oriente antioqueño cuenta con una amplia variedad de actividades agropecuarias, agroindustriales, industriales, comerciales, financieras, mineras y turísticas. La subregión es la principal productora de papa, maíz y frijol del departamento; también tiene una participación importante en la producción departamental de fresas, uchuvas y hortalizas; actualmente se ubica como la segunda región del país exportadora de flores y la industria porcícola y avícola también registra números importantes (Cornare *et al*, 2015).

⁵⁹ Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas y Calderas (Cámara de Comercio Oriente Antioqueño, *S.F*).

Mapa 6



Fuente: elaboración propia.

Además, según cifras de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (2022), el total de empresas asentadas en esta subregión pasó de 14 319 en 2015 a 22 833 en 2022, lo que representa un crecimiento sostenido de 59.5 %. Para dimensionar el papel del Oriente antioqueño en la economía departamental, basta decir que, en 2022, esta subregión aportó el 9,6 % del PIB de Antioquia, cifra superada solo por el Valle de Aburrá (67,6 %).

Caracterización de la movilización social: preludio de la disputa armada

El Oriente antioqueño pagó un alto costo en su intención de convertirse en el **clúster hidroenergético más importante del país**. La construcción de estos megaproyectos impactó en la vida social, política y cultural de la subregión y su inevitable transformación terminó influyendo posteriormente en la dinámica del conflicto armado.

El mejor ejemplo de ello lo constituye la construcción de la Central Hidroeléctrica de Guatapé, liderado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y considerado en su momento el proyecto de ingeniería de mayor envergadura realizado en el país en su momento. Para lograr la generación de energía proyectada por la obra⁶⁰, fue necesario inundar alrededor de 6420 hectáreas de tierras productivas, mayoritariamente dedicadas a producción agrícola, de los municipios de San Rafael, Alejandría, San Vicente, Guatapé y El Peñol. Estas dos últimas localidades terminaron siendo las más afectadas. Guatapé perdió gran parte de su cabecera municipal mientras que la de El Peñol quedó totalmente bajo las aguas de la Central.

La política de compra de tierras necesarias para el proyecto y que fue llevada a cabo por la empresa, fue considerada por la población campesina como arbitraria e injusta; su negativa a reconocer los impactos que la obra estaba generando, sumado a los reiterados incumplimientos en los planes de reubicación de los habitantes de El Peñol⁶¹ y Guatapé, y la quiebra económica en que se sumieron los labriegos mientras se desarrolló la construcción del megaproyecto, entre otros, incubaron un malestar ciudadano en estos municipios que estalló en los paros cívicos de abril de 1969 y enero de 1970.

Las protestas lograron unir a las comunidades alrededor de la defensa del territorio a todos los sectores sociales de estos municipios: campesinos, ganaderos, estudiantes, comerciantes, los políticos locales, la Iglesia Católica, docentes, organizaciones comunitarias. Semejante muestra de movilización ciudadana sería la semilla de lo que más tarde se conoció como el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño. En su momento, las protestas fueron reprimidas por la fuerza pública y buena parte de las peticiones de las comunidades fueron desconocidas o incumplidas por EPM. (VerdadAbierta, 28 de mayo de 2018).

Guatapé fue el primero de una serie de proyectos hidroenergéticos proyectados para la subregión. En la década del 70 del siglo XX se construyeron centrales hidroeléctricas en San Rafael y San Carlos. Allí también se extendió la inconformidad ciudadana, no solo por el desarrollo de estos megaproyectos, sino también por otras problemáticas sociales como el alto costo de los servicios públicos y la falta de vías de comunicación.

⁶⁰ El objetivo del proyecto era generar en su primera fase unos 250 000 kilovatios (para los años 60 del siglo XX todas las plantas de generación de energía de Empresas Públicas de Medellín, responsable del proyecto, generaban 170 000 kilovatios) y una vez culminadas las obras, alcanzar los 550 000 kilovatios (VerdadAbierta, 28 de mayo de 2018).

⁶¹ “El más flagrante incumplimiento fue la reubicación de la cabecera municipal de El Peñol. Así, mientras la construcción de la Central continuó su marcha, produciéndose el llenado de la represa en junio de 1970 para luego ser inaugurada oficialmente en julio de 1971, las obras del nuevo Peñol, para ese momento, no alcanzaban el 10 por ciento, tal como lo consignan diversas investigaciones sociales sobre movimientos y paros cívicos en el Oriente antioqueño, entre ellas la de Orlando Sáenz Zapata” (VerdadAbierta, 28 de mayo de 2018).

El malestar de la población no fue bien recibido por las élites del Oriente antioqueño ni por las autoridades departamentales, para quienes:

La movilización social emprendida desde los años 60 en contra de proyectos hidroeléctricos no fue entendida como una iniciativa ciudadana en búsqueda de una justicia social, sino como un problema frente al cual se reaccionó con negligencia o con la tolerancia hacia el uso de la violencia, acompañada de una impunidad estructural que facilitó la proliferación y continuación prolongada de las agresiones y estigmatización contra las organizaciones sociales y las expresiones populares de protesta (Corporación Jurídica Libertad - CJL, 2020, p. 13).

La agitación social que comenzó a recorrer los municipios del Oriente antioqueño dejó uno de los primeros homicidios por motivos políticos y económicos en la subregión:

En el caso de El Peñol, el 19 de enero de 1965 fue asesinado Demetrio Galeano, médico del pueblo y propietario de varios terrenos y fincas en los cuales Empresas Públicas de Medellín (EPM) proyectaba construir el embalse que permitiría aprovechar el potencial hidroeléctrico del río Nare. El señor Galeano se negaba a vender su tierra por el arraigo que tenía allí y porque consideraba que los campesinos que trabajaban en ellas – cultivando fique, fríjol y maíz – se iban a quedar sin la fuente de su subsistencia (CJL, 2020, p. 14).

La consolidación y expansión del **Movimiento Cívico Regional** tuvo como correlato el **recrudescimiento de los señalamientos y la estigmatización de los liderazgos en el Oriente antioqueño**, quienes fueron tachados de revoltosos y comunistas, excluyéndolos así de espacios de diálogo y participación democrática. Pero, pese a la represión y persecución a la movilización ciudadana, el Movimiento Cívico logró posicionarse como una alternativa real de poder político en la subregión, hecho que no fue bien recibido por los sectores políticos tradicionales.

Fue en este contexto político-electoral que arreció la violencia contra los integrantes del Movimiento Cívico. En menos de una década, la subregión vio caer en medio de las balas asesinas a reconocidos dirigentes comunitarios como Julián Conrado (23 de octubre de 1983); Gabriel Velásquez Urrego (28 de febrero de 1986); William Tamayo Giraldo (20 de marzo de 1986); Froilán Arango Echavarría (28 de noviembre de 1987); Jorge Alberto Morales (11 de abril de 1988); Luis Felipe Noreña (junio de 1988); Alberto Giraldo Castaño (7 de octubre de 1988); Antonio Martínez Moreno (5 de enero de 1989), Gabriel Jaime Santamaría (27 de octubre de 1989). Justo cuando Colombia se aprestaba a celebrar las primeras elecciones populares para elegir alcaldes y gobernadores, en 1989, el 30 de diciembre de ese año sicarios asesinaron en Marinilla a Ramón Emilio Arcila, candidato a la alcaldía de esta localidad (CJL, 2020, p. 18).

Estudios realizados por organizaciones de la sociedad civil, como la Corporación Jurídica Libertad (CJL) apuntan a que esta violencia fue perpetrada por grupos embrionarios del paramilitarismo, quienes actuaron bajo la anuencia de la fuerza pública⁶². Este escenario se convirtió en el caldo de

⁶² Según la CJL (2020), este primer ciclo de violencia, caracterizado por el exterminio al Movimiento Cívico de Oriente, iría desde el asesinato de Julián Darío Conrado David, el 26 de octubre de 1983, y terminaría con el de Jesús Ríos Arias,

cultivo que facilitó el ingreso de las guerrillas de las Farc-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que incrementó la disputa territorial en la subregión al punto de convertirla en un complejo teatro de guerra durante las décadas del 80 y 90 del siglo XX, que a su vez derivó en la mayor crisis humanitaria del departamento.

Dinámicas del conflicto en la subregión: actores y temporalidades

Agitación social e ingreso de las guerrillas

Los asesinatos perpetrados contra el Movimiento Cívico por parte del Ejército y los paramilitares, sumado al descontento popular y el clima de agitación social y política de aquellos años en el Oriente antioqueño, constituyeron el ambiente propicio para la incursión de las guerrillas en el territorio. La presencia del ELN comenzó a advertirse a finales de la década de los 80 del siglo XX, luego de varios hechos luctuosos. El primero de ellos fue el asesinato del sacerdote Bernardo López Arroyave, en mayo de 1987, en la región del Nus (Nordeste de Antioquia). El segundo fue la masacre de varios jóvenes, en septiembre de 1982, en zona rural del Magdalena Medio antioqueño, subregión limítrofe con el Oriente antioqueño. Allí perdieron la vida los hermanos Carlos y Alirio Buitrago, pertenecientes a un movimiento eclesiástico influenciado por las ideas de la denominada *Teología de la Liberación*.

Sus muertes dieron paso a la creación de dos frentes de esta guerrilla que fueron bautizados Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyave. **Su principal influencia estuvo en las zonas de Embalses y Bosques, pues la intención de los insurgentes era posicionarse en áreas adyacentes a la infraestructura hidroeléctrica.** El ELN logró una presencia tan importante en el Oriente antioqueño que fue esta guerrilla la que realizó más acciones militares entre 2000 y 2004.

La presencia del ELN en la región alcanzó una gran relevancia nacional dentro de esa guerrilla; el Frente Carlos Alirio Buitrago llegó a ser el segundo en importancia para ese grupo insurgente por el número de hombres, que se estimaba para la década de 1990 en más de 700 armas, y sumados sus cuadros milicianos llegaría a superar los 1300; además, contaba con gran capacidad operativa y ejercía control sobre una región de alto valor estratégico (Restrepo García, 2021, p. 40).

La expansión de los “elenos” chocó en su momento con los intereses y pretensiones de la otra guerrilla que tuvo presencia importante en el Oriente antioqueño: las Farc-EP, lo que coadyuvó a su repliegue y posterior debilitamiento. Para entender esto, es preciso conocer primero la génesis “fariana” en el territorio. Su presencia se registra para los primeros años de la década del 80 del siglo XX, pero esta obedeció inicialmente a un repliegue estratégico de sus tropas desde el Urabá antioqueño, donde

el 3 de mayo de 1995, dejando 224 víctimas fatales. Los principales responsables de estos hechos serían grupos paramilitares como el MAS, el Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), estos últimos fueron quienes mayor tiempo operaron en la región y a quienes mayor cantidad de acciones se les atribuye contra el Movimiento Cívico. Un pico significativo de la arremetida paramilitar en este periodo se daría en San Carlos a mediados de 1985, cuando se acribillaron más de 30 personas en unos pocos meses.

sostenía una cruenta confrontación con el Ejército Popular de Liberación (EPL) y los paramilitares de Fidel Castaño.

Pero, luego de la VII Conferencia de las Farc-EP⁶³, que tuvo lugar en los Llanos del Yarí en septiembre de 1982; y de la VIII Conferencia⁶⁴, llevada a cabo en La Uribe (Meta) en mayo de 1993, el Oriente antioqueño cobró importancia capital para esta insurgencia, entre otras, por su cercanía con Medellín, la segunda ciudad en importancia del país, y por la relevancia de los recursos económicos y de infraestructura allí presentes. Así, gracias al desdoblamiento del Frente 5 nace el Frente 9, que operó en los municipios de San Carlos, San Luis, San Rafael, Cocorná, Concepción y Alejandría. Un par de años más tarde nace el Frente 47, que se asentó en Sonsón, Argelia, Nariño y en límites entre San Francisco con la región del Magdalena Medio. El Frente 5 también tuvo influencia en el territorio, sobre la vía Medellín-Bogotá, esto con el fin de afectar la infraestructura hidroeléctrica, teniendo presencia en los municipios de Cocorná, San Luis, San Carlos, San Rafael y Granada (Restrepo García, 2021).

Para la segunda mitad de la década del 90, las Farc-EP pasaron a la ofensiva total en materia militar. Para mostrar su control territorial, desplegaron formas de constreñimiento y violencia política que puso en jaque el proceso democrático y la gobernabilidad de los municipios. Tristemente célebres son de este periodo las tomas armadas a los municipios de Nariño⁶⁵, Granada⁶⁶, San Luis⁶⁷ y su corregimiento El Prodigio⁶⁸, que no solo dejaron un alto nivel de destrucción, también motivaron un éxodo forzado sin precedentes en el territorio. Los ataques de esta guerrilla llegaron a su punto más alto en los primeros años del siglo XXI. En 2001, por ejemplo, entre marzo y septiembre de ese año, las Farc-EP realizaron tres masacres en el municipio de San Carlos, donde asesinaron 15 personas.

⁶³ En esta se diseña el “Plan Estratégico”, una serie de directrices militares y políticas que tenían como fin la toma del poder en una campaña de ocho años. Como parte fundamental de esta campaña, las Farc, que a partir de allí adoptaron el sufijo “Ejército del pueblo -EP-”, se plantearon copar las áreas circundantes de las principales ciudades capitales (Dávila *et al*, 2021).

⁶⁴ Uno de los principales cambios en la estrategia de las Farc fue la agrupación de todos los frentes en siete grandes bloques que fungieron como instancias de coordinación militar para el cumplimiento del Plan Estratégico planteado en la VII conferencia. “A cada bloque y Comando Conjunto le fueron asignadas metas puntuales en materia de crecimiento de tropa, obtención de armamento, aumento de recursos económicos y logros militares. La más importante era ‘la aproximación de la fuerza militar a los centros urbanos, consolidando áreas a su paso con organización de masas y presencia miliciana’ (Dávila *et al*, 2021).

⁶⁵ En 1999, hombres de los Frentes 9 y 47, al mando de Elda Neyis Mosquera, alias “Karina”, se tomaron Nariño, en la subregión de Páramos. Sobre las 4:00 de la tarde del viernes 30 de julio, un vehículo cargado con explosivos irrumpió en el parque principal del municipio y explotó luego de estrellarse contra una vivienda. Durante toda la noche de ese viernes, todo el sábado 31 y la madrugada del domingo 1 de agosto, los guerrilleros hostigaron con cilindros bomba, disparos y morteros la estación de Policía. Destruyeron más de dos cuadras alrededor y causaron la muerte de nueve policías y siete civiles, más la retención de ocho miembros de la fuerza pública y 16 personas heridas (Restrepo García, 2021, p. 31).

⁶⁶ En Granada, entre el 6 y 7 de diciembre de 2000, unos 5000 guerrilleros de los Frentes 9 y 47 de las Farc-EP al mando de alias “Karina” y alias “Santiago” se tomaron esta población ubicada a 73 kilómetros de Medellín. Esta fue una de las tomas armadas que mayor conmoción causaron en el Oriente antioqueño por su cercanía con la principal ciudad del departamento. Durante las más de 20 horas que duraron los enfrentamientos perdieron la vida 19 personas, cinco de ellas policías, otras 21 resultaron heridas y más de 200 viviendas quedaron destruidas (Restrepo García, 2021, p. 32).

⁶⁷ El 11 de diciembre de ese mismo año, los Frentes 9 y 47 lanzaron un feroz ataque con cilindros bomba y morteros contra la estación de Policía de San Luis. El ataque duró todo el día y allí perdieron la vida ocho uniformados y dos civiles y fueron secuestrados otros cinco policías (Restrepo García, 2021, p. 32).

⁶⁸ El 4 de marzo de 2001, unos 200 hombres al mando de alias ‘Karina’ lanzaron un ataque militar sobre el casco urbano del corregimiento El Prodigio, del municipio de San Luis (Restrepo García, 2021, p. 33).

La consolidación de los Frentes 9 y 47 de las Farc-EP generó confrontaciones, no sólo con Ejército y paramilitares, sino también con el ELN, mayores responsables de los ataques a la infraestructura energética que tuvo lugar en la década del 90. Los “elenos” constituían un obstáculo para el copamiento territorial “fariano”, lo que motivó disputas por el control de zonas claves para unos y otros. Estos enfrentamientos llevaron al ELN a replegarse en varios de los territorios que eran de su dominio. Las huestes “elenas” terminaron seriamente debilitadas en esta confrontación, pero también por la desertión de sus integrantes y el cerco llevado a cabo por unos fortalecidos grupos paramilitares que llegaron al Oriente antioqueño con la firme intención de arrebatárle el territorio a las guerrillas.

La expansión y consolidación paramilitar

Promediando la década del 90, los grupos paramilitares entraron en una nueva fase, más activa, en su lucha por el control territorial. Pero esta no consistió en confrontar abierta y directamente las tropas guerrilleras. Se trató de una intensa campaña de terror que buscó, por medio de la comisión de masacres, asesinatos selectivos, campañas de “limpieza social”, desapariciones forzadas, amenazas y expulsiones forzadas, recuperar las cabeceras municipales, cortar corredores de suministro y obligar al repliegue de las fuerzas insurgentes.

Uno de los principales protagonistas de esta barbarie fueron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), al mando de Ramón Isaza, alias “El Viejo”. Entre 1996 y 1997, esta estructura amplió su radio de acción a lo largo de la autopista Medellín-Bogotá gracias a su articulación con las nacientes Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la creación de sus frentes José Luis Zuluaga y Héroes del Prodigio, al mando de alias “McGiver” y “Terror”, respectivamente. Las ACMM también coordinaron acciones con el Bloque Metro (comandado por Carlos Mauricio García, alias “Doble Cero”), lo que les permitió controlar un territorio utilizado como corredor estratégico por las guerrillas entre la región del Nus (Nordeste del departamento) y el Oriente antioqueño.

El accionar paramilitar incrementó la violencia a niveles nunca vistos. **Entre 1998 y 2003 se registraron 62 masacres en el Oriente antioqueño atribuibles a los paramilitares.** El desplazamiento forzado como estrategia de guerra sumió a la subregión en la más grave crisis humanitaria: más de 33 000 personas fueron expulsadas de sus tierras entre 2000-2004. (Instituto Popular de Capacitación -IPC, 2006, p. 55). No obstante, la cohesión de los grupos paramilitares se vio truncada por el enfrentamiento entre el Bloque Metro y los hombres de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, nombrado por Carlos Castaño como inspector general de las AUC. La vendetta comenzó en Medellín y se expandió a otras regiones, incluyendo el Oriente antioqueño.

La confrontación armada terminó decantándose a favor de los hombres de ‘Don Berna’, lo que incrementó su poder sobre estructuras criminales en el Valle de Aburrá, Oriente antioqueño, el Urabá antioqueño y Sur de Córdoba. Una muestra de lo anterior lo constituyó la desmovilización de 855 combatientes del Bloque Cacique Nutibara, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2003, en el Palacio de Exposiciones de Medellín. Fue el primer grupo paramilitar que se desmovilizó como parte de los acuerdos suscritos entre el llamado Estado Mayor de las AUC y el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006/2006-2010) en el marco de las negociaciones de paz.

El acto de dejación de armas estuvo rodeado de polémicas, señalamientos y denuncias sobre las verdaderas intenciones de paz de los paramilitares. Investigaciones de organizaciones de la sociedad civil (que luego fueron corroboradas con los testimonios de combatientes desmovilizados en los tribunales de Justicia y Paz), señalaron que antes de terminar ese año, antiguos combatientes del Bloque Cacique Nutibara crearon el Bloque Héroes de Granada, que tuvo presencia en el Valle de Aburrá, Suroeste, Nordeste y Oriente antioqueño.

Dichas investigaciones catalogaron en su momento al Héroes de Granada como una extensión de la Oficina de Envigado cuyo fin no era otro que controlar zonas rurales que les permitiera tener un dominio de los corredores para el narcotráfico y otras actividades ilícitas, lo que se tradujo en un cambio en la dinámica de la economía ilegal y el conflicto en el Oriente antioqueño. El Bloque Héroes de Granada se desmovilizó el primero de agosto de 2005 en el corregimiento Cristales, de San Roque (Nordeste antioqueño)⁶⁹.

Ejecuciones extrajudiciales: crímenes de la fuerza pública en un contexto de guerra

Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder (2002-2006/2006-2010), las fuerzas militares y de Policía pasaron a la ofensiva en todo el territorio nacional, gracias un proceso de fortalecimiento tecnológico, de armamento y de pie de fuerza⁷⁰ y a la implementación de la política de Seguridad Democrática.

En el Oriente antioqueño, el Ejército Nacional puso en marcha sendas operaciones militares para recuperar el control territorial. Entre las más destacadas se encuentran la Operación Meteoro (2002), donde unos 2500 soldados se apostaron a lo largo de la autopista Medellín-Bogotá e instalaron retenes cada tres kilómetros con el objetivo de recuperar la vía. También figura la Operación Marcial Norte (2003), ejecutada por militares de la Cuarta Brigada del Ejército, que se concentró en la localidad de San Francisco y cuya finalidad era atacar campamentos de los Frentes 9 y 47 de las Farc-EP y del Carlos Alirio Buitrago del ELN; y la Operación Espartaco, llevada a cabo en los municipios de San Carlos, Sonsón y San Luis en contra de los Frentes 9 y 47 de las Farc-EP y el Frente Bernardo López Arroyave del ELN (Restrepo García, 2021, p. 53).

El aumento de estas operaciones tuvo correlación directa con el descenso del accionar paramilitar en la región; sin embargo, en su desarrollo se presentaron denuncias masivas de violaciones a los derechos humanos, que fueron documentadas por organizaciones de la sociedad civil:

En la estrategia contrainsurgente ejecutada por la fuerza pública se presentaron 45 casos de crímenes de lesa humanidad, que corresponden al 1,4 % del total de casos registrados en bases

⁶⁹ Con las negociaciones y posterior desmovilización de las AUC, se registró una disminución significativa de la tasa de homicidios en la subregión, la cual bajó de 98,2 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2004, a 29,6 en 2006 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2010).

⁷⁰ Este fortalecimiento fue posible gracias a la firma del 'Plan Colombia', una iniciativa suscrita entre los gobiernos de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) por Colombia; y Bill Clinton (1993-2001), por Estados Unidos. El acuerdo de cooperación contempló entregar a Colombia un paquete de ayuda por 1300 millones de dólares, de los cuales el 80 % se destinó para mejorar las capacidades operativas de la fuerza pública en su lucha contra el narcotráfico y el 20 % restante para proyectos de inversión social.

de datos. De los crímenes presentados, 19 son ejecuciones extrajudiciales, siete corresponden a amenazas, seis a detenciones arbitrarias, cinco acciones causaron desplazamiento forzado, cuatro asesinatos, dos torturas y dos casos de violencia sexual. Aunque el porcentaje es relativamente bajo, los testimonios de las víctimas relatan la participación conjunta con los ejércitos paramilitares o la negativa expresa de combatirlos e impedir sus acciones. Adicionalmente, de los 3067 casos registrados, 1189 aparecen sin identificar su autor y en su mayoría los crímenes corresponden al asesinato (Instituto Popular de Capacitación -IPC, 2006, p. 88).

Viejas disputas, nuevos órdenes

Si bien la desmovilización de los grupos paramilitares y la estrepitosa derrota militar sufrida por las guerrillas menguaron la violencia en el Oriente antioqueño, persiste una delicada situación en materia de orden público y vulneración de derechos humanos por cuenta del reacomodo y expansión de estructuras criminales que tienen intereses estratégicos en la subregión.

El principal de ellos es el narcotráfico. El incremento de los cultivos de hoja de coca, particularmente en la zona de Bosques (San Luis y San Francisco) y Páramo (Nariño, Sonsón y Argelia), y la instalación de laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína a lo largo y ancho de la subregión se convirtió en la piedra angular que facilitó la consolidación y expansión de estructuras criminales herederas del paramilitarismo, así como la incursión de otras expresiones criminales provenientes de otras subregiones.

Según Conciudadanía (2021), este proceso de reacomodo-expansión ha llevado a un crecimiento exponencial de estos grupos al punto que, en la actualidad, no existe municipio del Oriente antioqueño que no registre presencia de alguna de estas estructuras. Por un lado, está el denominado Clan Isaza, integrado por excombatientes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), quienes recuperaron el control de sus antiguos territorios como San Luis, San Francisco, Argelia, Nariño y Sonsón, siendo el corregimiento La Danta de este último municipio su principal centro de operaciones.

Por otro lado está el llamado “Clan Oriente”, cuya presencia fue ratificada por las autoridades de Policía en Sonsón, La Unión y Nariño. Allí también se identificaron actividades de la organización criminal “El Mesa”, una estructura proveniente del Valle de Aburrá que logró posicionarse en la subregión gracias al sometimiento (a sangre y fuego) de pequeñas bandas delincuenciales locales. Por último, se encuentra el Clan del Golfo, autodenominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, que logró conectar algunos tramos de las zonas de Bosques y Embalses con el Nordeste de Antioquia. Su presencia es realmente notoria en San Rafael, San Carlos, San Luis y el corregimiento El Prodigio de este municipio; así como en los municipios de Puerto Triunfo y Puerto Nare, estos últimos de la subregión del Magdalena Medio pero que limitan con el Oriente de Antioquia.

Del reordenamiento armado sobresalen dos patrones: en territorios con baja densidad demográfica y ubicación dispersa se posicionaron estructuras armadas más o menos homogéneas que quieren controlar zonas de cultivo y rutas de transporte, mientras que en

aquellos territorios con alta densidad demográfica e integradas a importantes centros urbanos las grandes estructuras armadas por lo general se presentan con una configuración reticular en la que pequeñas y medianas bandas locales se vinculan al funcionamiento de las grandes estructuras, lo que se conoce como franquiciamiento del crimen organizado, esta situación ocurrió en el municipio de Sonsón, y explicaría los altos índices de homicidios entre 2018 y 2021.

En la zona del Altiplano están asentadas grandes estructuras armadas como El Mesa, la Oficina y las AGC, también la banda local Los Pamplona, la cual cuenta con una considerable capacidad armada y ejerce control territorial en barrios y veredas de Rionegro, Marinilla y El Carmen de Viboral. A diferencia de las zonas Bosques, Embalses y Páramo, a excepción de Sonsón, el Altiplano cuenta con una importante densidad demográfica, está estrechamente ligada con Medellín, y tiene dos referentes de movilidad, el aeropuerto José María Córdova y el Túnel de Oriente sobre la vía Las Palmas, importante eje de comunicación entre los grupos organizados de Medellín y el Área Metropolitana con los municipios del Altiplano (Conciudadanía, 2021, p. 37).

La presencia de estas estructuras explicaría el aumento de hechos victimizantes como el homicidio. Datos del Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente del Oriente Antioqueño señalan que entre 2018 y 2022 se registraron 759 homicidios en toda la subregión; de ellos, unos 76 eran menores de edad. Rionegro, Sonsón, Carmen de Viboral y Marinilla aparecen como los municipios más afectados por este flagelo (Gallego, 1 de febrero de 2023, par. 2). También preocupa a las organizaciones de la sociedad civil el aumento de la desaparición y el reclutamiento forzado de menores de edad.

El aumento de homicidios en la zona del Altiplano podría estar asociada a los procesos de sometimiento y captación de las pequeñas bandas locales por parte de las grandes estructuras armadas, quienes pretenden imponer sus órdenes y lograr fidelidad y obediencia de los grupos locales, tal como sucedió en el municipio de Sonsón, donde la estructura El Mesa logró someter a la banda local La Calzada, tomó control del microtráfico y luego disminuyeron los homicidios. Algo similar ocurrió en El Carmen de Viboral, donde El Mesa logró establecer una hegemonía y una superioridad de sus franquicias frente a sus competidores. Mientras que en Rionegro y Marinilla, son Los Pamplona quienes han logrado dominar a los demás (Conciudadanía, 2021, p. 43).

Un segundo momento de movilización social

Un hecho característico de la subregión del Oriente antioqueño es la **capacidad de sus habitantes para organizarse y movilizarse aún en medio de las más complejas situaciones de violencia**. Fue así como en un contexto de inseguridad, caracterizado por múltiples hechos victimizantes —muchos de ellos dirigidos contra alcaldes y actores involucrados en procesos electorales que deterioraron el tejido social y afectaron la gobernabilidad y habitabilidad en la región—, nació la Asamblea Provincial del Oriente Antioqueño.

Las amenazas proferidas por las Farc-EP contra alcaldes municipales suscitaron una reacción colectiva de rechazo, que culminó en la declaración de la IX Asamblea Provincial como Asamblea Provincial Constituyente del Oriente Antioqueño, en 1998. Esta fue concebida como una expresión de soberanía popular y como una reivindicación del derecho legítimo de las comunidades a elegir libremente a sus autoridades. La primera sesión de esta Asamblea se llevó a cabo en septiembre de 2002, en Marinilla, y a partir de allí se promovió la realización de asambleas municipales en toda la subregión (Hincapié Jiménez, 2008, p. 119).

A este proceso se articularon diversos movimientos sociales y colectivos locales. Uno de los más representativos fue el Movimiento de Mujeres del Oriente (AMOR), creado con el propósito de brindar acompañamiento psicosocial a las víctimas del conflicto armado y contribuir a la reconstrucción del tejido social. La Asamblea Provincial Constituyente, en coordinación con los gobiernos municipales, promovió espacios de interlocución directa con los actores armados con el objetivo de mitigar la violencia que se intensificó entre finales de la década del 90 y los primeros años del siglo XXI. Tras el inicio del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en 2003, las asambleas orientaron sus esfuerzos hacia iniciativas centradas en la paz, la reconciliación, la reparación, la verdad, el ordenamiento territorial y la reconstrucción del tejido social, con un enfoque de equidad y justicia social.

Asimismo, surgieron nuevas organizaciones y asociaciones de víctimas y de mujeres en la región, entre las que se destacan la Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanas (Aproviaci), la Asociación de Víctimas por la Vida y la Dignidad (Asovida), la Asociación de Mujeres del Municipio de Marinilla (Asomma) y la Asociación de Comunicadores del Oriente Antioqueño, entre otras.

Aunque la delicada situación de derechos humanos, particularmente civiles y políticos, continúan estando en el centro de la agenda reivindicatoria, actualmente situaciones como los fuertes procesos de gentrificación, el urbanismo sin planificación y los proyectos hidroenergéticos (esta vez en forma de pequeñas centrales hidroenergéticas - PCH) han motivado la articulación de sectores comunitarios, campesinos, juveniles, estudiantiles, entre otros, en nuevas plataformas como el Movimiento Social por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio (MOVETE), que nació en 2013 “para organizarse, informar y luchar contra las microcentrales, reforzando las relaciones entre las comunidades y adelantando algunas acciones jurídicas para buscar formas de resistencia a estos proyectos, así como germinando movilizaciones que concienticen a las poblaciones del Oriente antioqueño” (Perdomo, 22 de octubre de 2017).

Subregión del Suroeste

Caracterización territorial

Entre las vertientes que forman las cordilleras Occidental y Central al ingresar a suelo antioqueño se erige la subregión conocida como Suroeste. Se trata de un vasto territorio de 6513 kilómetros cuadrados donde convergen el cañón del río Cauca en su tránsito hacia el norte del departamento, así como la cuenca del río San Juan. Está conformada por **23 municipios: Fredonia, Venecia, Jericó, Támesis, La Pintada, Valparaíso, Caramanta, Tarso, Pueblorrico, Montebello, Santa Bárbara, Betulia, Salgar, Urrao, Betania, Andes, Amagá, Angelópolis, Hispania, Ciudad Bolívar, Concordia, Jardín y Titiribí**; que a su vez están divididos en cuatro cuencas: Cartama, Penderisco, Sinifaná y San Juan (ver tabla). Posee una ubicación estratégica por cuanto comparte límites con los departamentos de Chocó y Caldas y con las subregiones de Urabá (al occidente); Occidente (al norte); Valle de Aburrá y Oriente (al oriente).

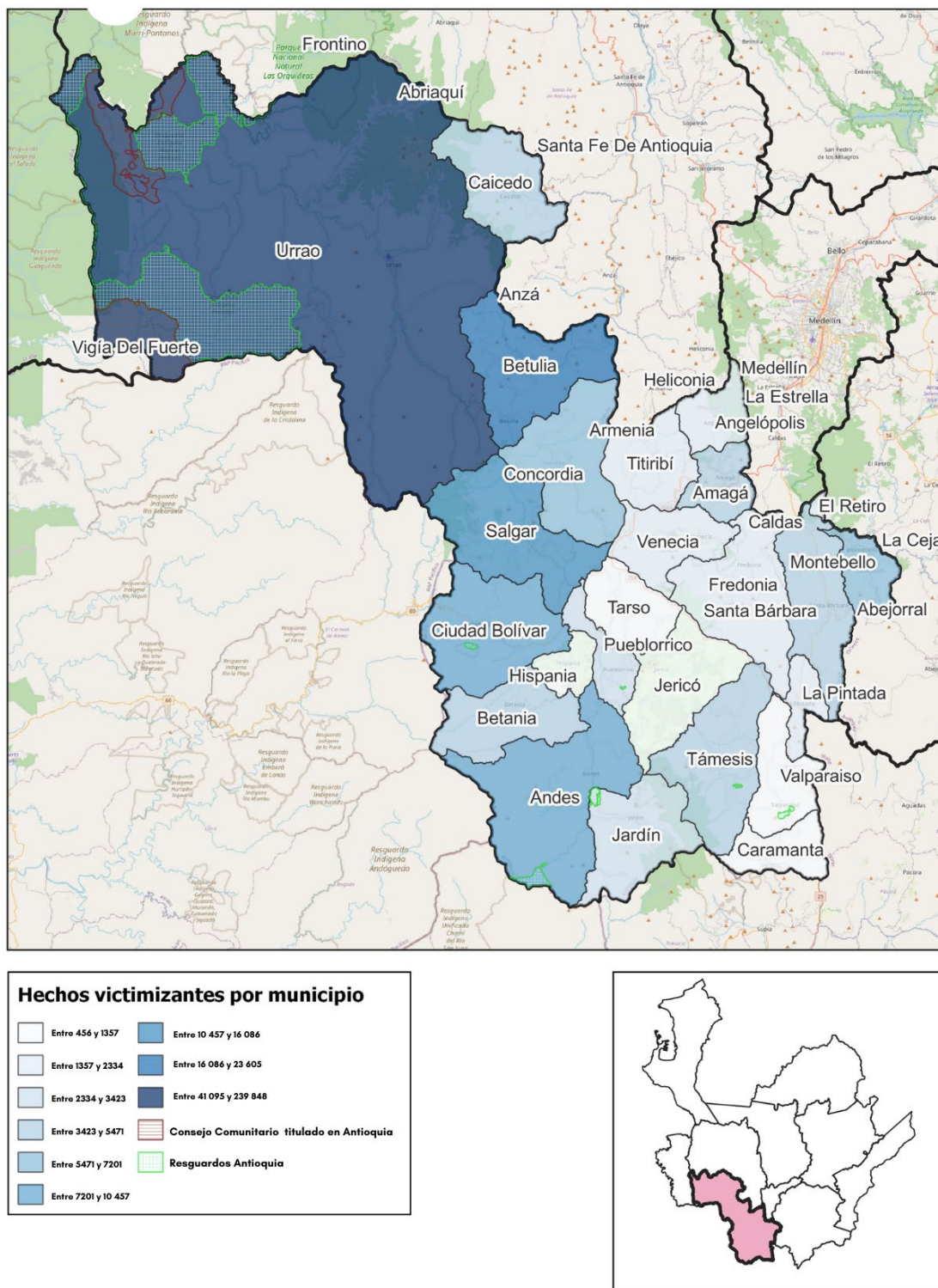
Según proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 2018) para 2024, allí habitan unas 385.210 personas, de las cuales, 16 265 se autorreconocen como afrocolombianos y 4123 como indígenas del pueblo Emberá Chamí, quienes viven asentados en ocho resguardos: Karmata Rúa (Jardín); Marcelino Tascón (Valparaíso); Bernandino Panchí (Pueblorrico); Miguel Cértiga Tascón (Támesis); Hermeregildo Chakiamá (Ciudad Bolívar); y Valle de Pérdidas, Majoré y Andabú (Urrao) (COA, 2020).

Además de su exuberante belleza vegetal y la riqueza en agua y suelos que posee, el Suroeste encierra un valor cultural y patrimonial único: su **paisaje cafetero**. Sus municipios nacieron y crecieron gracias al masivo proceso de colonización campesina que tuvo lugar desde mediados del siglo XIX en buena parte del occidente colombiano, hecho que recibió el nombre de “*La colonización antioqueña*” y que configuró el nacimiento de una economía que giró en torno al café y con ello, una élite ligada a su cultivo.

Fueron precisamente colonos llegados desde Medellín y el denominado sur del Valle de Aburrá quienes, en el siglo XIX, posicionaron haciendas cafeteras y promovieron patrones culturales basados en el monopolio de la tierra, la familia tradicional patriarcal y heteronormativa como base de la sociedad y la fe católica como faro moral. Este *modus vivendi* no sólo permitió la construcción de un discurso que glorificó al colono paisa, terminó por cimentar las estructuras mentales y sociales que rigen la mentalidad colectiva y la idea de desarrollo de los habitantes de la subregión y del antioqueño en general.

Por ello, desde 1825, la economía de esta subregión estuvo sustentada fundamentalmente en el cultivo del café. Inicialmente tuvo un carácter de subsistencia, pero, para 1880, su producción se intensificó. Para inicios del siglo XX el Suroeste era la principal región productora de café del país. Pero la homogeneización de los cultivos, además de atentar contra la producción agrícola diversificada para el consumo interno, expuso a la naciente clase cafetera a los peligrosos vaivenes de los precios de los mercados internacionales.

Mapa 7



Fuente: elaboración propia.

Prueba de ello fue la caída del precio internacional del grano que tuvo lugar en las décadas del 60 y 70 que, sumado a la llegada de plagas como la roya y la broca en los años 80 y 90, golpeó económicamente a pequeños y medianos productores quienes habían adquirido deudas con entidades crediticias. Como consecuencia de lo anterior, muchos de ellos terminaron malvendiendo sus tierras mientras que otras fueron hipotecadas por los bancos; otros más las terminaron cediendo a quienes

tenían mayor poder económico en la región, transformando así el panorama de concentración de tierra en el Suroeste (Conciudadanía, 2020).

Quizás por ello, **la dinámica económica de la subregión hoy muestra mayor diversificación**, aunque con renglones que ya comienzan a mostrar su lado problemático. Uno de ellos es la minería. Durante muchos años, el oro y el carbón se han extraído artesanalmente en municipios como Amagá y Titiribí, siendo esta actividad parte de sus niveles económicos. **La posibilidad de realizar minería a gran escala en varios municipios de la subregión ha despertado posturas críticas** en por lo menos 13 de ellos, debido a las amenazas que representa para el desarrollo ambiental y económico a largo plazo, lo mismo que por la afectación negativa sobre el patrimonio natural y arquitectónico de las localidades implicadas y su unidad sociocultural.

La siembra de café predomina en este territorio, con un área total de 65 783,74 hectáreas dedicadas a este producto y un área de producción de 57 686,74 hectáreas y una producción de 106 050,94 toneladas. Además de la alta producción cafetera, el Suroeste es productor de aguacate hass, plátano, naranjas y limón, alimentos que han compensado las crisis frecuentes del café de los últimos 15 años. Son alrededor de 501 049,32 toneladas de alimentos sembrados en el campo, que representan el 29,37% total a nivel departamental, siendo la subregión con mayor aporte (Secretaría de Agricultura y Desarrollo de Antioquia, 2023, p. 87).

Para la producción de Aguacate Hass, se tiene un reporte de 7284,81 hectáreas de producción que generan alrededor de 94 855,80 toneladas, que generan cerca de 5973,54 empleos. Los cítricos son otro producto importante dentro de la dinámica agrícola de la subregión. Son 2984,4 hectáreas de producción de limón Tahití, mandarina oneco, naranja salustriana y limón mandarino, que producen alrededor de 55 839,12 toneladas de alimento.

El turismo viene emergiendo como un renglón importante gracias a la transformación de fincas cafeteras en hoteles y el aprovechamiento de los paisajes y de la inmensa variedad de aves que existen allí. La subregión es visitada por nacionales y extranjeros, interesados en el turismo religioso, avistamiento de aves, senderismo, finca hoteles cafeteras, además del interés patrimonial de los municipios de Jericó y Jardín.

Dinámicas del conflicto en la subregión: actores y temporalidades

Movilización social: intensa agitación sociopolítica y represión armada

En el Suroeste antioqueño, como en muchos otros territorios del país, **la trayectoria del conflicto armado no puede comprenderse sin conocer la historia de la intensa movilización social** que se vivió allí desde la década del 60 del siglo XX. Estudiantes, campesinos, indígenas, líderes comunales, trabajadores, sindicalistas y hasta sacerdotes ligados con la denominada *Teología de la liberación* protagonizaron y lideraron las acciones políticas y colectivas que agitaron el clima social y político de la subregión por aquellos años.

En el centro de las reivindicaciones sociales se encontraba **la lucha por la tierra** por parte de campesinos ante la acumulación llevada a cabo por hacendados cafeteros, al igual que las comunidades indígenas, que reclamaban el reconocimiento de sus resguardos. El acceso a servicios básicos como hospitales, escuelas y vías de comunicación también movilizó ampliamente a los habitantes del Suroeste. La causa de los trabajadores de las administraciones municipales y de las minas de oro y carbón por mejores condiciones laborales y salariales motivó intensos paros y huelgas en la subregión a finales de los años 60 y principios de la década de los 70.

Sin embargo, **la existencia de una importante organización y movilización social no fue bien recibida por las élites subregionales y mucho menos por las autoridades estatales** quienes, en el marco de la internacionalización del conflicto armado interno, calificaron estas expresiones ciudadanas como “subversivas” y vincularon a los líderes más representativos a las guerrillas. “El Estado local/regional y las élites económicas y políticas dominantes encararon las demandas de los movimientos sociales con la brutalidad policial para suprimir la protesta y la movilización, negaron las peticiones sociales, agenciaron la persecución y el encarcelamiento a líderes y lideresas, el asesinato y desaparición” (COA, 2020).

Prueba de esta represión lo constituye el hecho conocido como *La masacre de Santa Bárbara*. El 23 de febrero de 1963, soldados adscritos al Batallón de Infantería Girardot, siguiendo órdenes del gobernador de Antioquia de la época, Fernando Gómez Martínez, dispararon contra trabajadores de la empresa Cementos El Cairo que bloqueaban el paso de víveres hacia Medellín a la altura del municipio de Santa Bárbara, en señal de protesta por la mala calidad de los salarios y las paupérrimas condiciones laborales. La acción dejó 12 personas fallecidas, 39 heridas y más de 100 detenidos entre hombres, mujeres y niños (Museo Nacional, S.F).

La estrategia implementada por los gobiernos locales, departamental y nacional para enfrentar los reclamos de ciudadanos bien organizados registrados durante las décadas 60 y 70 fue la misma con la que se reprimió la huelga de los trabajadores cementeros en Santa Bárbara: desprestigiar los paros a través de los medios de comunicación, usar las fuerzas militares contra los marchantes y vincular a los integrantes de los movimientos sociales con el comunismo y las guerrillas.

A lo anterior se sumaron las agresiones por parte de civiles armados, quienes declararon veladamente “objetivos militares” a las personas más representativas de los movimientos sociales. Nunca se esclarecieron sus vínculos ni sus motivaciones. Durante estas dos décadas fueron asesinados, entre otros, los líderes Pedrito Ortiz, en Pueblorrico; Simón Bolívar Córdoba, Aníbal Tascón Gonzáles, Mario González y Humberto Flores en Andes; Jesús María Herrera, Darío Restrepo, Viley González, Alex Fernández, Iván Arredondo y Diego Vélez Zuleta en Salgar; Gilberto Ramírez, Chilo Ríos, Jano Chica, Ignacio Betancur y Raúl Rodas, su sobrino, en Tarso; Luis Eduardo Bolívar en Betulia y Pedro Nel Osorno, desaparecido en Ciudad Bolívar (COA, 2020).

Así, para principios de la década de los 80, el Suroeste atestiguó cómo la ferviente movilización de años atrás se debilitaba y silenciaba debido a la persecución oficial, la estigmatización por parte de sectores de poder y de la élite subregional, así como por el constante asesinatos de líderes. Fue justo en esta década que comenzaron a registrarse las primeras incursiones de las guerrillas del ELN, Farc-

EP, EPL y M-19 a la par que se consolidaba el grupo embrionario del paramilitarismo en la subregión conocido como La Escopeta.

Auge y declive de las guerrillas y consolidación del aparato contrainsurgente

Según el Informe sobre el conflicto social y armado en el Suroeste antioqueño (COA, 2020), a lo largo de los años 80 la presencia y las acciones guerrilleras en esta subregión fueron intermitentes. El Ejército Popular de Liberación (EPL), por ejemplo, tuvo cierta incidencia en los municipios de Caramanta, Valparaíso, Jericó y Urrao. Su expresión armada consistió en asaltos a bancos y hostigamientos a la Policía sin mayor impacto y proyección.

Para mediados de esta década surge el Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR-Patria Libre, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), registrándose acciones de propaganda en municipios como Ciudad Bolívar, Salgar, Jericó, Pueblorrico y Tarso, sin dejar heridos o consumir asesinatos a la población.

Fuerzas como el ELN y las Farc-EP tuvieron fuerte presencia armada fundamentalmente en el Chocó (especialmente en el Carmen de Atrato) y Urrao. En los demás municipios del Suroeste no tuvieron asiento permanente y tampoco se manifestaron muchos combates por parte de las guerrillas. Esta subregión se constituyó más en un corredor de paso y de influencia en pequeños grupos de la población. Vacunas, extorsiones y secuestros extorsivos fueron los principales hechos victimizantes protagonizados por las guerrillas los cuales, en todo caso, no registran los alarmantes niveles de otras subregiones departamentales.

No obstante, cabe destacar que, para 1985, en el marco del proceso de paz que las guerrillas sostenían con el gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), fuerzas insurgentes del M-19 y del EPL conformaron un comando conjunto que se instaló con relativa fuerza en el Suroeste antioqueño y operó poco más de un año. El 18 de noviembre de 1985, este comando conjunto lanzó un ataque armado contra la estación de Policía de Urrao. La acción dejó un saldo de un agente de Policía muerto, dos civiles y un número indeterminado de guerrilleros muertos. Este hecho, según consignó el COA en su Informe (2020), desató una brutal represión por parte del Ejército contra los campesinos de las veredas circundantes al municipio, a quienes acusaron de auxiliar a los alzados en armas.

Movimientos insurgentes como el Ejército de Revolución Guevarista (ERG), una disidencia del ELN que surgió finalizando los años 80, también incursionaron esporádicamente en el Suroeste antioqueño, particularmente en los municipios que comparten frontera con el Chocó. También el ELN a través de frentes como Ernesto Che Guevara han tenido una presencia puntual en la subregión.

A contrario sensu, el aparato paramilitar encontró tierra fértil para su consolidación en el Suroeste gracias a la existencia de grupos de “limpieza social” o de “justicia privada” cuya función no era otra que eliminar todo aquello que atentara contra el *status quo* o el orden social de la subregión, tal como lo consignó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín (2019) en su decisión contra Germán Antonio Pineda López, desmovilizado del Bloque Suroeste.

El Suroeste ha mantenido un cierto orden a través de la práctica de la mal llamada “limpieza social”, más fuertemente desarrollada durante la década de los 80. La presencia de grupos de “limpieza social” se empezó a manifestar en municipios como Andes, Jardín, Caramanta, Venecia y Urrao. La estrategia de estos grupos consistió en la amenaza, la desaparición forzada de personas y el asesinato de campesinos, líderes cívicos e indígenas, acusados de pertenecer o simpatizar con la subversión, pero, además, de la eliminación del otro que no es funcional al orden social establecido (Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, 2019, pp. 54-55).

De estos grupos el más reconocido en la subregión fue **La Escopeta**, que tuvo fuerte incidencia en Angelópolis, Concordia, Ciudad Bolívar, Andes y Jardín. En su decisión, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín consignó cómo sus integrantes contaron con el apoyo financiero y logístico de reconocidos comerciantes, cafeteros, hacendados e incluso, funcionarios de las administraciones de los municipios donde tuvo injerencia.

Si bien, a principios de los años 90 la Fiscalía General de la Nación adelantó acciones de persecución y desmantelamiento de esta estructura armada, sus integrantes y personas acusadas de ser financiadores nunca enfrentaron una acción judicial en su contra. Por el contrario, varios de estos personajes resultaron claves en el ingreso de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y la posterior creación del Bloque Suroeste y el Frente Suroeste de las AUC.

La creación de cooperativas de seguridad privada (Convivir) en el marco del Decreto Ley 356 de 1994, en los municipios de Fredonia y Venecia⁷¹, coadyuvó al fortalecimiento del aparato paramilitar en la subregión. Para 1995 se registró el ingreso de hombres armados provenientes del Urabá antioqueño quienes, al mando de Carlos Mauricio García, alias “Doble Cero”, incursionaron en la subregión a través de los municipios de Concordia y Ciudad Bolívar.

El arribo del grupo paramilitar a la zona obedeció a la decisión de la cúpula de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá de enviar grupos a las diferentes subregiones del departamento, especialmente a aquellas donde había injerencia de grupos insurgentes, ‘ante el llamado [...] de algunos ciudadanos prestantes y acaudalados, entre ellos comerciantes, ganaderos, cafeteros, mineros y finqueros’ que venían siendo víctimas de las acciones delictivas de esos grupos insurgentes (Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, 2019, p. 63).

Así nació el Bloque Suroeste, que para 1996 era comandado por Alcides de Jesús Durango, alias “René” y tenía fuerte injerencia en 17 municipios de la subregión, particularmente en Salgar y Pueblorrico. Las actividades de esta facción paramilitar se concentraron en el control del territorio⁷²

⁷¹ De acuerdo con el COA (2020), en estos municipios se conformaron las Convivir Los Sables, Los Anfibios, Los Yarumos y Las Garzas.

⁷² El Bloque Suroeste ejerció control territorial con nueve puestos estratégicos de vigilancia en la Troncal del Café: 1) Bolombolo; 2) Las Metidas: partidas Concordia, Betulia y Urrao; 3) Peñalisa; 4) El Barroso: punto de ingreso a Salgar; 5) Remolino: partidas a Ciudad Bolívar; 6) Estación Terpel Hispania; 7) Puerto Boy: partidas para Betulia; 8) Tapartó:

y de sus pobladores, imponiendo un orden social basado en el exterminio de todas aquellas personas declaradas como “indeseables” (acusados de ser ladrones, consumidores de sustancias o auxiliares de la guerrilla). También sometió bajo su dominio todas las expresiones delincuenciales de la subregión, logrando una hegemonía criminal absoluta que se extendió hasta el 2004. La extorsión a comerciantes y hacendados, las actividades de narcotráfico y los recursos económicos aportados por cafeteros y mineros constituyeron las principales fuentes de financiación de este bloque.

No fue la única estructura paramilitar en la subregión. Para finales de la década de los 90, Vicente Castaño, alias “El Profe”, ordenó la creación de un grupo que mantuviera el control de los municipios de Angelópolis, Armenia, Amagá y Titiribí, pues allí, “El Profe” solía alquilar fincas para descansar o celebrar reuniones. Este comando especial recibió el nombre de Frente Suroeste y su dirección fue encargada a Rodrigo Zapata Sierra, alias “Ricardo”, quien, a su vez, se apoyó en curtidos sicarios de la Oficina de Envigado para que fueran sus lugartenientes (VerdadAbierta, 3 de agosto de 2015).

Al igual que el Bloque Suroeste, esta facción paramilitar adelantó una tenebrosa campaña de “limpieza social” que, según documentación de fiscales de la Dirección de Justicia Transicional (antes Justicia y Paz), solo entre los años 2000 y 2004 dejó poco más de 600 personas asesinadas y más de 40 desaparecidas en apenas tres localidades: Angelópolis, Amagá y Titiribí (VerdadAbierta, 3 de agosto de 2015).

Todo este aparato paramilitar que operó en el Suroeste antioqueño contó con la anuencia de sectores de poder y al interior de la fuerza pública. Sin embargo, ni la justicia transicional ni la justicia ordinaria poco o nada han hecho para develar las identidades de los cafeteros, comerciantes, hacendados y mineros que contribuyeron y colaboraron con el paramilitarismo.

Escenario postdesmovilización y postacuerdo

El 30 de enero de 2005, unos **125 integrantes del Bloque Suroeste** entregaron sus armas en la institución educativa Juan Tamayo, del corregimiento Alfonso López, municipio de Ciudad Bolívar, como parte de las negociaciones de paz celebradas entre las AUC y el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006/2006-2010). A la desmovilización no asistió alias “René”, máximo cabecilla de la estructura, tras alegar pocas garantías para su seguridad.

En esta ceremonia también estuvieron presentes combatientes del Frente Suroeste mientras que toda su comandancia, comenzando por Rodrigo Zapata Sierra, alias “Ricardo”, se desmovilizaron en diferentes bloques, principalmente con el Bloque Pacífico-Héroes del Chocó, el 13 de agosto de 2005 en Istmina, Chocó; y con el Bloque Héroes de Granada, el 1 de agosto del mismo año, en el corregimiento Cristales, del municipio de San Roque.

La desmovilización de los bloques paramilitares tuvo como correlato una fragmentación violenta del dominio criminal que tuvieron el Bloque y el Frente Suroeste. Lo anterior se evidenció tras el

en el estadero El Bosque y 9) La Posesión en Andes: diagonal al Batallón de Infantería N°11 Cacique Nutibara (COA, 2020, p. 59).

surgimiento de pequeños grupos delincuenciales vinculados al microtráfico que tejieron estrechos lazos con estructuras criminales asentadas en Medellín pertenecientes a la llamada Oficina de Envigado. Según la Alerta Temprana 044-20,

Se identificó el surgimiento de los grupos “La Cabaña” en Ciudad Bolívar; “Topitos” y “Sangre Negra” en los municipios de Betania e Hispania y los “Pelipintados” en Andes y Jardín. A partir de lo descrito, la subregión del Suroeste comienza a perfilarse como una importante plaza para el narcomenudeo, actividad que era sancionada en época de presencia guerrillera y de las autodefensas (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 23).

La extradición del entonces máximo jefe de la Oficina de Envigado, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, a los Estados Unidos, en mayo de 2008, generó una disputa interna al interior de esta organización criminal que elevó los niveles de violencia en el Valle de Aburrá e impactó fuertemente en subregiones como el Suroeste⁷³. Desde 2012, una facción de la Oficina de Envigado y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas por el Gobierno nacional Clan del Golfo, se disputan el control de las bandas delincuenciales presentes en este territorio.

Todo por una poderosa razón: **dominar el mercado de estupefacientes en las fincas cafeteras, sobre todo en los meses de cosecha, que generan empleo temporal para por lo menos 50 mil recolectores del grano.** A ello se suma el poder acceder de manera ilícita a rentas derivadas de la extorsión a amplios sectores económicos de la región y controlar una ruta del narcotráfico que une al Suroeste antioqueño con el Chocó, buscando salidas a los océanos Pacífico y Atlántico.

Esta disputa ha tenido periodos de “tregua”, tal como se registró entre 2013 y 2017 gracias a la firma del llamado “Pacto de San Jerónimo”:

Entre La Oficina de Envigado y los Urabeños/AGC, a partir del cual se acuerda la participación de estas estructuras armadas organizadas en cada uno de los eslabones de la cadena productiva del narcotráfico, lo que implicó a la vez la redistribución de territorios de control armado. Se definió que las áreas de cultivo estarían controladas por las Farc-EP, la producción de clorhidrato de cocaína por las AGC y parte de rutas de comercialización de narcóticos hacia mercados internacionales a cargo de La Oficina de Envigado (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 25)

Sin embargo, la firma del Acuerdo de Paz con las Farc-EP reconfiguró el escenario de criminalidad en el país y particularmente en el Suroeste, que desde 2018 es escenario de una cruenta confrontación entre los “Gaitanistas” y la Oficina de Envigado por el control total del microtráfico y las rutas de exportación por el Chocó, situación que ha disparado todas las cifras de vulneración de derechos

⁷³ Según la Alerta Temprana 044-20, “en el año 2012 el municipio de Andes registró la estadística más alta de homicidio respecto a los demás municipios del Suroeste antioqueño, veinte (20) en total. Estas muertes violentas se atribuyeron al control de las plazas de vicio entre grupos de delincuencia local, lo que directamente las desvinculaba del fenómeno del conflicto armado, en una clara negación de la existencia de estructuras armadas ilegales tras la actividad del narcomenudeo” (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 24).

humanos en el territorio. Basta decir que entre 2020 y 2024 se registraron en esta subregión 17 masacres que dejaron un total de 65 víctimas mortales. Entre los municipios más afectados por estos hechos figuran Ciudad Bolívar (cuatro masacres); Andes (cuatro masacres); Betania (tres masacres); Venecia (dos masacres); Salgar, Urrao, Támesis y Titiribí (una masacre cada uno).

Panorama actual de la movilización y las conflictividades sociales

No son pocos los estudios que han resaltado la riqueza en minerales que posee el Suroeste antioqueño. Oro, cobre y plata son algunos de los preciados metales que subyacen en tierras de municipios como Jardín, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Caramanta, Andes y Valparaíso. Estos hacen parte del denominado Cinturón de Oro de Colombia⁷⁴ (COA), una amplia zona geológica estimada en 350 kilómetros cuadrados, que se extiende por un ramal de la cordillera Occidental desde el suroeste de Antioquia hasta el centro del Tolima, que incluye además las localidades de Marmato y Supía, en Caldas; y Quinchía, en Risaralda.

Según el Cinturón Occidental Ambiental (COA), organización de la sociedad civil, por lo menos el 90 % del territorio de los municipios del Suroeste que integran este Cinturón está solicitado y titulado “para exploración minera por parte de empresas transnacionales, entre las que se encuentran la Anglo Gold Ashanti AGA (Sudáfrica), Solvista Gold (Canadá), Continental Gold (Canadá), Tolima Gold (Canadá), Colombian Mines Corporation (Canadá), B2Gold (Canadá). Todas estas empresas se encuentran en su fase de exploración, algunas desde el año 2005” (22 de agosto de 2014, par 4).

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), señala que el Cinturón de Oro de Colombia posee uno de los mayores **potenciales de producción aurífera del país**, lo que ha despertado el apetito de las multinacionales extranjeras. Allí, por ejemplo, la empresa canadiense Solvista posee un título de exploración y explotación que comprometen por lo menos 2000 ha del municipio de Jardín; mientras que en Támesis:

Hay solicitudes de exploración sobre el 85 % de su territorio, y desde hace cerca de dos años Solvista viene realizando trabajos de exploración en la zona con alto potencial en pórfidos, lo que convierte al Cinturón del Cauca Medio en la región colombiana con más posibilidades de convertirse en la primera en iniciar la producción de oro a gran escala (...) en la región hay, también, más de 25 peticiones de exploración minera de compañías, que se encuentran en espera (9 de agosto de 2013).

El proyecto de mayor envergadura lo constituye Quebradona, iniciativa de minería subterránea de cobre cuyo título pertenece a la multinacional Anglo Gold Ashanti AGA. Este contempla un área total de explotación de 4881 ha de las cuales, la empresa espera intervenir en el corto plazo unas 471 ha que abarcan las veredas de Cauca y Quebradona, en Jericó.

⁷⁴ También conocido como Cinturón de Oro del Cauca debido a que esta inmensa riqueza mineral se encuentra en la región denominada Cauca Medio, uno de los cuatro tramos en los que geográficamente se ha dividido el recorrido del río Cauca desde su nacimiento, en el departamento del mismo nombre, hasta su desembocadura en aguas del río Magdalena a la altura de la región de La Mojana. Estos tramos se conocen como Alto Cauca, Valle del Cauca, Cauca Medio y Bajo Cauca (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina -OCMAL, 2013).

Los impactos sociales y ambientales que podría generar la minera a gran escala y las profundas transformaciones que tendría esta actividad en un territorio eminentemente agrícola ha despertado una intensa movilización social en estos municipios del Suroeste antioqueño, particularmente en Jericó, Jardín y Támesis. Sin duda uno de los procesos de articulación de expresiones ciudadanas organizadas en torno a la defensa del territorio lo constituye el COA (Cinturón Occidental Ambiental), que nació en 2011 como respuesta a la intención de la multinacional de iniciar explotación de cobre en suelo jericano. Veedurías ciudadanas, comités prodefensa del agua y el territorio, líderes indígenas y movimientos juveniles han confluído en este espacio.

Desde allí se han coordinado las acciones colectivas tendientes a evitar que despegue la locomotora minera en la subregión. Marchas, mítines, concentraciones, foros, audiencias públicas, entre otros, han hecho parte de los repertorios desplegados por el COA para generar conciencia colectiva en defensa integral del territorio. Sin embargo, las reivindicaciones ciudadanas han tenido que enfrentarse a toda la artillería legal, política y mediática desplegada por Anglo Gold Ashanti AGA.

El mismo COA ha denunciado públicamente que, por cuenta de los intereses de la multinacional sudafricana, el Suroeste viene experimentando una creciente militarización de su territorio. La llegada intempestiva de soldados del Ejército y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía tiene como telón de fondo la firma de convenios entre Anglo Gold Ashanti AGA y el Ministerio de Defensa, donde esta Cartera se compromete a preservar la seguridad en las áreas de operación de la empresa minera.

En Jericó el primer convenio del que se tiene conocimiento con operación en el municipio es el 17-023, suscrito el 2 de octubre de 2017 y firmado por Andrés Valencia Prieto como representante de la empresa. A raíz de este acuerdo, la multinacional le entregó una suma de dinero al Batallón Cacique Nutibara, a la Cuarta Brigada y a la Séptima División del Ejército. El convenio incluyó a las empresas AngloGold Ashanti Colombia, Gramalote Colombia Limited, Exploraciones Northern y Minera de Cobre Quebradona. La suma de dinero entregada a la Fuerza Pública, según información publicada por la Liga Contra el Silencio, fue de 1 099 791 000 de pesos (Guerra & Pérez, 2020, citado por COA, 2020).

A lo anterior se suma las querellas interpuestas por Anglo Gold Ashanti AGA contra más de 80 líderes campesinos de Jericó, reconocidos por participar en diversas acciones de protesta pacífica como mecanismo constitucional para impedir que la multinacional inicie actividades de minería a gran escala en este municipio. En su última acción de persecución judicial, 11 labriegos fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de secuestro simple, hurto calificado, daño en bien ajeno y lesiones personales (Agencia de Prensa IPC, 23 de abril de 2025). El hecho constituye un nuevo pulso entre las multinacionales, representantes de un modelo particular de desarrollo afincado en el extractivismo, y las comunidades campesinas e indígenas, quienes abogan por la defensa del territorio, el agua, la biodiversidad y la vida en el Suroeste.

Subregión de Urabá

Caracterización Territorial

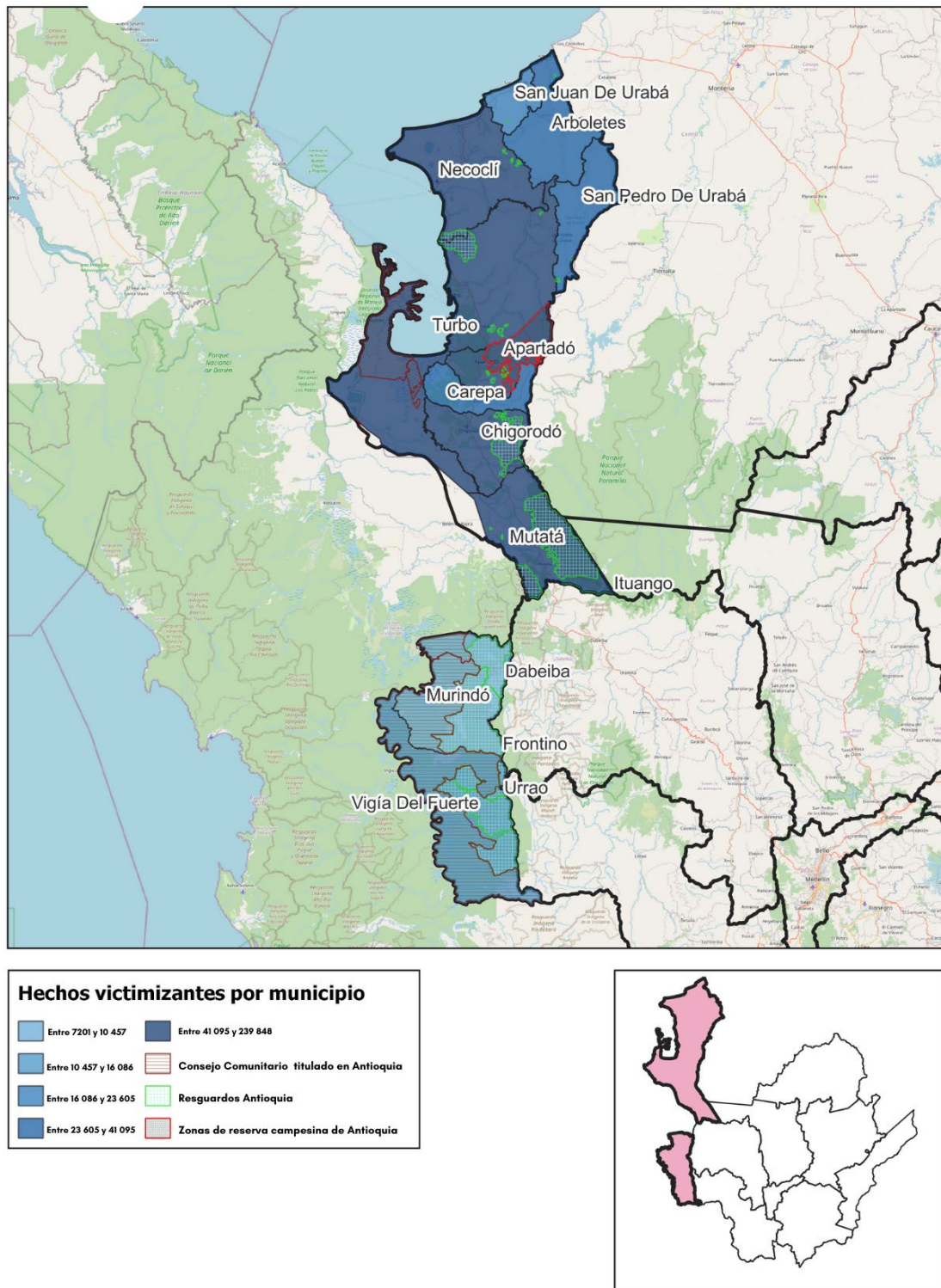
El Urabá antioqueño se encuentra ubicado en la esquina noroccidental de Antioquia. Limita por el norte con el Mar Caribe, por el sur con el departamento del Chocó, y por el oriente con el departamento de Córdoba y con las subregiones Norte, Suroeste y Occidente. Está conformado por **once municipios** que a su vez se subdividen en tres zonas geográficas: Norte, Eje Bananero, (Zona Centro) y Atrato Medio: **Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Murindó y Vigía del Fuerte**

La subregión cuenta con una extensión de 11 664 kilómetros cuadrados, que representa el 18.6 % del territorio del departamento. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2018), la población estimada para 2024 en el Urabá antioqueño es de 519.078 habitantes, de los cuales, un 49 % son hombres y un 51 % son mujeres, siendo la tercera subregión con mayor población de Antioquia, después de Valle de Aburrá y Oriente. A su vez, unas 301 391 personas se concentran en las cabeceras municipales, lo que corresponde al 57 % de su población, mientras que el restante 43 % se ubica en los centros poblados y rural disperso (224 294 personas) (Consejo Territorial de Planeación de Antioquia -CTPA; Universidad de Antioquia, Gobernación de Antioquia, *S.F.*).

De un total de 56 resguardos indígenas presentes en Antioquia, el Urabá antioqueño cuenta con 18 (el 32 %), ubicándose como la subregión departamental con mayor presencia de población indígena. Allí habitan los pueblos Emberá Katío, Chamí y Dóbida (en los municipios de Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Turbo y Vigía del Fuerte), Zenú y Tule (Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá); y Cuna Gunadule (Necoclí y Turbo). Esta también es la subregión de Antioquia donde hay más habitantes que se autorreconocen como negros, mulatos, afros, palenqueros o raizales, con un total del 43 % de la población. Fruto de lo anterior es la existencia de siete consejos comunitarios de territorios colectivos de comunidades negras en cuatro municipios.

Parte del territorio de la subregión integra una **macro región denominada Gran Darién y Chocó Biogeográfico, que constituye una de las zonas más biodiversas del mundo** (Camacho & Pérez, 2014). Su ubicación es privilegiada por contar con una porción de costa sobre el Mar Caribe, tener importantes elevaciones en la serranía de Abibe sobre la cordillera Occidental y compartir territorio con el Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo. Estas características, además de convertirla en una región con abundantes recursos naturales, la posicionan como una zona geoestratégica por su comunicación con el océano Atlántico, el océano Pacífico, los departamentos de Chocó y Córdoba y el Norte de Antioquia.

Mapa 8



Fuente: elaboración propia.

Estas potencialidades del territorio han sido históricamente atractivas para sectores económicos cuyo modelo de desarrollo se funda en una economía de enclave y extractiva representada en la agroindustria bananera, la ganadería extensiva, la extracción de madera, entre otros recursos naturales (Comisión Interclesial de Justicia y Paz -CIJP; Corporación Jurídica Libertad -CJL; Fundación Forjando Futuros -FFF, & Instituto Popular de Capacitación -IPC, 2019). Dicha visión ha

sido impuesta a través de múltiples violencias que derivaron en la vulneración de derechos humanos, el despojo de tierras a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes y que, además, no logra irradiar bienestar ni mejores condiciones de vida para la población.

En la actualidad, el Urabá antioqueño es la segunda subregión de Antioquia con mayores índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)⁷⁵. También figura como la segunda subregión con elevados porcentajes de pobreza multidimensional (26,6 %) y aparece en el octavo lugar en el Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV)⁷⁶ con un puntaje de 28.7 (CTPA *et al*).

Ciudadanías y acción política: la persistencia de la resistencia en medio de un orden violento

Pese a las estrategias (legales e ilegales) desplegadas por las élites económicas para imponer su visión del desarrollo en la subregión, la continuidad de ciclos de violencia protagonizados por actores armados de todos los espectros y la marginalidad de amplios sectores de la población, el Urabá antioqueño ha contado con importantes expresiones asociativas que han concitado las voluntades, los saberes y las prácticas de campesinos, indígenas, comunidades negras, las mujeres y los jóvenes para agenciar soluciones a sus problemas de exclusión, marginalidad y violencia.

Si bien las dinámicas económicas, políticas, culturales y sociales han generado profundas transformaciones en la subregión en los últimos 50 años, las agendas de reivindicaciones que agitaron los primeros colonos campesinos, que luego fueron asumidas por los trabajadores sindicalizados de la industria bananera y que constituyeron el *leitmotiv* para el ingreso y permanencia de las guerrillas, se mantienen tan vigentes como en el pasado: la permanencia de las comunidades negras, indígenas y campesinas en el territorio en condiciones dignas y en paz, la lucha por el acceso a la tierra, la defensa de la vida y la exigibilidad de derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales.

En las décadas de los 60, 70, y 80, por ejemplo, fueron importantes las **asociaciones campesinas y los movimientos comunitarios** surgidos en Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, quienes reivindicaban el derecho a vivienda digna, el acceso a servicios públicos y a la tierra. Las acciones adelantadas por estos movimientos, en articulación con otros actores sociales de la subregión como los sindicatos de la industria bananera, lograron jalonar la construcción de un número importante de barrios en los municipios mencionados.

Sin duda, el **Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO)**, es hoy día un importante actor social en la subregión, que además de continuar agitando la bandera en defensa de los derechos de los trabajadores, actúa como eje articulador de otros sectores sociales, interlocutor legítimo ante instancias gubernamentales y empresariales, y plataforma que ayuda impulsar diversas agendas de discusión, principalmente en temas de paz.

Cabe destacar que en el Urabá antioqueño se encuentra una de las 52 comunidades de paz creadas

⁷⁵ Según esta medición, el Bajo Cauca presenta un índice de 49,42 en Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), seguido de Urabá (49,42) (CTPA *et al*).

⁷⁶ La subregión que lidera el Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) es Valle de Aburrá (45,8), seguido de Oriente (42,1) y Suroeste (37,1) (CTPA *et al*).

formalmente en Colombia. Se trata de la **Comunidad de Paz de San José de Apartadó**, corregimiento de Apartadó, creada en 1998 como un acto de resistencia no violenta frente al masivo desplazamiento forzado que tenía lugar en toda la subregión por esos años por cuenta del recrudecimiento del conflicto armado. Su postura de neutralidad frente a todos los actores armados, incluido el Ejército Nacional, le ha valido toda clase de persecuciones, señalamientos, estigmatizaciones y ataques.

La lucha por el acceso a la tierra hoy la lideran organizaciones conformadas por labriegos víctimas de desplazamiento forzado y de despojo. Tras la desmovilización de los grupos paramilitares, en 2006, el país comenzó a conocer la dimensión de la transformación del territorio a través de la acumulación por desposesión llevada a cabo por latifundistas, especuladores de tierras y agroempresarios, y la tragedia que ello significó para miles de comunidades campesinas de la subregión.

En este proceso han sido importantes las mujeres, quienes han jalonado la creación de asociaciones de reclamantes en municipios como Necoclí, Turbo, Apartadó y Chigorodó. Actualmente, la Asociación Tierra y Vida acompaña a un número importante de víctimas de este flagelo, quienes adelantan su lucha en medio de un contexto generalizado de violencia dirigida contra ellos. Según la Fundación Forjando Futuros, entre 2011⁷⁷ y 2022 fueron asesinados 24 campesinos reclamantes de tierra en toda la subregión (Ríos, 22 de febrero de 2022).

Actores armados y dinámicas del conflicto en la subregión

La ruta de la violencia sociopolítica: el anhelo insurreccional de las guerrillas

Como en ninguna otra subregión de Antioquia, **en el Urabá antioqueño han confluído fuertes conflictos sociales, políticos y económicos alrededor de la tierra, el modelo de desarrollo y las luchas por la defensa del territorio y una abierta confrontación armada protagonizada por diversas insurgencias, la fuerza pública y los grupos paramilitares.** A quienes más impactó esta violencia fueron a los sindicalistas, a militantes de movimientos cívicos de izquierda, a los jóvenes, a integrantes de pueblos étnicos y campesinos (Molano, 2017).

Desde 1950, en la subregión se instaló la industria bananera, encabezada por la empresa transnacional United Fruit Company, rebautizada a finales de la década de los 80 como Chiquita Brands International. Desde entonces, la economía del Urabá antioqueño ha girado en torno a la plantación a gran escala del banano para su posterior exportación. La agroindustria de la fruta generó un profundo conflicto laboral por cuenta de las condiciones de explotación y pobreza a las que eran sometidos los trabajadores de las empresas bananeras. De esta situación brotó un robusto movimiento sindical que abogó por mejores condiciones laborales y porque se aplicara la legislación laboral en sus contextos de trabajo (Molano, 2017).

⁷⁷ En este año entró en vigencia la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. De acuerdo con la Fundación Forjando Futuros, el Urabá antioqueño es una de las regiones del país con mayor número de solicitudes de restitución de tierras: 6638; de ellas, solo se han resuelto 168 casos (Ríos, 22 de febrero de 2022)

Fue también en la década del 50 que comenzó a advertirse la presencia de actores armados en el Urabá antioqueño, un territorio que para las lógicas de la guerra ofrece múltiples ventajas por su posición geoestratégica. Los primeros en asentarse allí fueron las guerrillas liberales inmersas en la violencia bipartidista de mediados del siglo XX. Su influencia, además del trabajo político que adelantó el Partido Comunista (PC) en la subregión durante esos años, fue aprovechada poco tiempo después por la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), que incursionó en la subregión como parte de su proceso de fortalecimiento y expansión desde el Sur de Córdoba, donde nació en 1967. Para inicios de la década del 70, guerrilleros de las Farc-EP se instalaron en el corregimiento San José de Apartadó, donde nació el Frente 5 de esta insurgencia. “Durante esa década ambas guerrillas se dedicaron a montar sus bases sociales de la mano de un proyecto sindical que defendía los derechos laborales, intentaba regular la producción del banano y fomentaba las invasiones de tierras. Las guerrillas extorsionaban y secuestraban a los empresarios bananeros para financiarse” (VerdadAbierta, 18 de noviembre de 2012).

Para finales de los años 70 fueron inevitables las fricciones entre el EPL y las Farc-EP. El trabajo político que cada insurgencia realizaba con los sindicatos y las áreas por las que cada una de ellas podía moverse comenzó a generar fricciones, las cuales se intensificaron luego de que Bernardo Gutiérrez, reconocido integrante en su momento del Frente 5, creara una disidencia en 1978 que se conoció como los “Núcleos (Círculos) Marxistas-Leninistas” y que finalmente, terminó ingresando al EPL. Lo anterior derivó en una guerra abierta entre ambas estructuras que solo tuvo respiro a mediados de los años 80, cuando ambas guerrillas conformaron la “Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar”⁷⁸.

Para la década de los 80, el Urabá antioqueño era epicentro de un convulsionado clima social y político. El conflicto laboral entre los sindicatos y las empresas bananeras alcanzó su clímax en este periodo. Junto al movimiento sindical brotó también un movimiento cívico de izquierda democrática que coincidió con el surgimiento del partido político Unión Patriótica (UP), fruto de los Acuerdos de La Uribe (Meta), firmados en 1984 entre las Farc-EP y el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986). Toda esta fuerza política de izquierda tuvo una gran acogida en la subregión al presentarse como opción real de poder justo en momentos en que el país se aprestaba a celebrar importantes cambios democráticos, como la celebración de las primeras elecciones populares de alcaldes y gobernadores, que tuvieron lugar en 1988.

Por su parte, las guerrillas del EPL y Farc-EP no vacilaron en intensificar sus formas de control territorial armado y de la población con el fin de imponer su dominación, en tanto para ambas fuerzas insurgentes, se materializaba el anhelo insurreccional del que podrían darse pasos firmes hacia la toma del poder político. Varios factores coincidieron para creer que ello podría ser: la izquierda democrática gozaba de amplia simpatía entre la población y había logrado importantes triunfos

⁷⁸ Tras el fallido proceso de paz que tuvo lugar durante el gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), el 27 de febrero de 1987, luego de la realización de la 1ª Conferencia Bolivariana, se creó la denominada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que articuló fuerzas insurgentes de las Farc-EP, el EPL, el M-19, el ELN, El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); y el Movimiento Armado Quintín Lame. Un par de años después, el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) firmó acuerdos de paz con el M-19, el PRT y el Quintín Lame, mientras que el expresidente César Gaviria (1990-1994) hizo lo propio con el EPL, por lo que la coordinadora sólo quedó integrada por las Farc-EP, el ELN y reductos disidentes del EPL. Este espacio de articulación entre guerrillas operó hasta 1994.

electorales en la subregión; los sindicatos bananeros se consolidaban como actores políticos de gran influencia; surgieron los movimientos campesinos de recuperadores de tierra y los movimientos cívicos por acceso a la vivienda los cuales, mediante invasiones en áreas rurales y urbanas, pusieron sobre la mesa el delicado tema de acceso a la tierra; además, tanto el EPL como las Farc-EP mostraban fortalezas militares y en el trabajo de masas.

Todo lo anterior llevó a sectores políticos y empresariales a denominar la región como la **“esquina roja de América”**, epíteto que convocó toda una serie de voluntades y acciones para frenar lo que las élites veían como la materialización de la amenaza comunista en suelo antioqueño. Así, con el apoyo económico de ganaderos, empresarios, terratenientes, fuerza pública, narcotraficantes y sectores políticos, inició la ofensiva paramilitar que se extendió desde el Sur de Córdoba hasta la zona Norte de Urabá y el Eje Bananero entre 1988 y 1990.

El paramilitarismo y la lógica de la acumulación por desposesión

El inicio de la última década del siglo XX presagiaba vientos de paz y una nueva era de bienestar y prosperidad social para el Urabá antioqueño. En 1991, el EPL se desmovilizó luego de firmar un acuerdo de paz con el presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994) y sus militantes pasaron a engrosar el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad. En respuesta, Fidel Castaño desmovilizó su grupo de autodefensas, responsable de varias masacres que enlutaron la subregión⁷⁹.

Pero las ilusiones de cambio se hicieron trizas tan solo un par de años después. Sectores que no se acogieron al proceso de paz formaron varios frentes disidentes del EPL que comenzaron a operar en el norte de Urabá y el Eje Bananero. Por su parte, las Farc-EP avanzaron hacia los territorios dejados por la guerrilla del EPL e iniciaron un plan de exterminio contra sus excombatientes. Para contener esta arremetida, desmovilizados del EPL crearon un grupo armado que se conoció como los “Comando Populares” que, varios años después, terminaron engrosando las filas de los ejércitos paramilitares.

Al respecto, tras la desaparición de Fidel Castaño, en 1993, sus hermanos, Carlos y Vicente, recomponen la estructura paramilitar que operó en el Norte, Eje Bananero y Sur de Córdoba, que se conoció como “Tangueros” o “Mochacabezas”, para bautizarlo ahora como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Allí confluyeron empresarios, políticos, militares y narcotraficantes quienes echaron a rodar un plan criminal que, bajo el pretexto de la lucha contrainsurgente, reconfiguró dramáticamente el panorama político y económico de la subregión al imponer un modelo de negocio cuyo centro es la posesión de la tierra para ganadería, agroindustria y extracción de recursos a gran escala. Dicha transformación territorial es lo que David Harvey ha denominado “la acumulación por desposesión” (CIJP *et al*, 2019, p. 7).

⁷⁹ Se recuerdan, por ejemplo, la masacre perpetrada en la vereda Punta Coquitos, de Turbo, el 11 de abril de 1988, que cobró la vida de 26 labriegos; la masacre del corregimiento de Pueblo Bello, de Turbo, cometida el 14 de enero de 1990 y que dejó un saldo trágico de 43 campesinos desaparecidos; y la masacre de La Honduras y La Negra, dos fincas bananeras ubicadas en el corregimiento Currulao, de Turbo, hasta donde llegó un comando paramilitar la madrugada del 4 de marzo de 1988 y asesinó a 20 trabajadores.

El primer paso decisivo de este plan fue eliminar de la subregión a las insurgencias y con ella, toda expresión de izquierda democrática por cuanto la plataforma ideológica de esta antagonizaba con los intereses de las élites políticas. Para ello, las ACCU ejecutaron una campaña de terror consistente en masacres, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y expulsiones forzadas de simpatizantes y militantes de los movimientos políticos alternativos (CIJP *et al*, 2019).

La segunda fase del plan criminal fue el **vaciamiento del territorio**. Para instalar la agroindustria y la ganadería y expandir el banano, las élites económicas necesitaban de mucha tierra que estaba en manos de pueblos étnicos y campesinos. Así pues, eliminada la oposición política, era necesario el exterminio de la economía campesina, de la pequeña propiedad rural, y así ocurrió: a punta de masacres, de asesinatos de líderes campesinos y de desapariciones forzadas de muchos dirigentes comunitarios representativos, se generó un éxodo forzado sin precedentes en la subregión. Con los territorios vaciados, estos fueron acaparados ilegalmente por empresarios de la tierra, transformados (destruida su biodiversidad y vocación campesina) y destinados al agronegocio (CIJP *et al*, 2019; Molano, 2017).

Las acciones violentas desarrolladas dentro del mencionado plan criminal tuvieron como fin consolidar un proyecto económico y político de control social y territorial que permitiera expulsar a las comunidades campesinas, originarias y negras para acumular tierras, implementar modelos de producción agroindustrial de palma y banano y de ganadería extensiva, construir megaproyectos como la Carretera Panamericana y los tres puertos en Urabá (Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, en Turbo, y Darién International Port, en Necoclí) y llevar a cabo proyectos de extracción minera en el Bajo Atrato.

La siguiente etapa del plan fue su consolidación. Sin contradictores, estas élites que impulsaron la estrategia contrainsurgente se beneficiaron de la tierra expoliada. Tras el acaparamiento de miles de hectáreas, además del banano y la ganadería, instalaron en la región monocultivos de palma de aceite, devastando ecosistemas enteros para que ello pudiera tener lugar. Podría decirse que esta consolidación se consumó hacia el año 2006, por los años en que también se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia (CIJP *et al*, 2019).

La última etapa podría verse como la legalización de esta consolidación y reacomodación social y territorial, que tiene lugar entre los años 2006 y 2016. Con la alianza de notarios y funcionarios públicos, en esta época se legalizaron miles de predios que habían sido ilegal e ilegítimamente ocupados por empresarios. Se legalizaron predios cuya venta se hizo bajo coacción, y se adjudicó la propiedad a ocupantes que de mala fe que se aprovecharon de las condiciones de violencia generalizada y sistemática por la que atravesaba la subregión para acaparar tierras abandonadas. En adición a ello, se desplegó también toda una estrategia de desprestigio y persecución de reclamantes de tierra que decidían retornar al territorio años después del desplazamiento (CIJP *et al*, 2019).

La desmovilización paramilitar: la reingeniería criminal de manos de las AGC

Archivos de prensa y documentos elaborados por organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales de la época coinciden en señalar que, tras la desmovilización de los bloques Bananero

y Élmer Cárdenas de las AUC, en 2004 y 2006 respectivamente, sobrevino un proceso de reestructuración criminal de las huestes paramilitares, liderado por Vicente Castaño.

“El Profe”, como se le conoció al mayor de los Castaño, le pidió a un grupo de excombatientes que no entregaran sus armas ni se acogieran al llamado del gobierno nacional pues asegura que las AUC habían sido engañadas. Entre quienes aceptaron el llamado figuraba Daniel Rendón Herrera, conocido como “Don Mario”⁸⁰, hermano de Fredy Rendón, alias “El Alemán”, quien regresó a San Pedro de Urabá en 2007 a retomar las actividades de narcotráfico que manejó en su momento el Bloque Élmer Cárdenas.

Como lo consignaron en su momento organizaciones como International Crisis Group y la misma Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de la OEA, “Don Mario” reclutó un amplio número de excombatientes de las AUC asentados en Urabá, entre ellos, reconocidos paramilitares que a su vez compartía un pasado en las filas de la guerrilla del EPL: los hermanos Úsuga David, Roberto Vargas, alias ‘Marcos Gavilán’ y Francisco Morela, alias ‘Negro Sarley’ (VerdadAbierta, 24 de agosto de 2015).

Así nació un grupo criminal que se conoció en su momento como “Héroes de Castaño”, que fue fortaleciéndose y expandiéndose desde el norte de Urabá hasta el Eje Bananero y que, en 2008, luego de protagonizar un paro armado en toda la subregión, se dio a conocer públicamente como “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”. Según consignó la Defensoría del Pueblo en su momento:

Las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños (AGC)” se han caracterizado por tener fuertes vínculos con la violencia política, estrategias contrainsurgentes, la protección del despojo de tierras y el establecimiento de nuevos procesos de despojo, así como fuertes acciones de control social y territorial en los cuales amenazan y persiguen a organizaciones sociales que adelantan procesos de reivindicación de derechos y restitución de tierras. A su vez se han presentado casos de reclutamiento forzado y fuertes combates contra el Frente 5 de las Farc-EP (...) por otro lado, las AGC mantienen a través de unidades urbanas y bajo el nombre de los Urabeños, un fuerte control sobre el procesamiento y tráfico de drogas, la extorsión, el tráfico de armas, la trata de personas, la prostitución forzada y la esclavitud sexual. (2014, p. 10).

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc-EP y el Estado colombiano representado por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018), que redundó en la salida del histórico Frente 5 de sus bastiones en el Urabá antioqueño, los “gaitanistas” terminaron erigidos como actores criminales hegemónicos de toda la subregión. Su portafolio de actividades ilegales va desde el control del microtráfico, pasando por la imposición de cobros extorsivos a diversos sectores de la economía, regulación de la vida social en áreas rurales y urbanas, el control de las rutas de exportación de

⁸⁰ Alias “Don Mario” fue capturado por efectivos de la Policía Nacional en zona rural de Necoclí, el 16 de abril de 2009 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos el 23 de abril de 2018. En 2019 fue condenado a 40 años de prisión por un tribunal de New York por cargos de narcotráfico.

alcaloides, hasta la trata de personas y el tráfico de migrantes por el temido Tapón del Darién.

La consolidación de la transformación territorial del Urabá antioqueño

En la actualidad, se evidencia una **ausencia de sanción social e impunidad** frente a los terceros que se beneficiaron del conflicto armado; de ello da cuenta la preclusión y archivo de procesos penales por delitos que atentan contra los bienes jurídicos fundamentales como la vida y la integridad personal, el poco avance de los procesos de restitución, y la judicialización y revictimización de los líderes reclamantes de tierras.

Gracias a esta impunidad, **el sector empresarial logró instalar su proyecto económico, político y territorial**, hasta tal punto que hoy gozan de un gran prestigio social en la región. En medio de todo ello, en la actualidad perfilan la refinación de sus estrategias de acumulación, esta vez volcándose al negocio inmobiliario y la preparación de los proyectos de mega infraestructura en donde Urabá será, literalmente, la puerta al mundo desde Suramérica.

Como se acaba de exponer, esta violencia ha tenido toda una funcionalidad, y por supuesto, una finalidad: la instalación de un modelo económico agroindustrial, agroexportador y hoy día de mega infraestructura. La guerra, sus sufrimientos y los incommensurables daños humanitarios, ambientales y culturales dejados, han sido parte de este plan criminal para imponer una forma de acumulación. Los esbirros militares y paramilitares de una u otra forma han comparecido y aportado a la verdad, pero los arquitectos y beneficiarios permanecen incólumes, y continúan siendo notables y hasta incuestionables (CIJP *et al*, 2019).

A la fecha, el Urabá antioqueño concentra **varios megaproyectos de infraestructura y proyectos de extracción minero-energética a largo, mediano y corto plazo, la mayoría en territorios que en otrora sufrieron fuertes hechos de violencia**. Entre ellos se encuentran los proyectos portuarios Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, en Turbo, y Darién International Port, en Necoclí. Son proyectos que vienen en avance, a los que se les inyectará millones de dólares en inversión e infraestructura, con los que se prevé movilizar millones de toneladas de mercancía al año y que prometen impactar el desarrollo del país.

A ello se suman importantes proyectos de infraestructura vial, como las Autopistas para la Prosperidad, que pretenden acercar el Urabá antioqueño y su salida al Mar Caribe con el centro del país. Se trata de un verdadero entramado de conexiones viales (Mar I y Mar II) y un ambicioso túnel (el Túnel del Toyo), que impactará la subregión del Occidente antioqueño y la mayoría de municipios de la subregión de Urabá (Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo y Necoclí). Del mismo modo, aunque otros proyectos vienen planificándose desde años atrás, su ejecución está pensada a futuro, como es el caso de la construcción de la Transversal Media Luna de los Valles Fértiles, que conectaría el golfo de Urabá con el oriente del país y cuyo tramo, según notas de prensa, pasaría por Turbo-Tierralta- Montelíbano-Caucasia. También figura la construcción de la vía Panamericana, que pretendería unir por carretera Centroamérica con Suramérica, proyecto del que se viene hablando desde 1958 (CIJP *et al*, 2019).

En cuanto a explotación minera, actualmente existen **93 000 hectáreas de tierra en exploración y adjudicación de títulos mineros a pequeñas y grandes empresas**, que incluye carbón, oro y cobre. El caso del cerro Carepero en el Atrato Medio antioqueño, que luego de décadas de lucha por la defensa de su territorio, hoy siguen enfrentados a la explotación de su sitio sagrado por cuenta de la empresa Anglo American Colombia Exploration S.A.

Subregión del Valle de Aburrá

Caracterización Territorial

La subregión del Valle de Aburrá se encuentra ubicada en el centro-sur del departamento, sobre la cordillera Central. Cuenta con una extensión de 1160 kilómetros cuadrados que se sitúan entre los 1300 y 2800 metros sobre el nivel del mar, con una topografía irregular que genera múltiples microclimas y fortalece su diversidad ambiental. **Está conformado por los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Caldas y La Estrella.** El territorio es atravesado de norte a sur por el río Medellín, que en algunos tramos adquiere el nombre de Aburrá y en otros, Porce. El afluente es el eje estructurante de la conurbación y la planeación urbano regional que a su vez le da vida y sentido al Área Metropolitana⁸¹, una entidad administrativa de derecho público que asocia a los diez municipios que integran la subregión.

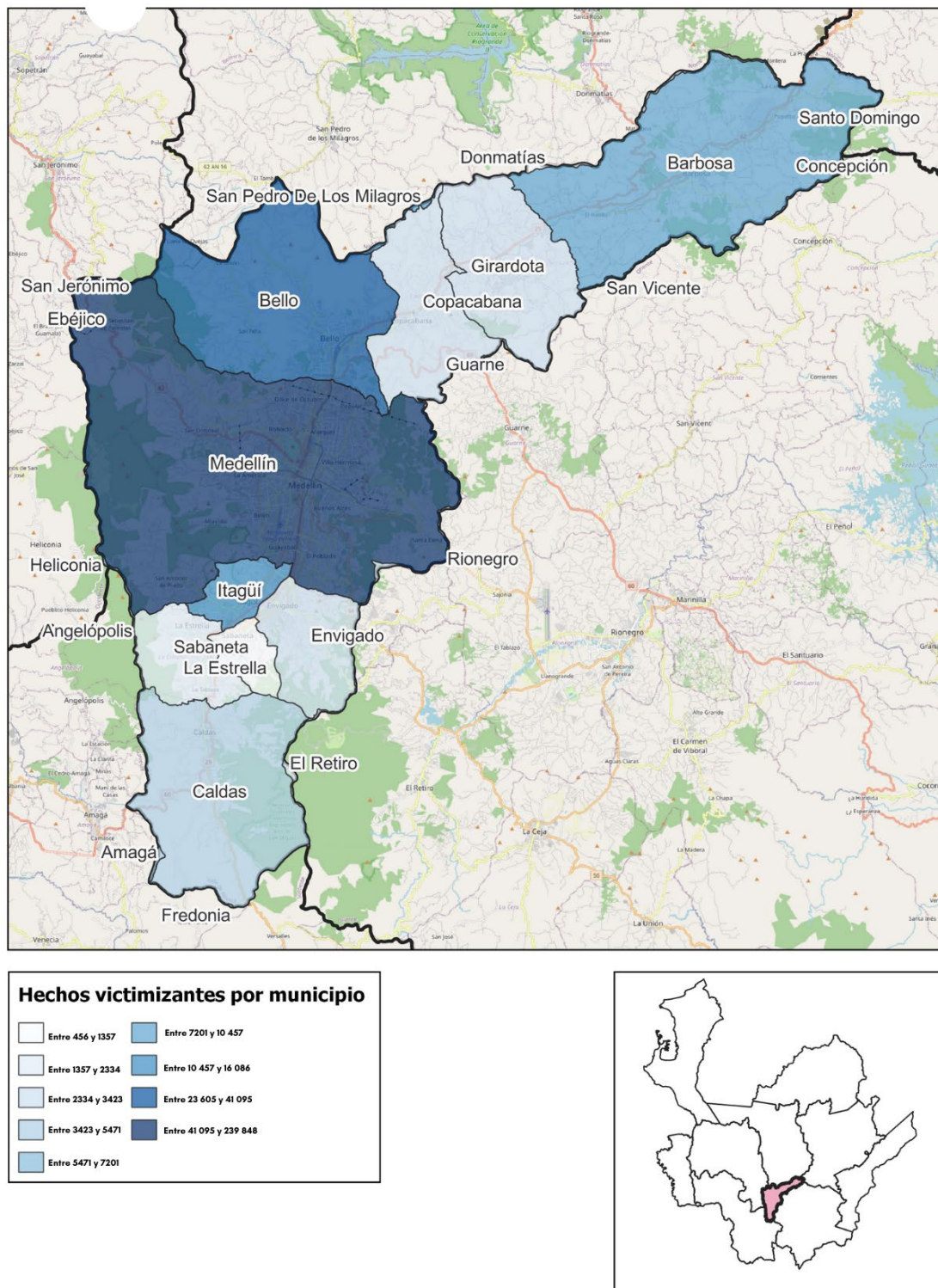
En esta subregión se encuentra la capital del departamento, Medellín, sede del poder político y económico. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2018), la población estimada para 2024 en la subregión es de 4 104 752 habitantes; de ellos, el 53 % son mujeres y el 47 % hombres. En el Valle de Aburrá se concentra cerca del 60 % de la población de Antioquia, lo que la convierte, entre otras, en la más densamente poblada: 3,7 personas por kilómetro cuadrado. Además, el 95 % de sus habitantes viven en zonas urbanas y el 5 % en la ruralidad.

En el Valle de Aburrá no se registra presencia alguna de resguardos indígenas; al contrario, el 37 % de sus habitantes se autorreconoce como negro, mulato, afro, raizal o palenquero, siendo la segunda subregión de Antioquia con mayor presencia de este grupo étnico después del Urabá antioqueño (Consejo Territorial de Planeación de Antioquia -CTPA; Universidad de Antioquia, Gobernación de Antioquia, *S.F.*). La subregión es la que presenta mejores indicadores en el Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMC) siendo la primera en esta medición; aparece como la última en el departamento con respecto a Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y es la que posee menores porcentajes de pobreza multidimensional con respecto a las demás subregiones. Sin embargo, también fue la subregión donde más aumentó este indicador, particularmente en zonas rurales, donde se pasó de un 7,3 % en 2019 a un 10 % en 2021. Además, dada la densidad poblacional, allí se concentra el mayor número de personas en condiciones de pobreza extrema: cerca de 300 000 (Medellín Cómo Vamos, 3 de diciembre de 2021).

La participación del Valle de Aburrá en el PIB del departamento es cercana al 67,6 %, lo que permite dimensionar la importancia de la subregión en el desarrollo económico departamental. Según el informe de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, predominan el sector de industria y comercio, hoteles y restaurantes que aportan el 41 % del PIB, seguido de los sectores de administración pública, servicios inmobiliarios y servicios empresariales, que aportan un aproximado de 10% cada uno (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2022).

⁸¹ El Área Metropolitana opera como autoridad ambiental para los diez municipios; además, opera como ente articulador del transporte público metropolitano; allí también se toman decisiones en materia de infraestructura y seguridad para toda la subregión (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, *S.F.*).

Mapa 9



Fuente: Elaboración propia

El Valle de Aburrá enfrenta serios problemas ambientales. **La presión inmobiliaria degradó laderas e incrementó la deforestación de amplias zonas verdes, situación que ha incrementado exponencialmente los riesgos de avalanchas, deslizamientos de tierra y avenidas torrenciales.** A ello se suma que, debido a su composición geográfica y el notable aumento del parque automotor, el

aire registra preocupantes niveles de contaminación.

La subregión es, además, centro de operaciones de por lo menos **300 estructuras criminales (entre combos, bandas y grupos organizados)** que a su vez controlan el lucrativo negocio del microtráfico, imponen cobros extorsivos a una amplia gama de actividades comerciales, desarrollan labores de sicariato, robos, secuestros, entre otros. No son pocos los sectores urbanos de todo el Valle de Aburrá donde estos grupos armados regulan la vida cotidiana de los habitantes, resuelven sus conflictos, asumen funciones de poder político y de justicia al imponer sanciones. Esta dominación impacta principalmente a los líderes y lideresas comunitarias y, en especial, a los integrantes de la comunidad LGTBIQ+.

Movilización ciudadana: entre la resistencia y la resiliencia

Pese a ser epicentro de diversas expresiones de violencia que han sometido a la población a largos periodos de miedo, zozobra y desconfianza, el Valle de Aburrá se caracteriza por contar con una ciudadanía activa, que se moviliza y con alta capacidad de agencia. Desde la segunda mitad del siglo XX, en especial a partir de los años 70, sectores sociales comenzaron a organizarse en respuesta a problemáticas como la exclusión social, la violencia urbana y la desigualdad.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2017), en la historia de las expresiones ciudadanas de resistencia a la conflictividad armada y social en Medellín (cuya dinámica impacta toda la subregión) se pueden caracterizar tres periodos. **Un primer momento que va de 1982 a 1994**, donde destacan las acciones colectivas orientadas a la defensa de los derechos humanos y el derecho a la vida. Pese a que en este periodo la violencia asociada al narcotráfico, los grupos armados ilegales y el control territorial ejercido por estructuras criminales limitó la expresión ciudadana, surgieron experiencias significativas de resistencia comunitaria, como las asociaciones de juntas de acción comunal (JAC), colectivos juveniles y redes eclesiales de base. En este periodo surgen las Mesas de Trabajo por la Vida, lideradas por la Iglesia Católica, como espacio de discusión y reflexión frente a la violencia que azotaba a la subregión.

Sus protagonistas son las organizaciones de derechos humanos y en particular el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. El sentido de las acciones era la defensa de los derechos humanos, pero este discurso fue estigmatizado y asociado con la izquierda armada, lo que generó a su vez asesinatos, amenazas y desapariciones hacia aquellos que promulgaban estas denuncias de violaciones de los derechos humanos (CNMH, 2017, p. 335).

Un segundo periodo transcurre de 1995 a 2002. Aquí, las víctimas irrumpen en el espacio público, llevando a la agenda de discusión ciudadana los daños y las pérdidas que el conflicto armado les había provocado y el reclamo por políticas públicas de atención a esta población. Se trató del periodo donde la subregión, en particular Medellín, se convirtió en la mayor receptora de campesinos expulsados a la fuerza de sus pueblos por el recrudecimiento de la guerra, generando la más compleja crisis humanitaria que se haya vivido en el Valle de Aburrá. Las acciones colectivas en este momento fueron lideradas por una gama diversa de sectores sociales: desplazados, jóvenes y mujeres quienes

conformaron sus propias organizaciones para emprender acciones de reivindicación de sus derechos, apoyados por varias ONG, organizaciones sociales y grupos de derechos humanos que habían surgido en los años 80.

Entre sus reivindicaciones más urgentes estaban el derecho a la vida y a la no participación en la guerra; visibilizar los daños ocasionados por esta y exigir acciones por parte del Estado para atender a la población o para impedir nuevas modalidades de victimización. Buscaban también hacer un llamado al Estado colombiano y a la sociedad sobre la necesidad de iniciar procesos de diálogo y negociación a nivel nacional con la guerrilla y a nivel local promover acuerdos, pactos y negociaciones entre grupos armados (bandas, combos, milicias), así como recuperar espacios a la guerra y la violencia (CNMH; 2017, p. 363).

Un tercer momento de la movilización ciudadana se ubica entre 2006 y 2014. Tras la desmovilización de los grupos paramilitares y el fortalecimiento de espacios institucionales de participación como los Consejos Comunales y Locales de Planeación (Ley 152 de 1994), la movilización ciudadana tomó nuevos impulsos. Según informes de la Personería de Medellín y la Alcaldía de Medellín, entre 2010 y 2020 aumentó significativamente el número de organizaciones sociales formalmente registradas en la ciudad, en especial en comunas como San Javier, Belén, y Popular.

Un número importante de estas iniciativas reivindican la memoria como eje de resistencia frente a la pretensión de olvido. Este último período se destaca por la consolidación de las organizaciones sociales, sus denuncias sobre los daños causados por la guerra y la exigencia de justicia y reconocimiento de ese daño.

Los protagonistas fueron las víctimas del conflicto armado, particularmente las mujeres y jóvenes, y sus organizaciones. Gracias a la demanda continua de estas y al acompañamiento de ONG tanto locales como nacionales, se avanzó en el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, reflejado en el diseño institucional a partir de 2005 (Muñoz, 2015). Pero también el arte, la música, el graffiti, los performances, los festivales, las pequeñas y cotidianas acciones de memoria de los familiares y amigos han hecho que en Medellín se presenten acciones profusas y variadas para llamar la atención sobre el pasado, pero visto desde el presente y con el objetivo de evitar que ocurra nuevamente (CNMH, 2017, p. 393).

Actores armados y dinámicas del conflicto en la subregión

Los albores de la violencia en Valle de Aburrá

La violencia en el Valle de Aburrá aparece durante la época de la violencia bipartidista que azotó el país a mediados del siglo XX. Hay relatos de la literatura popular como el libro de autor anónimo: “Bajo el signo de Caín”, que narra los procedimientos de “los aplanchadores”, grupos compuestos por personas particulares y policías simpatizantes del partido Conservador, que realizaban actos violentos en barrios populares habitados por personas cercanas al partido Liberal. Con el periodo de

pacificación que encarnó la dictadura militar y el posterior acuerdo del “Frente Nacional”, la violencia política que padeció Medellín y el Área Metropolitana se fue reduciendo significativamente hasta mediados de la década del 50.

Pero para la siguiente década, la problemática de violencia política mutó a una violencia más estructural y social, expresada en la conformación de bandas o “galladas” juveniles. Para mediados de los años 60, la migración del campo a la ciudad, debido al desplazamiento forzado provocado por la violencia interpartidista y el acelerado proceso de industrialización de las grandes ciudades colombianas, promovió la conformación de asentamientos informales que fueron perseguidos por el Estado, y por ello crecieron sin el acompañamiento de la institucionalidad. Allí grupos de jóvenes sin oportunidades de estudio o trabajo optaron por organizarse en estructuras que poco a poco se fueron armando y con ello impusieron un régimen de terror en los barrios periféricos de la ciudad. Este va a ser el caldo de cultivo para los ejércitos y los grupos armados ilegales que se disputarán el territorio del Valle de Aburrá durante los siguientes 50 años.

Según lo consignó la Defensoría del Pueblo (2020), son cinco los ciclos de violencia que ha experimentado la capital, pero que han impactado al resto del Valle de Aburrá:

1. Antecedentes: las bandas juveniles y/o galladas.
2. Las milicias populares insurgentes.
3. Los carteles de la droga y las oficinas de cobro.
4. El paramilitarismo y la guerra contrainsurgente.
5. Consolidación del control territorial de la Oficina de Envigado y sus aliados.

Antecedentes: Las bandas juveniles y/o galladas

Estas primeras **formas de violencia organizada en el Valle de Aburrá eran ejercidas por jóvenes** dentro de los mismos barrios o en los vecinos. Estos jóvenes se encontraban mal armados, en el mejor de los casos contaban con armas de fuego cortas o caseras, pero con esto les bastaba para robar, violar mujeres, extorsionar y amedrentar a su comunidad inmediata, que no confiaba en la institucionalidad y menos en la Policía. Las bandas o galladas que se empiezan a configurar a finales de la década de los 60, fueron un problema de seguridad menor hasta principios de la década de los 80, cuando fueron mejorando su organización y generando escenarios de disputa con otras bandas del barrio o vecinas. Este escenario posibilitó la aparición de grupos de autodefensa barrial, que para mediados de la década de los 80 evolucionaron en lo que se conoció como las milicias populares.

Las milicias populares insurgentes

Como respuesta a la violencia ejercida por las bandas en sus propios barrios, los grupos insurgentes aprovecharon este vacío de autoridad para posicionar el modelo de milicia popular, que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) venía posicionando años atrás en Barrancabermeja. Aunque desde 1980 ya había células urbanas insurgentes muy consolidadas, y para 1985 ya había varias expresiones de autodefensa barrial, es para el año 1987 que se puede observar una consolidación de varios grupos de milicias populares en el control territorial de varios barrios del Valle de Aburrá. Para este periodo las

milicias populares recurrieron a la mal llamada “limpieza social”, para eliminar no solo integrantes de bandas, también a personas señaladas de ser ladrones, viciosos, violadores, entre otros comportamientos, que fueron violentamente perseguidos por las milicias y que le permitieron ganar tanto control territorial como la simpatía de algunas comunidades.

Entre 1993 y 1994, se dio el proceso de **desmovilización de algunas milicias populares** que operaban en Medellín y que ya funcionaban con relativa autonomía de los grupos insurgentes. Grupos como Milicias Populares del Valle de Aburrá, Milicias del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Independiente del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas, se acogieron a un proceso de negociación que desmovilizó a 650 integrantes. Más de 250 conformaron la cooperativa de seguridad Coosercom y cerca de 150 fueron asesinados sólo un par de años después. El experimento de permitir que estos jóvenes continuaran manejando la seguridad en sus barrios desde la legalidad, fracasó radicalmente.

A la par, y con mayor fuerza a partir de 1995, se da un proceso de expansión de un nuevo ciclo de milicias populares articulados a los grupos insurgentes armados y de otros independientes, como los Comandos Armados Populares (CAP) de la Comuna 13, que se conformaron a partir del año 1996. En este nuevo periodo de las milicias populares la disputa será contra la arremetida de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que, en alianza con combos y oficinas de cobro muy fortalecidas por el narcotráfico, comienzan a posicionarse en barrios de Medellín y municipios aledaños. La confrontación se extenderá hasta el año 2003, cuando queda desterrado el control militar de las milicias populares de todo el territorio del Valle de Aburrá.

A continuación, se presenta una lista de varias milicias que operaron en Medellín y su Área Metropolitana.

Tabla N°1

Estructuras milicianas. Antecedentes año 1980 a 2022: ciudad de Medellín		
Estructura	Barrios	
Milicias para el Pueblo y del Pueblo	• Popular • Pablo Sexto • Villa del Socorro • Playón Comuneros • La Francia • Santa Cruz	• Andalucía • Moscú • Doce de Octubre • Vereda Granizal (Bello).
Comandos Obreros Revolucionarios	• Santo Domingo Savio I • Santo Domingo Savio II • La Avanzada • Carpinelo • Carambolas	• La Esperanza • San Pablo • Loma del Seminario (Juan Pablo de Jesús) • San Benito (Sector La Minorista).

Los Comandos Obreros (EPL)	• Castilla • Guayabal • Santander • Tejelo	• Boyacá Las Brisas • París (Bello) • Barrio Nuevo (Bello)
Milicias Popular Valle de Aburrá	• Moravia • Miranda • El Bosque • Caribe	• Palermo • La Colinita • Guayabal
Brigadas Resistencia Popular	• Santa Cruz • Pablo Sexto	• La Rosa • Villa del Socorro
Comando de Resistencias	• Comuna 13 • Nuevo Conquistadores	• Eduardo Santos • El Salado
Comando Populares –EPL–	• Picacho	
Milicias Bolivarianas	• FURJA (Frente Urbano Rural Jacobo Arenas). • La Cruz • La Honda • Villatina • Bello Oriente • La Independencia • Santa Elena • Carpinelo • Vereda Granizal (Bello)	• Milicia Bolivariana del M-19 • Trece de Noviembre • Comuna 13 • Salado Comuna 8 • Carretera al municipio de Guarne.
Bloque Popular Miliciano Occidente –BPM–	• Belén Altavista • Violetas	• Belén Corazón

Fuente: construcción colectiva, taller 4 de marzo de 2019 sobre listado del Libro La Ciudad de Los Jóvenes, IPC, 1991

Los carteles de la droga y las oficinas de cobro

A partir de 1985, el **Cartel de Medellín le declaró la guerra al Estado colombiano**, desatando un periodo de violencia que se extendió hasta 1993, cuando en acciones conjuntas entre la fuerza pública y el grupo de narcotraficantes Perseguidos por Pablo Escobar (PEPES), lograron dar de baja a este narcotraficante y dismantelar la estructura armada y económica de este cartel. La estructura armada del Cartel se desarrolló a partir del fortalecimiento de varios combos y bandas del Valle de Aburrá, los narcos los fortalecieron en armas, en cursos de explosivos, en estructura organizativa y de inteligencia, trascendiendo en capacidad de generar violencia y terror en la ciudadanía.

El nombre que se le dio a estas estructuras fortalecidas fue el de “oficinas de cobro”, con el tiempo la palabra cobro fue desapareciendo y simplemente se hacía alusión a la oficina, como una estructura autónoma en materia militar y económica. Las oficinas que empezaron en la época del Cartel de Medellín fueron las que se aliaron con el paramilitarismo para derrotar a las milicias populares en el

Valle de Aburrá y fueron las que configuraron el modelo de control territorial y poblacional después de la expulsión de éstas hasta la actualidad.

El paramilitarismo y la guerra contrainsurgente

A pesar de que desde comienzos de la década de los 80, el paramilitarismo ya había sido ensayado como un proyecto en el Valle de Aburrá, a través de una macabra alianza entre el narcotráfico, poderes económicos y fuerza pública que dio origen a grupos como Muerte a Secuestradores (MAS), Amor por Medellín o Muerte a Jaladores de Carros (MAJACA), solo fue hasta 1997 cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se propusieron expulsar a las milicias populares de la subregión, asegurando control territorial y poblacional.

Al Bloque Metro se le encomendó esta tarea en un primer momento, incursionando en barrios de la Comuna 1, 8 y 13, donde había una presencia significativa de milicias del ELN, las Farc-EP y los CAP. A pesar de la violencia y de los fuertes enfrentamientos, el Bloque Metro no fue muy efectivo en este propósito pues para el año 1999, la dirección de las AUC constituye un nuevo bloque: el Cacique Nutibara, con el propósito de articular toda la criminalidad organizada, principalmente en torno al narcotráfico, en una lucha contrainsurgente común.

El inicio del nuevo milenio fue el periodo más violento que ha vivido el Valle de Aburrá en toda su historia: los dos bloques paramilitares, las oficinas y combos, la fuerza pública y empresarios de la subregión declararon la guerra frontal a las estructuras milicianas insurgentes. El año más difícil fue 2002, que tiene el récord más alto de homicidios en la subregión con 10 166 homicidios, en donde se presentaron más de 35 operaciones conjuntas entre paramilitares y fuerza pública. El caso del parqueadero Padilla es de los más representativos para ilustrar esta alianza, que a la postre tuvo éxito. La operación Orión, en octubre de 2002 fue el hito que puso final a la presencia milicianas en el Área Metropolitana, pero no terminó con las disputas entre actores armados.

Los dos bloques paramilitares ganadores de la guerra tenían diferentes visiones respecto a la lucha contrainsurgente y al papel del narcotráfico en ella. El Bloque Metro y el Cacique Nutibara se trenzaron en una disputa que terminó en 2004 con la derrota del primero, los sobrevivientes fueron obligados a integrar una nueva estructura junto con los vencedores, denominada Héroes de Granada, la cual se desmovilizó a mediados del año 2005. De esta forma se cerró el capítulo de las milicias populares y los bloques paramilitares en Medellín y el Valle de Aburrá, abriendo uno nuevo, el del control hegemónico de la Oficina de Envigado y de poderosos grupos de narcotraficantes.

Consolidación del control territorial de la Oficina de Envigado y sus aliados

Tal como lo planteó la Defensoría del Pueblo:

Una vez derrotadas las milicias populares, desmovilizados los bloques paramilitares de las AUC y aniquilada La Terraza, el proyecto de consolidación del control territorial por grupos armados de crimen organizado giró alrededor de la nueva versión de la Oficina de Envigado,

como eje articulador de la criminalidad organizada, pero también como consolidación del proyecto de control paramilitar. Pero en sentido amplio, se expandió como estrategia de control criminal y contrainsurgente a toda la ciudad y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 23).

Después de la desmovilización de los bloques de las AUC que operaron en el Valle de Aburrá: Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, el control territorial se le entregó a la Oficina de Envigado, que tenía el mismo jefe máximo de los bloques anteriores. Este modelo mezcló la coordinación de la criminalidad organizada con una estrategia de control contrainsurgente. Además, el modelo permitía la disminución significativa de las disputas entre estructuras locales junto con una reducción de las cifras de criminalidad, algo que favorecía a las autoridades.

Pero con la extradición de los grandes jefes de las AUC a los Estados Unidos, en mayo de 2008, el modelo de pacificación y de disminución de acciones violentas se rompió, debido a las disputas por acceder al control hegemónico de la Oficina de Envigado. Las confrontaciones entre las diferentes estructuras provocaron entre los años 2008 y 2012 la muerte de al menos 6000 personas, la mayoría jóvenes de los barrios populares del Valle de Aburrá.

Para 2013, se presentó un nuevo escenario de pactos entre las estructuras armadas ilegales que operan en el Valle de Aburrá, donde también participaron las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, llamadas por el Gobierno nacional Clan del Golfo, y los carteles mexicanos. Gracias a que ordenaron la cadena de producción y comercialización de las drogas, esto ha reducido significativamente la violencia en esta subregión, aunque no dejan de presentarse disputas menores y de baja duración entre grupos armados ilegales, las últimas confrontaciones fuertes se presentaron entre los años 2018 y 2019, en las zonas centro occidental y suroccidental de Medellín y en el municipio de Bello. Desde ese año se ha mantenido un relativo escenario de convivencia entre los diferentes grupos armados que tienen presencia en el territorio del Valle de Aburrá.

Mesa de diálogo con el Gobierno nacional: la esperanza de la Paz Total

El 4 de noviembre de 2022, el Congreso de la República profirió la **Ley 2272, conocida como Ley de Paz Total**, que busca convertir la política de paz en una política de Estado. En ese orden de ideas, el articulado plantea que, dentro de la búsqueda de la paz que emprenda cualquier gobierno, este podrá entablar negociaciones tanto con grupos armados organizados al margen de la ley⁸², donde el proceso es eminentemente político y con quienes se pactan acuerdos de paz, así como con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto⁸³, con el fin de

⁸² Esta Ley define a los grupos armados organizados al margen de la ley a aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita desarrollar operaciones militares sostenidas y concertadas (Ley 2272, 4 de noviembre de 2022).

⁸³ Según esta Ley, estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto son aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo, que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y cumplan funciones en una o más economías ilícitas (Ley 2274, 4 de noviembre de 2022)

lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.

Bajo este marco normativo, a finales de 2022, **el Gobierno nacional inició diálogos exploratorios durante casi nueve meses con integrantes de grupos armados organizados y estructuras criminales que delinquen en Medellín y el Valle de Aburrá que se encontraban presos en cárceles del país.** Producto de lo anterior fue la instalación formal, el 2 de junio de 2023, en la cárcel de mediana y máxima seguridad de Itagüí, del Espacio de Conversación Socio Jurídica de Medellín y Valle de Aburrá, donde tienen asiento delegados de la Alta Consejería para la Paz, en representación del Gobierno nacional, y 17 delegados de igual número de estructuras criminales de alto impacto, muchos de los cuales se encontraban reclusos en este centro penitenciario del sur del Valle de Aburrá y quienes dicen hablar en representación de cerca de 14 000 integrantes.

Estas estructuras criminales hacen parte de la Oficina de Envigado, quienes en el pasado realizaron intentos infructuosos de iniciar diálogos con los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018) e Iván Duque (2018-2022). Pero fue el presidente Gustavo Petro (2022-2026) quien decidió avanzar en esta dirección, aunque sin una metodología clara que guíe las conversaciones ni un marco jurídico que permita resolver, por un lado, la situación sociojurídica de quienes participen en un eventual sometimiento a la justicia; y de otro, el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus actividades ilegales.

El Espacio de Conversación también ha enfrentado dificultades logísticas por cuenta del cambio de Alto Consejero⁸⁴, que ha impactado en la dinámica de trabajo de los negociadores, quienes denunciaron en su momento estancamientos y falta de avances en el proceso (VerdadAbierta, 6 de septiembre de 2023). Con todo y ello, en noviembre de 2024 el Espacio produjo su primer hecho concreto de paz: el piloto territorial contra la extorsión.

Este consistió en suspender la explotación sexual, las hostilidades y el cobro extorsivo que padecen diversos sectores comerciales en por lo menos 25 barrios de Medellín entre los meses de noviembre de 2024 y enero de 2025. Los resultados del piloto llevaron a los negociadores del Gobierno nacional a plantear una prórroga de tres meses más y extender su alcance a barrios de otros municipios del Valle de Aburrá. Los delegados de las estructuras criminales accedieron, entró en vigencia en febrero de 2025 y se extendió hasta mayo del mismo año.

De igual manera, los delegados del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación celebran la histórica reducción de homicidios registrada en Medellín y el Valle de Aburrá entre 2022 y 2024⁸⁵, señalando que lo anterior es fruto de las negociaciones entabladas con las estructuras criminales. Pese a las divergencias que este proceso ha generado entre el Ejecutivo y los gobiernos municipales del Valle de Aburrá y del departamento, las negociaciones avanzan en medio de la incertidumbre jurídica y política.

⁸⁴ Las negociaciones iniciaron con Danilo Rueda como Alto Consejero para la Paz, quien ocupó este cargo entre julio de 2022 y noviembre de 2023, fecha en que fue reemplazado por Otty Patiño.

⁸⁵ Según el Sistema de Información para la seguridad y la Convivencia (SISC) de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en 2021 se cometieron en el Distrito unos 405 homicidios; en 2022 la cifra se ubicó en 391; para 2023 la cifra fue de 378 mientras que en 2024 fue de 329.

Por un lado, el Gobierno nacional avanza en la expedición de un proyecto de ley para presentar ante el Congreso de la República, que le permite contar con un marco jurídico sólido y legítimo para el sometimiento de estas estructuras criminales; de otro lado, **los voceros de la Oficina de Envigado continúan expresando su voluntad de paz y en la necesidad de materializar dicho anhelo en hechos concretos de paz**, como el cese del reclutamiento y utilización indebida de niños, niñas y adolescentes, desterrar la venta de sustancias de las instituciones educativas, cesar definitivamente con los cobros extorsivos, entre otros.

Las víctimas del Valle de Aburrá: principales hitos de hechos victimizantes

Al contrastar los principales hitos y ciclos de violencia provocados por los actores armados en el Valle de Aburrá, hay plena correspondencia con los años en los que se provocaron los picos más altos de hechos victimizantes, según las bases de datos de la Unidad para las Víctimas. El primer pico comienza en 1985, año en el que se abre el registro y que coincide con la declaratoria de guerra del Cartel de Medellín contra el Estado colombiano y la consolidación del proyecto miliciano insurgente.

El siguiente pico coincide con el escalamiento de esta confrontación entre los años 1991 y 1993, cuando Medellín tuvo una tasa de homicidios por encima de los 380 por cada cien mil habitantes. Pero la tasa más alta de homicidios en el Valle de Aburrá y de otros hechos como ataques terroristas, secuestros y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) se produjo para el año 2002, cuando en toda la subregión se registraron 10 166, este fue el año de mayor actividad conjunta entre la fuerza pública y el paramilitarismo, el año de las operaciones Estrella Roja, Mariscal, Orión y otras 30, en donde al menos la inteligencia fue aportada por grupos criminales al servicio de estructuras paramilitares que operaron en el Valle de Aburrá. **Es decir, el periodo más violento en la historia de la subregión no fue el protagonizado por el Cartel de Medellín, sino por la expansión del paramilitarismo.**

El tercer pico alto en hechos victimizantes se presentó entre los años 2009 y 2012, coincidiendo con el periodo de disputas al interior de la Oficina de Envigado por el ejercicio de un control absoluto sobre la estructura, periodo conocido como la guerra entre alias “Sebastián” y alias “Valenciano”, con una tardía incursión de las AGC para 2011, año donde se registra un pico en el número de homicidios en el Valle de Aburrá con 1063 casos, pero muy por debajo de la cima de la década anterior, representando una décima parte. No obstante, algunos hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, las amenazas, los atentados terroristas, los enfrentamientos o combates, registraron para este periodo sus máximos históricos.

Conclusiones (preliminares)

Luego de analizar cada una de las nueve subregiones del departamento y como un ejercicio de observación, análisis y trazabilidad de la conflictividad en Antioquia, es claro que **nuestro departamento ha sido un fortín en el cual las economías extractivas, ilegales y criminales** han dominado la conflictividad armada, a partir de la cual los sujetos que habitan estos territorios han sido víctimas directas de la guerra y el control por el uso y la disposición de la tierra.

Históricamente Antioquia ha sido un **corredor estratégico** para los armados y el capital gracias a su ubicación estratégica, a partir de sus grandes bondades ecosistémicas y corredores naturales, lo que ha permitido la movilidad de los grupos armados, la cooptación territorial para el desarrollo de proyectos económicos y el tráfico de bienes lícitos e ilícitos.

La siembra y el procesamiento de la hoja de coca, para su posterior exportación, y la explotación de minerales estratégicos y ricos de la subregión, ha hecho que subregiones como el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, el Urabá y el Valle de Aburrá tengan aumentos significativos en sus índices de violencia y de necesidades básicas insatisfechas en las comunidades que habitan estos territorios.

Así mismo, **el despojo y la concentración de la tierra** es otro de los factores que preocupa en el departamento. El uso de grandes extensiones de tierra para la siembra de hoja de coca, la ganadería, el monocultivo y otras actividades económicas ha exacerbado la desigualdad y la "acumulación por desposesión", generado nuevas victimizaciones en las comunidades y persecución directa en los y las lideresas que han luchado por décadas por tener tierras productivas al servicio de la comunidad.

Otro de los elementos que preocupa es la **estigmatización, hostigamiento y violencia contra los movimientos sociales**. Líderes y lideresas campesinas, indígenas, afrodescendientes y defensores y defensoras de derechos humanos siguen siendo blanco de amenazas ante la exigibilidad de sus derechos y la de la naturaleza como garante de vida.

A pesar de que en 2016 el Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc-EP fue un escenario para construir paz y crear nuevos modelos de vida en los territorios, **los vacíos de poder institucional y la poca presencia integral del Estado** en estos territorios, han recrudecido la violencia justamente por ese control territorial y las diversas economías ilícitas que se tejen, de manera particular en cada subregión. Es un llamado a evaluar cuán importante debe ser cumplir con los seis mandatos firmados en ese pliego y que hoy siguen estando a merced de los gobiernos de turno.

Es importante reconocer **los esfuerzos del actual gobierno de Gustavo Petro por construir una apuesta de paz total y paz urbana**, para el caso del Valle de Aburrá, que evidentemente ha impactado en la disminución de cifras de violencia y conflictividad territorial pero que se quedan cortos ante los incalculables daños que han dejado más de 50 años de guerra y que hoy tiene nuevos actores y nuevas conflictividades por el uso y la disposición territorial de las economías.

Referencias

- Alonso Espinal, M.A. (1997) Conflicto armado y configuración regional: el caso del Magdalena Medio. Estudios Políticos (02) 87-112.
- Antioquia Cómo Vamos & Comfenalco Antioquia. (2023). Dinámica laboral Magdalena Medio Antioqueño. Informe de dinámica laboral de las nueve subregiones del departamento de Antioquia, 2022-2023. [PDF].
- Antioquia Cómo Vamos. (2024). Informe de calidad de vida de Antioquia 2023. [PDF].
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (S.F). Historia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá Recuperado de: <https://www.metropol.gov.co/area/paginas/somos/historia.aspx>
- Camacho, A., & Pérez, S. (2014). Elementos para la construcción de la visión Urabá, biodiversidad y servicios ecosistémicos como base para el desarrollo, la sostenibilidad y el bienestar. Informe final de consultoría CPS 164_303PS. Bogotá D.C, Colombia: Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA- e Instituto Von Humbolt.
- Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. (2023). Concepto económico Oriente Antioqueño. [PDF].
- Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. (S.F). Información del Oriente y sus ventajas competitivas. Recuperado de: <https://ccoa.org.co/sobreelorientel/>
- Centro de Fe y Culturas & Conciudadanía. (2020). Suroeste antioqueño: un conflicto silenciado. Aproximación a la construcción de memoria histórica del conflicto armado en el Suroeste antioqueño (1984-2016). Medellín, Colombia: Publicaciones VID.
- Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH. (2010). Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997. Bogotá, Colombia: Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH. (2017). Medellín: memorias de una guerra urbana. Bogotá, Colombia: CNMH, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad EAFIT, Universidad de Antioquia.
- Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH. (2019). Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Bogotá, Colombia: CNMH.
- Cinturón Occidental Ambiental -COA. (2020). Suroeste de Antioquia territorio sagrado para la vida. Informe sobre el conflicto social y armado en el suroeste de Antioquia. [PDF].
- Cinturón Occidental Ambiental -COA. (22 de agosto de 2014). Cinturón Occidental Ambiental Territorio Sagrado. Recuperado de: <https://coateritoriosagrado.org/cinturon-occidental-ambiental-coa/>
- Comfenalco Antioquia; Ministerio del Trabajo. (2017). Dinámica laboral subregión Norte antioqueño. Medellín, Colombia: Comfenalco Antioquia. [PDF].
- Comisión Interclesial de Justicia y Paz -CIJL; Corporación Jurídica Libertad -CJL; Fundación Forjando Futuros -FFF; & Instituto Popular de Capacitación. (2019). Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá. Informe para la Comisión de la Verdad. [PDF].
- Congreso de la República. (4 de noviembre de 2022). Política de Paz Total (Ley 2272 de 2022). Bogotá, Colombia: Diario Oficial N° 52208.
- Consejo Territorial de Planeación de Antioquia -CTPA; Universidad de Antioquia; Gobernación de Antioquia. (S.F). Perfil de desarrollo subregional, subregión Valle de Aburrá. [PDF].
- Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -Cornare. (2015). Análisis socioeconómico del Oriente antioqueño (Anexo N°1). Plan de crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima para el Oriente antioqueño. [PDF].
- Corporación Jurídica Libertad. (2020). Militarización y estrategia paramilitar en la reconfiguración política y territorial del Oriente antioqueño. Medellín, Colombia: Corporación Jurídica Libertad.
- Cruz B., R. (2016). ¿Estado débil, Estado ausente o reconfiguración del campo estatal local?: aproximaciones al fenómeno “Bacrim” en Cáceres, Cauca y Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, entre los años 2006-2013. [Tesis de maestría] Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- Cruz B., R. (2019). El Paramillo, un nudo de problemas. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://disputas-tierra-ante-justicia.verdadabierta.com/el-paramillo-un-nudo-de-problemas/>
- Cruz, R. (S.F). Las chatarreras, cara femenina de la minería en Segovia. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/especiales-v/2016/mujeres-guerra/segovia-mujeres-minas-oro.html>
- Dávila, J. et al. (2021). La guerra en movimiento. Tomas guerrilleras y crímenes de guerra en la ejecución del plan estratégico de las Farc-EP en el Tolima (1993-2002). Bogotá, Colombia: Editorial Dejusticia.
- Defensoría del Pueblo. (2014). Informe de Riesgo 012-14AI. Medellín, Colombia: Sistema de Alertas Tempranas

- (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
- Defensoría del Pueblo. (2018). Alerta Temprana de Inminencia 028-18. Medellín, Colombia: Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
 - Defensoría del Pueblo. (2019). Alerta Temprana 002-19. Medellín, Colombia: Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
 - Defensoría del Pueblo. (2020). Alerta Temprana 004-2020. Medellín, Colombia: Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
 - Departamento Administrativo Nacional de Estadística -Dane. (2018). Censo Nacional de Población y Vivienda. Recuperado de: <https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/>
 - Franco Restrepo, V. (2009). Orden contrainsurgente y dominación. Medellín, Colombia: Siglo del Hombre Editores.
 - Fundación Ideas para la Paz. (2017). Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición. Bogotá, Colombia: FIP. [PDF].
 - Gallego Castro, J. C. (1 de febrero de 2023). La muerte y reclutamiento de jóvenes preocupan en el Oriente antioqueño. Agencia de Prensa IPC. Recuperado de: <https://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/la-muerte-y-reclutamiento-de-jovenes-preocupan-en-el-oriente-antioqueno/>
 - Giraldo Buitrago, G. (Coord). (2002). Memorias escuela de gobierno de Antioquia. Proyecto Sistema Nacional de Capacitación Municipal. Escuela de Gobierno del Occidente antioqueño. [PDF].
 - Hincapié Jiménez, S. M. (2008). Democracia y poder constituyente: movimiento constituyente de Antioquia. Medellín, Colombia: Instituto Popular de Capacitación.
 - Instituto de Estudios Regionales -INER-. (2007). Occidente desarrollo regional: una tarea común universidad región. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia.
 - Instituto Popular de Capacitación -IPC-. (2021). Segregación y vaciamiento: una estrategia del capital y los armados para ordenar y explotar el Bajo Cauca. Informe. [PDF].
 - Instituto Popular de Capacitación -IPC. (2006). Píldoras para la memoria: violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Medellín, Colombia: Instituto Popular de Capacitación.
 - Instituto Popular de Capacitación -IPC. (2021). Segregación y vaciamiento: una estrategia del capital y los armados para ordenar y explotar el Bajo Cauca. Informe. [PDF].
 - Medellín Cómo Vamos. (3 de diciembre de 2021). Estos son los resultados del informe de indicadores de calidad de vida para el Valle de Aburrá, 2020. Recuperado de: https://www.medellincomovamos.org/informe-linea-de-base-indicadores-calidad-de-vida-valle-de-aburra?utm_source=chatgpt.com
 - Medina Gallego, C. (2011). Farc-EP flujos y reflujos: la guerra en las regiones. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, División de Investigación, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Instituto Unidad de Investigaciones sociojurídicas Gerardo Molina (UNIJUS).
 - Molano Bravo, A. (2017). De río en río: vistazo a los territorios negros. Bogotá, D.C, Colombia: Aguilar.
 - Museo Nacional de Colombia. (23 de febrero de 2023). Hace 60 años...la masacre de Santa Bárbara. Recuperado de: https://www.museonacional.gov.co/noticias/Paginas/Santa_Barbara.aspx
 - Naranjo, P. (22 de febrero de 2024). Abatido alias “Terror”, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, junto a otros cinco miembros del grupo criminal. Infobae. Recuperado de: <https://www.infobae.com/colombia/2025/02/22/cayo-abatido-alias-terror-cabecilla-del-clan-del-golfo-en-el-magdalena-medio-junto-a-otros-cinco-miembros-del-grupo-criminal/>
 - Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina -OCMAL. (9 de agosto de 2013). El atractivo del Cinturón de Oro del Cauca Medio. Recuperado de: <https://www.ocmal.org/el-atractivo-del-cinturon-de-oro-del-cauca-medio/>
 - Oficina en Colombia de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito -UNODC. (2023). Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2023. Informe [PDF].
 - Open AI. (2025). ChatGTP (GTP-4o). [Minería de alto tenor]. Recuperado de: <https://chatgpt.com/c/6868005b-5e80-800a-9645-4fd32fb903dd>
 - Paisminero.com. (11 de marzo de 2024). El Clan del Golfo va ganando la guerra subterránea del oro en Buriticá. Paisminero.com. Recuperado de: <https://www.paisminero.com/mineria/oro-y-otros-minerales/27504-el-clan-del-golfo-va-ganando-la-guerra-subterranea-del-oro-en-buritica>
 - Peña Montoya, P. (12 de agosto de 2021). La sombra de los “Doce Apóstoles” aún pesa sobre las víctimas de Yarumal: Sergio Mesa. Hacemos Memoria. Recuperado de: <https://hacemosmemoria.org/2021/08/12/la->

sombra-de-los-12-apostoles-aun-pesa-sobre-las-victimas-de-yarumal-sergio-mesa/

- Perdomo, M.S. (22 de octubre de 2017). Movete, una resistencia heredada. Periferia. Recuperado de: <https://periferiaprensa.com/movete-una-resistencia-heredada/>
- Proantioquia et al. (2019). Organizaciones sociales de Antioquia: acción en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). [PDF].
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. (2010). Oriente antioqueño: Análisis de la conflictividad. Medellín, Colombia: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.
- Restrepo García, F. E. (2021). Informe sobre el conflicto armado en el Oriente antioqueño. Entre la movilización social y la guerra. Medellín, Colombia: Corporación Conciudadanía.
- Restrepo García, F. et al. (2022). Nuevos órdenes, viejas disputas. Informe anual sobre la situación humanitaria en el Oriente antioqueño 2018-2021. Medellín, Colombia: Conciudadanía.
- Ríos, D. (22 de febrero de 2022). Denuncian asesinatos de 22 reclamantes de tierra desde entrada de Ley de Restitución. Radio Nacional de Colombia -RTVC-. Recuperado de: <https://www.radionacional.co/regiones/antioquia/restitucion-tierras-22-reclamantes-asesinados-uraba>
- Rutas del Conflicto. (8 de abril de 2023). Masacre de Cañaveral y Altos de Manila. Rutas del Conflicto. Recuperado de: <https://rutasdelconflicto.com/masacres/canaveral-altos-manila>
- Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. (25 de enero de 2019). Sentencia contra el postulado Germán Antonio Pineda López – Bloque Suroeste de las AUC. [MP Jesús Gómez Centeno].
- Sánchez Romero, D. (23 de abril de 2025). Once campesinos citados en Fiscalía por defender el territorio en Jericó. Agencia de Prensa IPC. Recuperado de: <https://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/once-campesinos-citados-en-fiscalia-por-defender-el-territorio-en-jerico/>
- Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz. (12 de febrero de 2020). Sentencia priorizada Javier Alonso Quintero “Manguero” y otros, Metro ACCU. [MP Juan Guillermo Cárdenas].
- Unidad de Planeación Minero-Energética -UPME. (2025). Sistema de Información Minero Colombiano - SIMCO. Volúmenes de explotación de minerales asociados a pagos de regalías: oro. Recuperado de: <https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/oro.aspx>
- VerdadAbierta. (24 de septiembre de 2010). La máquina de guerra de Ramón Isaza. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/la-maquina-de-guerra-de-ramon-isaza/>
- VerdadAbierta. (22 de septiembre de 2011). Revelaciones del caso Villegas. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/revelaciones-del-caso-villegas/>
- VerdadAbierta. (17 de abril de 2012). La cuota de “HH” en el exterminio del Bloque Metro. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/la-cuota-del-bloque-calima-en-la-extincion-del-bloque-metro/>
- VerdadAbierta. (18 de noviembre de 2012). Frente 5 de las Farc, protagonista de la guerra. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/frente-5-de-las-farc-protagonista-de-la-guerra-en-antioquia/>
- VerdadAbierta. (21 de noviembre de 2012). Nordeste antioqueño, en guerra por el oro. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/nordeste-antioqueno-en-guerra-por-el-oro/>
- VerdadAbierta. (15 de abril de 2013). El Bloque Metro llevó el terror a Yolombó. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/el-bloque-metro-llevo-el-terror-a-yolombo/>
- VerdadAbierta. (22 de agosto de 2013). Desaparecidos del Bloque Mineros, en el río Cauca. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/los-desaparecidos-del-bloque-mineros-que-se-llevo-el-rio-cauca/>
- VerdadAbierta. (14 de enero de 2014). “Caparrapos”: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/caparrapos-fuerza-que-desestabiliza-el-bajo-cauca-antioqueno-y-el-sur-cordobes/>
- VerdadAbierta. (17 de febrero de 2015). ¿Está vigente agenda de las Farc en el Nudo de Paramillo? VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/esta-vigente-agenda-de-las-farc-en-nudo-de-paramillo/>
- VerdadAbierta. (3 de agosto de 2015). El misterioso frente Suroeste de las AUC. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/el-misterioso-frente-suroeste-de-las-auc/>
- VerdadAbierta. (24 de agosto de 2015). Los secretos del Clan Úsuga. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/los-secretos-del-clan-usuga/>
- VerdadAbierta. (28 de mayo de 2018). Movimiento Cívico del Oriente antioqueño: una persecución que será resarcida. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/movimiento-civico-del-orient-antioqueno-una-persecucion-sera-resarcida/>

- VerdadAbierta. (6 de septiembre de 2023). “Es el momento de la paz total urbana”: voceros de la Oficina de Envigado. VerdadAbierta. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/es-el-momento-de-la-paz-total-urbana-voceros-de-la-oficina-de-envigado/>
- Vicepresidencia de la República. (2001). Panorama actual del Magdalena Medio. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH). Recuperado de: https://2014.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/magdalenamedio/index.htm
- Zapata, C.; Mendoza, X. & Barrios, P. (2023). Derechos humanos y debida diligencia en la minería aurífera en el río Nechí. Relecturas, 44, 11-99



MISEREOR
DAS HILFSWERK

 **SOLSOC**



Béllica
socio para el desarrollo